

Las fisuras del neoliberalismo maduro chileno

Trabajo, “Democracia protegida” y conflictos de clases

Por Franck Gaudichaud*

* Doctor en Ciencia Política (Universidad Paris 8), Magister en Historia (Universidad Bordeaux 3), académico en Estudios latinoamericanos en la Universidad de Grenoble Alpes (Francia). En delegación por el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS – Francia) en PACTE (Unidad mixta de investigación 5194) e investigador invitado por la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad de Chile (2014-2016). Contacto: <franck.gaudichaud@u-grenoble3.fr>.

Resumen

El presente ensayo tiene como objetivo, a más de 40 años del golpe de Estado, realizar un estudio crítico de la dinámica y fisonomía del capitalismo neoliberal “maduro” chileno, un régimen político, socio-económico y cultural atravesado hoy por grandes tensiones y contradicciones. Este estudio pretende analizar el proceso de *maduración* y *fisura* parcial de este “modelo”, con un especial enfoque puesto en el antagonismo capital – trabajo, el sindicalismo y el despertar de los movimientos sociales. Se trata de mostrar las líneas de fuerza y resquebrajamiento de esta estructura sociopolítica, su historia y contradicciones, con la hipótesis que el reciente regreso del conflicto de clases después de décadas de “paz neoliberal”, evidencian una posible crisis de legitimidad de más largo aliento, pero sin por eso constituir por el momento un posible "derrumbe" del modelo hegemónico.

Palabras clave: Chile, capitalismo, neoliberalismo, trabajo, sindicalismo, movimientos sociales, democracia, alternativas

Abstract

The purpose of this essay is to realize a critical study about the dynamics and features of the “mature” Chilean neoliberal capitalism more of 40 years after the coup d’état. This late Neoliberalism is currently crossed by great tensions and contradictions. This study aims at analyzing the maturing process and partial rupture of this “model” with special emphasis on capital – labor antagonism, but also looking at the reactivation social movement. The point is to show the lines of force and rupture of this sociopolitical structure, its history and contradictions. The main hypothesis of the essay argues that the recent return of social unrest after decades of “neoliberal pax” is the result of a potential longer lasting crisis of legitimacy, yet without constituting for now a potential “falling” of the hegemonic model.

Key words: Chile, neoliberal capitalism, labor union, social movements, democracy, alternative

Plan del Ensayo

Introducción. A más de 40 años del golpe: ¿el “modelo” chileno en crisis?

1/ La vía chilena al neoliberalismo: de la (contra)revolución capitalista cívico-militar a la democracia neoliberal protegida actual

2/ Génesis del capitalismo neoliberal “maduro” y nuevas dominaciones sociales

3/ ¿El retorno de la clase obrera? Trabajadores, recomposiciones sindicales limitadas y luchas estratégicas emblemáticas

4/ Ciudadanía “neoliberalizada”, crisis de legitimidad, despertar de los conflictos sociales

5/ Breve comentario sobre el gobierno Bachelet: progresismo transformista, nuevo ciclo político y continuidad de una dominación

A modo de conclusión. ¿Derrumbe o construcción estratégica? Los desafíos de la creación de alternativas “raizales”

“Con una metralleta en la raja, todo Chile trabaja”

Sergio de Castro, Ministro de Hacienda de la dictadura entre 1977 y 1982.

“Debemos reconocer que no hemos logrado superar las grandes desigualdades que nos afectan, ni terminar con los privilegios y abusos en distintos ámbitos de nuestra vida y de la marcha del país”

Michelle Bachelet, Presidenta de la República, 21 de mayo de 2014, discurso ante el Congreso.

Introducción. A más de 40 años del golpe: ¿el “modelo” chileno en crisis?¹

11 de septiembre en Chile. Una fecha cargada de olvido y de memoria: memoria viva, memoria herida, memoria en lucha. Un mes lleno de dolor y odio, de rabia y miedo. Una fecha simbólica que nos recuerda que a más de cuatro décadas del golpe de Estado, la dictadura no es sólo pasado, sino presente, ya que en ciertas medidas “el pasado no pasa”, a pesar de los años y de los profundos cambios vividos por Chile desde 1990 (Compagnon, Gaudichaud, 2008). En 2014, el mes de septiembre fue particularmente agitado y tenso.

El lunes 8, una bomba explota en la estación de metro “Escuela Militar” de Santiago, dejando 14 personas heridas y provocando pánico en la ciudadanía de la capital. Inmediatamente, los principales medios de comunicación alimentan la confusión: en la noche, un reportaje televisivo emitido por el Canal 13 no duda en vincular directamente el atentado con varias organizaciones del movimiento estudiantil, sin apoyarse en ningún tipo de investigación; en la mañana siguiente, y acompañando la tendencia a la criminalización de la protesta social, el diario conservador *La Segunda* destaca en su portada en todos los kioscos del país: “*El retorno del miedo*”... Una estrategia de la tensión nutrida por el duopolio casi perfecto que domina el campo mediático chileno². El 10 de septiembre, un senador recalca, a *mezzovoce* y casi disculpándose, una reflexión que ya está dando vuelta en las redes sociales:

“lo que corresponde es que se estudien la distintas hipótesis y, así como algunos han apuntado a sectores anarquistas, e incluso algunos han apuntado irresponsablemente hacia los estudiantes, nosotros también creemos que es importante analizar lo que podría ocurrir con células de ex-agentes ligados a la inteligencia militar o la dictadura”³.

Ese mismo día, 24 horas antes de las conmemoraciones, aparece un inserto en el periódico *La Tercera* firmado por oficiales de las Fuerzas Armadas en retiro, proclamando su reivindicación del golpe militar y condenando los procesos judiciales en contra de altos militares por su actuar en contra de los derechos humanos. Los términos son claros y transparentes:

"Saludamos a todos los chilenos en el día que señala la fecha fundacional del Chile del siglo XXI. La tarea de reconstrucción efectuada, por toda la Nación, de las FF.AA. y de Orden a

¹ Agradecemos a Rafael Agacino, Miguel Urrutia, Luis Martín-Cabrera, Rocío Gajardo y Sebastián Osorio por su lectura y/o comentarios críticos, como también el apoyo de PACTE (Unidad mixta de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica – CNRS, Francia) y de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad de Chile, en particular el Equipo interdisciplinario de Estudios en “Movimientos sociales y poder popular” (ver: <<http://poderymovimientos.cl>>). Por cierto, las ideas vertidas en este ensayo son de mi única responsabilidad.

² Ver la reacción de rechazo de los dirigentes estudiantiles frente a esta manipulación, como las duras críticas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. En: <www.eldinamo.cl/2014/09/10/ex-dirigentes-rechazan-reportaje-de-canal-13-que-vincula-bombazos-con-movimiento-estudiantil>.

³ Jiménez Marcela, 2014 *El Mostrador*, 10 de septiembre. En: <www.elmostrador.cl/pais/2014/09/10/quintana-sincera-tesis-y-advierte-que-tras-bombazos-pueden-haber-reactivacion-de-ex-agentes-de-la-dictadura>.

partir del 11 de septiembre de 1973, sigue siendo reconocida por los chilenos amantes del orden y la seguridad"⁴.

Los fieles partidarios del fallecido -e impune- dictador no se equivocan: la obra de la Junta fue precisamente *fundacional* para la sociedad chilena actual. El mismo 11 de septiembre, mientras tanto se desarrollan conmemoraciones oficiales, partidarias o de organismos de la sociedad civil y de Derechos Humanos, algunos jóvenes encapuchados de barrios populares se enfrentan a Carabineros (policía militar) con barricadas incendiarias y cocktails molotov, como todos los años, ritualmente. En las calles céntricas de Santiago, en los supermercados, la gran mayoría parece poco sensible a esa fecha y sigue su rutina, imperturbable... Hoy las imágenes del golpe parecen lejanas para muchos ciudadanos: 80% de la población no vivió el 11 de septiembre de 1973 y sus violencias o tenía menos de 10 años cuando ocurrió este traumático acontecimiento. Incluso, la transición post-autoritaria de 1989-1990 parece algo de otra época para una generación que nació en “democracia” y sólo conoce la sociedad “moderna” actual, poblada de *malls* climatizados, educación-mercado, nuevas tecnologías de la información, endeudamiento masivo y consumismo. La imagen internacional proyectada de Chile en los grandes foros mundiales es de un país “moderno”, con una democracia estable y sólida. En no pocos casos, el país que vio nacer a Violeta Parra es presentado como ejemplo a seguir. Esta “imagen-país”, tan cotizada en los mercados internacionales como garante de jugosas inversiones extranjeras directas y bajo “riesgo” para las bolsas del primer mundo, ha sido reforzada por la integración del país andino a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2010. Un “privilegio” que sólo comparte con México en América Latina. El 23 de abril de 2013, Erik Solheim, presidente del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, afirmaba, ante un selecto grupo de medios de comunicaciones internacionales, que:

"Chile tiene un rol muy importante por desempeñar compartiendo su gran experiencia en promoción de la democracia, en un rápido desarrollo económico y en sacar a la gente de la pobreza. Es un gran ejemplo de inspiración para el resto de Latinoamérica y también para el mundo" (EFE, 2013).

El tecnócrata noruego añadió que una de las fortalezas del país serían sus empresas y la presencia de una sociedad civil "muy fuerte".

Acaso, ¿desde el fin del régimen militar no se ha logrado disminuir, de manera contundente, la pobreza, que pasó, según estadísticas oficiales, del 38,6% en 1990 a un 14,4%, en 2013⁵? ¿No es que las elites chilenas pueden vanagloriarse de una baja tasa de desocupación, articulada a un fuerte crecimiento económico, impulsado por un empresariado nacional muy concentrado y un régimen fiscal extremadamente favorable a los capitales internacionales? De hecho, Chile ha firmado varios convenios internacionales sobre protección de los derechos humanos y, a la vez, detenta el récord en el mundo de cantidad de tratados de libre comercio firmados ¿La democracia chilena no es reiteradamente presentada, por medios de comunicación y científicos sociales, como producto de una transición modelo, basada en amplios acuerdos y consensos entre las fuerzas políticas que gobiernan desde entonces?

4

2014 *La Tercera* (Santiago) 10 de septiembre.

5 Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2013, la pobreza en Chile medida por ingresos, alcanza un 14,4% (unos 2,5 millones de chilenos), mientras que desde el punto de vista de la "pobreza multidimensional" (mide educación, salud, trabajo y seguridad social y vivienda), esta llega hasta el 20,4% (Ministerio del desarrollo social, 2015).

Empero, tras el lindo escaparate del *chilean way* subyace el secreto no contado de tanta acumulación de riquezas, expansión del consumo y crecimiento sostenido de productividad: una explotación feroz del trabajo y de la naturaleza por el capital nacional y transnacional. Como lo intentaremos subrayar en las próximas páginas, los exitosos frutos que se arroja el mentado “jaguar” chileno -y sus empresarios- provienen en rigor de una extracción de plusvalía descomunal sobre el trabajo vivo, acoplada a un modelo primario-exportador extractivista, que *in fine* limita la economía chilena a ser un eslabón altamente dependiente del mercado mundial, sin capacidad de transformación-valoración de sus materias primas. Es dentro de los efectos de tales dinámicas que se deben entender varias de las “irracionalidades” más comentadas del capitalismo neoliberal chileno: inmensas desigualdades⁶ y condiciones de empleo desastrosas para las grandes mayorías; debilitada relación entre política, participación popular y democracia; mercantilización de todos los espacios de vida; disconformidad creciente de una nueva generación que parece haber perdido el miedo; ausencia de legitimidad de un sistema institucional moldeado en dictadura, consecuencias medioambientales del sistema primario-exportador, etc. Grietas múltiples que al calor de las movilizaciones que ha vivido el país desde los años 2006-2007 parecen haberse transformado en fisuras abiertas el año 2011, con sus masivas luchas sociales y la irrupción en las calles de un descontento acumulado, particularmente en la juventud. En ese momento, algunos autores anunciaron categóricamente el fin del “modelo”, la próxima llegada de una primavera democrática. Y no pocos analistas todavía piensan que la victoria electoral de la presidenta Bachelet en 2013 y el actual gobierno de la “Nueva Mayoría”, con su programa de reformas, son la prolongación de este nuevo ciclo político. ¿Será cierta esta primera impresión? ¿Y qué pensar de la escasa presencia en estos diversos análisis de un actor esencial en la historia chilena: los asalariados organizados, el movimiento sindical y el conflicto capital-trabajo? Hoy, cuando el gobierno despliega sus principales medidas, ¿cómo analizar la coyuntura pero también, más profundamente, la construcción histórica de la sociedad neoliberal chilena, sus conflictos sociales y políticos actuales?

El presente ensayo tendrá como objetivo realizar un estudio crítico de la dinámica histórica y presente de un régimen político y de acumulación capitalista atravesado, de manera dialéctica, por grandes tensiones y contradicciones. Este estudio pretende volver sobre este *proceso de maduración y fisura* parcial del modelo chileno en su etapa “avanzada”, con un enfoque particular puesto en el conflicto capital-trabajo, elemento fundamental poco trabajado por los principales estudios sobre Chile, pero también tomando en cuenta otros campos de la sociedad neoliberal comenzando por el campo político-institucional, la estratificación social y composición clasista, la forja cultural del individuo neoliberal, los movimientos sociales y el actual gobierno. En el plano epistemológico, asumimos una orientación de carácter marxista, un materialismo dialéctico, abierto a otras corrientes del pensamiento crítico, con el objetivo de desvelar algunos de los “paisajes de la verdad” del capitalismo chileno, tal como lo ha propuesto, desde otras problemáticas, un autor como Michael Löwy (Löwy, 1991). Por otra parte, pretendemos hacer aquí una labor de síntesis y de balance bibliográfico crítico, cruzando trabajos y fuentes que no siempre supieron –o no quisieron- dialogar hasta el momento, con el fin de alimentar futuras discusiones colectivas sobre el “modelo chileno”. Eso es no desde un punto de vista académico falsamente “neutral” sino, al contrario, asumiendo este texto como un -modesto- aporte sobre las necesarias construcciones de alternativas democráticas, anticapitalistas y ecosocialistas en el Chile de hoy.

Realizaremos, en un primer momento, un repaso a la literatura existente sobre el neoliberalismo “maduro” chileno y el régimen político actual, recordando la importancia del legado dictatorial hasta nuestros días. También trataremos de mostrar las líneas de fuerza de la sociogénesis neoliberal, su estructura sociopolítica y clases sociales, su sistema mercantilizado de educación y grandes desigualdades sociales o territoriales, su consecuente malestar popular y ciudadano. Nuestra hipótesis es que el regreso de agudas expresiones de descontento social después

⁶ Chile es el cuarto país más desigual de América Latina, con un índice Gini de 0.51: ver gráfico en Anexo 3.

de décadas de “paz neoliberal”, evidencia tanto una *crisis de legitimidad política del neoliberalismo chileno*, de más largo aliento, como una potencial crisis de hegemonía de este modelo de acumulación. Por otra parte, explicaremos, en base al análisis de varias publicaciones y estudios, el estado de la relación capital-trabajo en Chile, el impacto de la *flexiprecarización* del empleo sobre la conformación de la clase asalariada y sus capacidades de resistencia: una evaluación esencial en el momento de pensar las alternativas post-neoliberales y post-capitalistas y, como lo veremos, ampliamente eludida por la literatura. Asimismo, analizaremos el estado del movimiento sindical, mostrando la situación muy débil y globalmente subordinada de amplias fracciones del asalariado, pero también la potencialidad político-social de algunas luchas emblemáticas en sectores estratégicos de la economía. No por eso dejaremos de lado, un breve diagnóstico sobre el reciente “despertar” de varios movimientos sociales, estudiantiles y populares y la mutación de un descontento subterráneo en creciente politización el año 2011-2012, sin que haya significado hasta ahora la impugnación global del neoliberalismo y de sus principales “sentidos comunes”. Antes de concluir, trataremos de la fábrica del individuo neoliberal y sus consecuencias como también mencionaremos el nuevo ciclo político-institucional abierto por el gobierno de la “Nueva Mayoría” desde principios del año 2014, con la aparición de lo que hemos podido describir como formas originales de “transformismo político”. Para terminar, intentaremos una reflexión -de manera prospectiva- sobre las posibles condiciones y experiencias colectivas necesarias para la constitución de una dinámica de conflicto que podría encaminar a Chile hacia un proceso de democratización “raizal” (término acuñado por el colombiano Fals Borda), dejando atrás definitivamente la herencia pinochetista, discutiendo por esta razón las apresuradas teorías del supuesto “derrumbe” del modelo chileno.

1/ La vía chilena al neoliberalismo: de la (contra)revolución capitalista cívico-militar a la democracia neoliberal protegida actual

Los hechos son mundialmente conocidos. En septiembre 1973, la aviación chilena bombardeaba el palacio presidencial en Santiago, y mientras fallecía Salvador Allende, armas en mano, en La Moneda incendiada, comenzaba la represión en los barrios populares (*poblaciones*), en los cordones industriales, en el campo. No sólo se terminaba con la “vía chilena al socialismo” y se iniciaba un periodo de terrorismo de Estado y de destrucción de todos los espacios democráticos, sino también que debutaba una larga dictadura cívico-militar (17 años), cuyo principal objetivo fue de aniquilamiento del movimiento obrero y revolucionario. En abril 1975, el régimen del general Pinochet, aun cuando no había terminado el periodo de más intensa represión socio-política, comenzó su obra refundacional de todos los cimientos de la sociedad, de la economía y del Estado. Bajo el alero del poder militar, las reformas drásticas de los “Chicago boys” y seguidores locales del economista Milton Friedman, lograron liquidar las numerosas nacionalizaciones de la época de la Unidad Popular (UP - 1970-1973) y neutralizar, por varios años, la extraordinaria capacidad de movilización obrera y de poder popular (Gaudichaud, 2013 a). La política de “shock” fue destinada a transformar de manera radical (es decir *a la raíz*) las fronteras establecidas entre poder político, Estado y campo económico para terminar definitivamente con el Estado capitalista “de compromiso” de los años 30-70⁷. Se trataba de terminar con toda expresión de estrategia de sustitución de importaciones (que ya había mostrado todas sus contradicciones) y rasgos, aunque tímidos, de Estado-regulador. El “plan de recuperación económica” del ministro Jorge Cauas sólo se pudo imponer después de haber marginado las veleidades nacional-corporativistas de miembros eminentes de la Junta, tal como el general de aviación Gustavo Leigh. El terror y el aplastamiento del movimiento revolucionario no fueron elementos casuales o colaterales del fundamentalismo monetarista, sino un objetivo central del golpe, como también una condición necesaria para aplicar medidas de tal magnitud, y en tan poco tiempo:

⁷ Sobre la noción de Estado capitalista de Compromiso presente en la historiografía chilena y su crítica, ver Gómez Leyton, 2004.

“La violencia por tanto pasa a tener un rol central en la constitución del Estado neoliberal. El fuego amenazante, aquel que impone la muerte, tortura y el exilio a los perdedores, el miedo que ronda por las calles tras fusiles y cascos militares. Esa violencia constitutiva es necesaria para reconstruir el capitalismo” (Carrillo Ramos, 2009).

El “shock” fue también *blitzkrieg* -una verdadera guerra relámpago- así como lo había aconsejado el mismísimo Milton Friedman al General Pinochet con el fin de hacer decaer bruscamente la inflación, apoyar la recomposición del capital privado y su apertura al mercado mundial, impedir la oposición de los sindicatos o posibles resistencias colectivas. En pocos meses son centenares de empresas estatales o “intervenidas” por el Estado durante la UP que fueron privatizadas, traspasadas al empresariado y, en no pocos casos, a la “familia militar” a través de las redes clientelares del Pinochetismo. Entre 1978 y 1981, la Junta realizó reformas estructurales, base de la sociedad actual: ley laboral limitando drásticamente la actividad sindical (1979); liberalización de la propiedad y mercado de la tierra; privatización del sistema de pensiones (creación de las AFP⁸) que dio un impulso esencial a la financiarización de la economía (1980); nueva Ley minera abriendo el país a las concesiones transnacionales (1981); ley general de Universidades y proceso de municipalización de la enseñanza básica y media que termina, al final de la década, en un proceso de mercantilización de la mayoría de los estratos educativos. Todo eso coronado y avalado por la nueva Constitución de la República (1980) y, posteriormente (1984-1989), adaptado por nuevos decretos, nuevas privatizaciones, bajo el mando del ministro Hernán Büchi, después de la profunda crisis de 1982-1984 y del paréntesis “intervencionista” de la dictadura (Huneeus, 2000).

“Incluso esta segunda oleada [de privatizaciones] es diferente de la anterior pues no se trató de una mera reprivatización de empresas que el gobierno de Allende había pasado al área social. No, esta vez se enajenaron otras firmas estatales productoras de bienes así como las vinculadas a la producción de servicios de utilidad pública (electricidad, transporte, agua, gas, comunicaciones, etc.), para luego, desde el Estado, estimular la emergencia de actividades privadas comerciales en ámbitos antiguamente exclusivos de los servicios públicos: salud, educación, previsión. Es la materialización de las definiciones doctrinarias establecidas en la Constitución del 80 y sus leyes orgánicas. Esta segunda oleada, como se comprende, consistió en una profundización y extensión de la lógica de mercado a esferas antes no mercantiles de la vida social del país” (Agacino, 2006)

Así, de manera muy temprana, comparado con los otros países de la región latinoamericana, se forjó violentamente la contra-revolución chilena que derivó en una auténtica “revolución” neoliberal-conservadora, como proponen llamarla Tomás Moulian (1998), Ricardo Osorio (2007) o Manuel Gárate (2012). Más allá de los legítimos debates que suscitó, la noción de “revolución capitalista” puede ser pensada en el caso chileno para graficar el carácter abrupto y fundamental de los cambios en el modelo de acumulación como también en la sociedad, que van a conducir los militares para defender los intereses de las clases dominantes por encima de sus posibles diferenciaciones:

“En el caso chileno, hay una revolución capitalista por mediación puesto que los militares asumen la tarea de reformular el desarrollo capitalista chileno, cambiando su sesgo nacional-desarrollista por un sesgo liberal que ajusta la economía chilena a las tendencias, al principio inciertas y luego visibles, del capitalismo mundial” (Moulian, 2002: 14).

⁸ Las administradoras de fondos de pensiones (AFP) son instituciones financieras privadas encargadas de administrar los fondos y ahorros de pensiones, según un sistema de capitalización individual de las pensiones de vejez e invalidez. Fueron creadas en noviembre de 1980 por decreto-ley, entregando a empresas financieras especulativas todo el sistema de pensión del país, sistema que, anteriormente, funcionaba según un sistema de reparto a cargo de las cajas previsionales. No obstante, las Fuerzas Armadas se mantuvieron con las ventajas del sistema anterior por repartición... Para un análisis crítico, ver el sitio del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo: <www.cendachile.cl>.

No obstante, en un plano histórico estricto y desde un análisis de las relaciones entre las clases sociales, compartimos plenamente la afirmación de Julio Pinto y Gabriel Salazar, según la cual:

“en rigor la ‘revolución’ de 1973 no fue ni una revolución industrial, ni revolución burguesa, ni revolución nacionalista, sino menos que eso -y más burdamente-, sólo una ‘contra-revolución militar’ que en el corto plazo, fue anti-proletaria, y en el mediano, pro-capitalismo internacional” (Pinto, Salazar, 1999: 100).

En los años 80, y siguiendo a la definición que propone David Harvey (que hacemos nuestra en este ensayo), el neoliberalismo conquistó el planeta ante todo como régimen de acumulación flexible, como nueva fase del capitalismo globalizado y puede ser básicamente entendido como el “camino” de una ofensiva generalizada de las clases dominantes sobre el trabajo para recomponer la tasa de ganancia a niveles globales como locales (Harvey, 2013). No obstante, asumimos aquí que el neoliberalismo, un término plural y hasta contradictorio, dice también relación a un proyecto ideológico-cultural, a un *ethos transformador* y discurso económico y, para terminar, a diversos modos de gobernar, controlar y dominar a una comunidad humana (Haber, 2012). La ola neoliberal no se interioriza al mismo tiempo, con la misma intensidad y bajo las mismas condiciones políticas o socio-económicas según los países. Por eso, adquiere rasgos diferenciados y temporalidades propias: de ahí, esas trayectorias divergentes y “variedades de capitalismo” estudiados por el sociólogo Tomás Undurraga en el caso de Chile y Argentina (Undurraga, 2014). En países como Bolivia, Argentina o México, el *giro* se despliega a mitad de los ochenta en contextos de Estado de derecho y democracia electoral (formalmente por lo menos), bajo el yugo de las prescripciones y “ajustes estructurales” del Fondo Monetario Internacional, y con la presión de la necesaria “guerra” a la hiperinflación y crisis de la deuda (Anderson, 2003). El caso chileno es pionero (el giro es de 1975) y representa según Manuel Gárate “una variante extrema del liberalismo económico”, creada en condiciones de dictadura. Ingresó en este país como contrarrevolución cívico-militar y reacción de las atemorizadas clases dominantes, apoyadas decididamente por el imperialismo estadounidense, frente a la experiencia de la Unidad Popular. En este sentido y tomando en cuenta esas diferentes variables, creemos que se puede efectivamente hablar -como lo hacen muchos autores- de *modelo chileno*, entendido como “arquetipo”⁹ del capitalismo neoliberal, aunque el caso de Chile es también impactante por sus modalidades propias, especificidades y por no pocas variedades según los sectores económicos y campos estudiados¹⁰. No obstante, en un plano más general, es evidente que la crisis de los equilibrios excluyentes e interclasistas del periodo nacional-popular (1938-1967), la derrota del proyecto allendista de vía institucional al socialismo (1970-1973) y el golpe del 11 de septiembre abrieron para la burguesía chilena la posibilidad de lanzarse en una nueva ofensiva general contra el trabajo, aplacando todo riesgo de insurrección popular y transformando el Estado, la sociedad así como el modelo económico hacia la instauración de un nuevo modelo con altos grados de coherencia interna y externa.

Tras cuatro décadas de transformaciones profundas, y más allá de la transición política de 1989-1990, la centralidad de los equilibrios macroeconómicos, la construcción de un Estado

⁹ El diccionario de la RAE define la palabra modelo como: “Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo”, <<http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=xzHZWdlqrDXX2u7iR2i0>>.

¹⁰ El trabajo de tesis doctoral del politólogo Antoine Maillat insiste en el hecho que en Chile la acción pública se adaptó a las exigencias del discurso monetarista pero según una gran « variedad » de modalidades, lo que significa relaciones diferenciadas entre Estado, sociedad y mercado según los sectores (transporte, salud, pensiones, educación, etc). Según Maillat existen así diversas figuras, más que un « modelo »: neoliberalismo « ortodoxo », « regulador », emulador » o « mixto » (Maillat, 2013).

“subsidiario” (en realidad, un Estado autoritario neoliberal), la profundización de la asimetría entre capital y trabajo (ya muy profunda antes de 1973), el apoyo irrestricto a la estrategia exportadora como “motor” del crecimiento macroeconómico, el control de gran parte de los recursos naturales por conglomerados transnacionales, la hegemonía de las finanzas especulativas, siguen siendo el sello distintivo de la economía actual. La lógica política se subordinó a la racionalidad económica, la cual debía seguir los principios de la economía de mercado: esa “nueva razón del mundo” conformó una “sociedad neoliberal” tal como la estudiada en Europa por Pierre Dardot y Christian Laval (Dardot, Laval, 2009), pero con caracteres específicos, producto de la violenta experiencia chilena y su posición periférica en el sistema-mundo. En un parto sangriento para las clases populares y las izquierdas, nació lo que propusimos nombrar *vía chilena al neoliberalismo* (Gaudichaud, 2014b) y, con ella, una sociedad en gran parte “reformulada”. No sólo la economía se desdibujó y reconstruyó desde otras bases, sino también nuevas sociabilidades, sentidos comunes y formas radicalmente diferentes de *gubernamentalidades* (en el sentido de Foucault en sus estudios sobre la biopolítica). A partir de 1990, en nombre de “la fuerza y de la razón”¹¹, de los consensos entre las fuerzas partidarias hegemónicas que pactaron la salida postpinochetista y de la “justicia en la medida de lo posible”¹², los “Chigago boys” y los militares fueron gradualmente sustituidos por nuevos tecnócratas, los “monjes” de *think tanks* social-liberales como el CIEPLAN, y por una coalición de gobierno -la Concertación de Partidos por la Democracia¹³- que aglutinó a socialistas renovados y demócratacristianos. Existe todo un debate para saber si estos partidos del periodo post-dictadura gestionaron de manera ferviente y continuaron el modelo heredado o tuvieron que gobernar “en democracia” *a pesar de este* (Silva, 2008), también se discute si los civiles crearon un modelo propio o “una tercera vía” (Taylor, 2006). Por nuestra parte, postulamos que los 20 años de la Concertación representan ante todo un momento clave de legitimación y consolidación del capitalismo neoliberal en Chile. Aunque el objetivo de este ensayo no es detallar este periodo de administración y profundización civil de lo inaugurado por la dictadura, es menester recordar algunos elementos en torno a este tema para poder evaluar el presente.

Un autor como Manuel Garretón (intelectual cercano a la centro-izquierda), afirma que los cuatro presidentes sucesivos de la Concertación encarnaron un “progresismo limitado” y estima que lograron “corregir” varios efectos del neoliberalismo autoritario del periodo anterior. “Crecimiento con equidad” bajo el presidente Aylwin, “modernización del Estado” con Eduardo Frei, reforma de la salud y avances constitucionales con Ricardo Lagos y, para terminar, un “nuevo estilo” de gobierno y políticas públicas de protección social con el primer gobierno de la socialista Bachelet: esas son las diferentes etapas que destaca el sociólogo chileno para determinar la existencia en Chile de un “neoliberalismo corregido”. Es verdad, el premio nacional de humanidades y ciencias sociales reconoce claramente que se mantienen varios “enclaves autoritarios”¹⁴, aún no superados, en la sociedad postpinochetista:

¹¹ Términos incluidos en el lema del escudo nacional de Chile que originalmente reza: “Por la razón o la fuerza”.

¹² Concepto famoso del primer presidente electo en posdictadura (1990), Patricio Aylwin, justificando en parte la impunidad de los responsables de la dictadura.

¹³ La Concertación de Partidos por la Democracia se fundó en 1988 como una coalición de diecisiete partidos políticos de derecha, centro y centro-izquierda que se oponían a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), reagrupa sectores que van del Partido socialista renovado a la Democracia-cristina (centro-derecha), pasando por pequeñas organizaciones social-demócratas instrumentales como el Partido por la democracia, PPD. Los sucesivos presidentes de la Concertación fueron Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010). En 2011 asume el gobierno de derecha de Sebastián Piñera, empresario multimillonario que pretendía formar una “nueva derecha”, más liberal y moderna; perderá la elección frente a la nueva candidatura de Bachelet en 2013.

¹⁴ Garretón define un “enclave autoritario” como la presencia de elementos “institucionales, ético-simbólicos, actorales y culturales que son propios de un régimen autoritario, pero que quedan incrustados en el régimen democrático, dándole el carácter de democracia incompleta” (Garretón M. A. y Garretón R., 2010).

“Si bien muy lenta y gradualmente se mejoró sólo parcialmente el clima de impunidad en materia de derechos humanos, se neutralizó el poder fáctico de las Fuerzas Armadas y el tejido de actores sociales pudo, en parte, recuperarse con los problemas que mencionaremos más adelante; la sociedad de los gobiernos democráticos concertacionistas quedó atada a la sociedad de la dictadura por dos cadenas o enclaves: por un lado, el modelo socioeconómico o modelo neoliberal, con papel hegemónico del mercado en los diversos ámbitos de la vida social, rol subsidiario del Estado y profunda desigualdad estructural y, por otro, el modelo político institucional, expresado principal aunque no exclusivamente en la Constitución de 1980 y cuya razón última era impedir cambios significativos en el modelo socioeconómico” (Garretón, 2013: 220).

Garretón resalta la existencia de un “triángulo neoliberal” determinado por el “predominio irrestricto” del mercado como forma de organización social, del Estado subsidiario y una de la desigualdad estructural más contundente del mundo, todo eso directamente relacionado con el plano político-institucional heredado de la dictadura.

Efectivamente, recordemos que la Constitución política chilena sigue siendo la *carta magna* impuesta por el plebiscito fraudulento de 1980. Una de las especificidades de la “tramposa” transición es justamente la ausencia de proceso constituyente al salir de la dictadura y la prolongación de una Constitución espuria en un régimen que se dice “democrático” (Atria, 2013). El General Pinochet, una vez perdido el referéndum de 1988, se mantuvo como jefe de las Fuerzas Armadas *en democracia* hasta el 10 de marzo de 1998, para al día siguiente asumir el cargo de senador vitalicio. Sólo las tentativas de justicia internacional y su arresto en Londres pudieron comenzar a entablar una verdadera justicia transicional y simbólica (Patino, 2000), aunque sin terminar con la impunidad, producto de la negativa del gobierno Frei a dejar que se juzgara al dictador en el extranjero (en Londres)¹⁵. El concepto de *democracia protegida*¹⁶ forjado por el profesor de derecho Jaime Guzmán e influenciado por las teorías de uno de sus mentores (Friedrich Hayek) sobrevivió a sus creadores hasta nuestros días -tal un *Frankenstein institucional*-. Una *democracia protegida neoliberal* sustentada por un Estado capitalista autoritario, que si bien consagra a partir de 1990 el funcionamiento de una democracia electoral y la restauración de libertades civiles y políticas fundamentales, glorifica el predominio del derecho de propiedad sobre todos los otros derechos y garantiza la libertad económica sobre todas las otras libertades. Por ejemplo, impide al Estado realizar actividades empresariales, salvo que una ley de quórum especial lo permita. Paralelamente, el texto constitucional está plagado de candados regresivos respecto a las principales tendencias del constitucionalismo contemporáneo: ultra-presidencialista es a la vez sumamente rígida: su reforma exige para algunas materias el voto de las tres quintas partes o hasta de las dos terceras partes de los parlamentarios, más el acuerdo del Presidente de la República. Para coronar el edificio, este sistema institucional rechaza el principio de la representatividad de la mayoría a través de mecanismos como el sistema electoral binominal¹⁷ (casi único en el mundo) para la elección parlamentaria, destinado a sobre-representar mecánicamente a la derecha y a excluir a la izquierda comunista del Congreso:

¹⁵ A pesar de los procesos abiertos por el juez Guzmán y de más de 400 querrelas abiertas, el General Pinochet murió impune, en su casa de Santiago, en diciembre 2006 y si bien el gobierno Bachelet le negó un funeral de Estado, el Ejército le rindió los honores fúnebres como ex comandante en jefe.

¹⁶ Pinochet llegó a reivindicar públicamente la noción (un oxímoron en realidad) de “*democracia autoritaria*”.

¹⁷ El complejo sistema binominal establece que el Tribunal Calificador de Elecciones proclama como elegidos senadores o diputados a los dos candidatos de una misma lista, cuando uno de ellos alcanza el mayor número de sufragios y la sumatoria de la votación de ambos representa el doble de lo obtenido por la lista que lo sigue en número de votos. Este sistema de “doblajes” permite excluir sistémicamente las “pequeñas” listas y sobre representar las grandes coaliciones: el sistema de partidos se convierte así en un sistema de oposiciones consensuales (Moulian, 2004). Para más información, ver Couffignal, 2011.

“extraño y regresivo sistema electoral (que) exige crear coaliciones de partidos, otorga al sistema una gobernabilidad que se basa en las limitaciones de la voluntad política de la mayoría, y obliga a la mayoría a cogobernar con la minoría electoral” (Vergara, 2007).

Por cierto, el gobierno Bachelet, en consenso con gran parte de la oposición de derecha, derogó el sistema binominal en enero 2015 para pasar a un sistema “proporcional moderado” (siguiendo la ley d’Hondt) con el fin de otorgarle más representatividad al Parlamento e intentar subsanar la poca legitimidad del congreso. También es necesario subrayar que las reformas de 2005 (gobierno Lagos) han disminuido la dimensión más autoritaria de la Constitución, al otorgar al Presidente de la República la posibilidad de pedir la renuncia a los comandantes en jefe de las FFAA, al transformar el Consejo de Seguridad nacional en un organismo consultivo y al cambiar la designación de los miembros del Tribunal Constitucional. Sin embargo, sin proceso de Asamblea Constituyente originaria y popular, la *democracia protegida neoliberal* sigue estando vigente en sus aspectos centrales. Por otra parte, basta con constatar cual fue la política real de la Concertación en materia económica, de derechos humanos, de lucha contra la impunidad, de represión a los movimientos sociales, de políticas laborales o en términos de luchas contra las desigualdades para comprender por qué no compartimos, en absoluto, la afirmación de Manuel Garretón según la cual los gobiernos de la Concertación “corrigieron”, progresivamente y de manera incremental, el sistema capitalista neoliberal heredado. Si bien es cierto que algunos autores califican a la transición chilena como “exitosa” o “acabada” (Prognon, 2010), es indispensable reivindicar una lectura alternativa de esta *doxa*, particularmente cuando varios pueblos vecinos de América del Sur buscan los caminos del postneoliberalismo e incluso cómo construir alternativas anticapitalistas.

La historia “desde abajo” o popular de la transición nos presenta otro relato, diametralmente diferente. En realidad, al salir de la dictadura, fascinados por el éxito económico del “jaguar de América del Sur”, atrapados en una negociación a puertas cerradas con los militares, impregnados de las teorías sobre “el fin de la historia”, convencidos de la necesidad de respetar la “democracia de los acuerdos” con la derecha pinochetista, poco presionados por un movimiento obrero derrotado, los diferentes actores de la Concertación, entre los cuales la actual presidenta Bachelet, cambiaron sus relatos de cambio social y Asamblea Constituyente para abrazar con frenesí el neoliberalismo y la institucionalidad autoritaria. El mismo Edgardo Boeninger, senador (designado por Pinochet) demócrata-cristiano, exministro del primer presidente electo en posdictadura, Aylwin, reconocerá más tarde en sus “lecciones para la gobernabilidad” que:

“el éxito económico postrero del régimen militar influyó significativamente en las propuestas de la Concertación, generando de hecho una convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer, ante su base partidaria y electoral” (Boeninger, 1997: 368-369).

Las numerosas publicaciones del sociólogo Felipe Portales sobre los “mitos de la democracia chilena” y el nivel de integración del modelo capitalista neoliberal por parte de la cúpula de la Concertación, confirman ampliamente esta franca aseveración de uno de los ideólogos de la transición. De hecho, Portales recuerda que la coalición de gobierno más estable de la historia republicana de Chile (veinte años en el poder -1990-2010) llegó a abandonar -conscientemente y en nombre de los necesarios “consensos”- la oportunidad histórica de usar su mayoría transitoria en el Parlamento para iniciar cambios más sustanciales en la Constitución y en el modelo económico, o por lo menos para anular la ley de amnistía del 1978¹⁸ (Portales, 2005). En el plano de la política económica, el balance es demoledor. La Concertación se negó rotundamente a terminar con el

¹⁸ Promulgada en abril del 1978, este decreto-ley de la dictadura exime de responsabilidad penal a quienes cometieron actos de violencia y atropellos a los derechos humanos entre 1973 y 1978, instaurando así un precedente jurídico que permite justificar en parte la impunidad para militares y civiles del régimen de Pinochet.

“Plan laboral” de la dictadura y su legislación¹⁹ o en emprender una reforma tributaria sustancial. Es más, ha continuado con las políticas de privatizaciones de la educación y de los servicios públicos, como también con el plan de concesiones de los inmensos recursos naturales del país, comenzando por el sector minero, la madera, la pesca o las actividades agrícolas de exportación. Encandilados por el milagro de los tratados de libre-comercio (TLC) con EE.UU, China, Japón y la Unión Europea, tampoco buscaron reiniciar una política de industrialización, valorizar las materias primas a través de la Corporación por el Fomento (CORFO) o acercarse a los países vecinos para desarrollar la integración regional. Y si mantuvieron el carácter estatal de la Corporación del Cobre (CODELCO), multiplicaron al mismo tiempo la entrega de la mayor reserva de metal rojo del mundo a multinacionales, dando así la espalda a la perspectiva defendida por Salvador Allende de conquistar cierto grado de soberanía nacional con el control del “sueldo de Chile”.

“La experiencia neoliberal tuvo el efecto de una verdadera revolución ideológica para los empresarios que adhirieron plenamente al proyecto. El conjunto de las elites se convirtieron a la nueva ideología: el Estado mayor de las Fuerzas Armadas, pero también los cuadros de los partidos que llegaron al poder en 1990. Chile es así el país del mundo donde la inversión extranjera representa la porción más elevada del PIB (59,6% en 2008 frente a un 24,5% como promedio mundial), una realidad explicable por el número de tratados de libre-cambio firmados por parte de Santiago (eran 24 en 2012) y por una legislación favorable a los capitales extranjeros. Los principales sectores de inversión extranjera son las minas (28%), y en particular las minas de cobre, principal recurso natural del país, la electricidad y el gas (18%). Las concesiones de infraestructuras y de equipamiento públicos, iniciados en la década de los noventa, también atrajeron a los inversores, principalmente europeos y en particular españoles” (Zrari, 2012).

La diferencia con el periodo autoritario ha sido esencialmente la acentuación del gasto público hacia políticas sociales de carácter asistencialista (asumiendo los dictámenes del Banco Mundial) que, combinadas con importantes tasas de crecimiento económico -alrededor del 7% anual en la década de los noventa y de 3 a 4% la década siguiente-, se tradujo en una importante reducción de la pobreza absoluta. En ningún caso, esta orientación significó un cambio sustancial en las profundas desigualdades distributivas, territoriales o de género. Si bien, en los últimos 20 años, la economía chilena ha crecido a un promedio anual del 5,1% (Fazio, Parada, 2010), con un PIB per cápita que roza en 2014 los 20.000 dólares US, esa cifra esconde la realidad de inmensas desigualdades de ingreso. Hoy, el sueldo promedio en Chile es de 740 dólares US mensuales y 50% de los asalariados ganan menos de 400 dólares US mensuales²⁰. Los “súper ricos” estudiados por el Departamento de Economía de la Universidad de Chile, capturan “la parte del león” del ingreso nacional: el 1% de la población acumula el 30,5% de los ingresos, el 0,1% el 17,6% y el 0,01% cerca de un 10% (López et al., 2013). Asistimos a una clara *oligopolización capitalista* que poco tiene que ver con la utopía neoliberal del “laisser-faire” y de “la mano invisible” en un supuesto contexto de mercado de iguales oportunidades y libre competencia. Para resumir, la fuerza resiliente y adaptativa de la (contra)revolución capitalista chilena ha sido profundizada y -en cierta medida- *difundida* al conjunto de la sociedad con políticas públicas legitimadoras y estabilizadoras por gobiernos electos en contexto de “democracia electoral de baja intensidad”. Como bien lo anota Guillaume Boccaro, lo “más irónico de esta historia” es que son los agentes políticos de centro-izquierda, varios de ellos perseguidos durante los años de la dictadura, los que contribuyeron a completar, perfeccionar y extender este modelo:

¹⁹ Sobre este tema, Cf. el capítulo sobre “¿El retorno de la clase obrera?”.

²⁰ Ver cifras, estadísticas y estudios de la Fundación Sol: <<http://www.fundacionsol.cl>>.

“Si el periodo dictatorial corresponde a la implantación del ‘ajuste estructural’ que tiende a reducir el papel del Estado en la vida económica del país, el periodo posdictatorial no consiste en inyectar un *poco de social* con el fin de contrarrestar los efectos nefastos del capitalismo salvaje y asegurar la gobernabilidad del país. La ambición es mucho mayor y los efectos más profundos. De lo que se trata es tomar lo social y lo cultural como espacio de difusión de la nueva *doxa* neoliberal. Y de hecho, los economistas de la CEPAL y de los distintos *think tanks* promotores de la Tercera Vía no se limitan a asistir a los pobres. Retomando el lema del Banco Mundial según el cual hay que ayudar a los pobres a que se ayuden a sí mismos, aplican al pie de la letra las nuevas normativas del Consenso post-Washington. Desde ahora, de lo que se trata es responsabilizar a los pobres, hacerlos entender que deben ser emprendedores de sus propias vidas y ubicarse en los nuevos nichos de mercado sacando provecho de su capital humano, social y cultural. Ya no se opone el Estado al Mercado como en los primeros tiempos de diseminación de la *vulgata* planetaria neoliberal. Se reconfigura al Estado mediante la privatización y la extensión de sus mecanismos de intervención - vía la constitución de una esfera para-estatal de casi-mercado - a nuevos ámbitos de la sociedad. La llamada sociedad civil se construye como actor económico y se “marketea” a la democracia” (Boccaro, 2013).

Este proceso de “marketing neoliberal” de la democracia, del “arte de gobernar” el conjunto de los espacios sociales, tanto físicos, como subjetivos, ha sido favorecido por el sistema político “protegido” del periodo autoritario. Esa multidimensionalidad explica hasta qué punto la visión del mundo empresarial y libre-cambista de la burguesía invadió todos los poros de una sociedad neoliberal que durante un tiempo se ha considerado “triumfante”.

2/ Génesis del capitalismo neoliberal “maduro” y nuevas dominaciones sociales

Uno de los autores, que a finales de los años noventa, mejor se dedicó a describir críticamente el funcionamiento de la articulación entre transición pactada, adhesión de la centro-izquierda y de los partidos de la Concertación a la utopía neoliberal y sociedad de consumo crediticio es el sociólogo Tomás Moulian. En su “anatomía del mito” democrático chileno, propuso varios conceptos para explicar el “transformismo” político que ha significado la transición, como también el carácter de esa fusión entre autoritarismo político, integración de los símbolos del modernismo de la economía del mercado y anomia individualista neoliberal. Adentrándose en las controvertidas profundidades de la realidad chilena, Moulian desdibuja un país páramo del “ciudadano *credit-card*”, paraíso del consumidor endeudado, patria de un sistema constitucional autoritario administrado con entusiasmo por la Concertación. Una nación que también olvidó su historia violenta reciente: “En la matriz de una dictadura terrorista devenida dictadura constitucional se formó el Chile actual, obsesionado por el olvido de esos orígenes”. En su prólogo a la tercera edición (2002) de un libro que aún marca de su sello la sociología trasandina, Moulian añade que el Chile actual:

“sigue siendo una sociedad donde prima el modelo socioeconómico de la “economía libre”, cuyos lineamientos generales fueron definidos durante la dictadura y donde, como es natural, sobreviven sus plagas asociadas. Ellas son: a) una democracia de baja intensidad invadida por la ideología tecnocrática, cuyo formalismo genera una fuerte indiferencia hacia la política institucional y un alto desprestigio de los profesionales de la actividad y b) una cultura en la cual priman los componentes individualistas asociativos y expresivos” (Moulian, 2000: 10).

En textos ulteriores, el sociólogo ha buscado pormenorizar de qué manera la democracia chilena se basa en una política analfabeta y la construcción de una seudopolítica, donde parecen

existir conflictos y debates polarizados entre partidos que en realidad representan sólo algunas variantes de la misma sociedad del espectáculo, una “entretención” entre el mismo duopolio en el poder: la Concertación de un lado y, del otro, el bloque de la derecha política (la “Alianza por Chile”), donde encontramos Renovación Nacional (RN – Liberal conservadora) y la Unión Democrática independiente (UDI – gremialista Pinochetista)²¹.

“La seudopolítica busca generar la imagen de la hiperpolitización, una de cuyas expresiones sintomáticas es una preocupación obsesiva por los personajes políticos. La prensa, la televisión y las radios multiplican las noticias políticas, pero sus temas son el chismorreo (generalmente morboso, pero en ocasiones solo frívolo) sobre las vidas privadas de los hombres públicos y los trascendidos sobre los casos de corrupción, tratados de manera desigual y sesgada. La seudopolítica busca el “asesinato de imagen” de la política, para convertirla en impotente” (Moulian, 2004: 13).

Sin lugar a dudas, las publicaciones de Moulian y su gran difusión representaron una primera ruptura necesaria con la doxa existente sobre la transición democrática, aunque es menester resaltar que sus textos están todavía marcados por cierta denuncia moral de la desigualdad social y alguna añoranza nostálgica de los “buenos tiempos” de la política popular anterior al golpe de Estado, eso sin tocar detalladamente y de frente la problemática del trabajo y de su subsunción real como condición del proyecto de clase neoliberal.

Hoy, este modo de acumulación capitalista lleva casi 40 años de funcionamiento y perfeccionamiento, sin discontinuidad, con sus consiguientes transformaciones internas, construcción valórica y múltiples efectos contrarios. De hecho, Chile se encuentra en la situación original de ser la nación que presenta a la vez una de las experimentaciones neoliberales más extremas y de mayor duración, eso tanto en sus figuras cívico-militar (1975-1989) como neoliberal democrática (1990-2015). De allí, el interés de estudiar la literatura que se generó en los últimos años desde las ciencias sociales para intentar analizar el carácter “maduro”, “avanzado” o “triumfante” de este fenómeno, desde diferentes ópticas y con nuevos aportes. Podemos decir que tenemos un corpus de estudios que permite trazar algunas lecturas críticas argumentadas sobre esta realidad. Desgraciadamente, existen pocos debates reales entre disciplinas, intercambios entre autores y, en la mayoría de los casos, brillan por su ausencia las referencias mutuas entre los escritos que trabajan esta problemática, por lo cual nos pareció interesante presentar los puntos de convergencia y complementariedad entre algunos textos. Si bien los investigadores que citaremos a continuación y en el próximo párrafo han aportado a una reflexión general, quedan por desarrollar más estudios desde análisis de casos y temáticas específicas. Un trabajo que afortunadamente ya está en curso, en particular desde una generación de investigadores, más apegados a encuestas de terrenos y desarrollo de problemáticas más acotadas, como lo ha demostrado -entre otros- el coloquio internacional organizado en Francia, en septiembre 2013, sobre “gobernar y resistir en una sociedad neoliberal”²².

Primer aporte esencial, aunque ¿sorprendentemente? ignorado por los académicos más “connotados”: las propuestas del economista marxista Rafael Agacino que defiende la noción de “neoliberalismo maduro” o de “contrarrevolución madura”, recalcando la conformación en América Latina de procesos neoliberales tempranos, intermedios y tardíos. En el caso chileno, cuando en

²¹ La UDI es, hasta la actualidad (2015), la principal fuerza parlamentaria del país, prueba de la gran resistencia y aprovechamiento de los “hijos de Pinochet” del sistema electoral binominal heredado del régimen militar (y finalmente abrogado por el segundo gobierno de Michele Bachelet).

²² Para un acercamiento pluridisciplinar y desde diferentes enfoques sobre este tema, consultar la página y actas en línea del Coloquio internacional que coordinamos con un equipo de jóvenes politólogos de la Universidad de Grenoble - Francia: “Chile actual. Gobernar y resistir en una sociedad neoliberal”, <<http://chili-neoliberal.sciencesconf.org>>.

1990 se abre la etapa de *la administración civil del neoliberalismo*, el modelo tiene ya 15 años de operatividad, a diferencia de las políticas de ajustes más tardías efectuados en democracia, como en el Perú de Fujimori y de Toledo, en el Ecuador de Bucarán y Gutiérrez, en la Bolivia de Sánchez de Lozada y en la Argentina de Menem y De la Rúa. Según Agacino, hay que considerar varios elementos para abordar la originalidad del caso chileno, pero también subrayar que acumula hoy varios de los signos del agotamiento de un sistema ya “maduro”:

“La potencia del modelo chileno y su excepcionalidad, en gran medida sólo puede explicarse a partir de un hecho político clave: la emergencia de una franja de las clases dominantes con visión estratégica que, frente a la crisis de los ochenta, logró anteponer a los intereses fraccionales el interés del ‘capital en general’. Se trata del talento de un bloque dominante que logra simultáneamente construir hegemonía y las bases materiales necesarias cuyo éxito, finalmente, se medirá por la reconversión al neoliberalismo de la propia tecnocracia socialdemócrata. En efecto, será una suerte de “neoliberalismo rosa” el que retomará la posta y extenderá el proyecto neoliberal desde los noventa hasta nuestros días. Sin embargo, desde otra perspectiva, la contrarrevolución neoliberal chilena, la más exitosa en América Latina, entrando ya a la cuarta década, permite anticipar los problemas estructurales que resultan de su aplicación completa. En Chile, la tremenda desigualdad del ingreso, la concentración de la riqueza, la sobre explotación de la fuerza de trabajo y los recursos naturales, la precariedad del empleo y el desempleo estructural resultan del propio crecimiento y acumulación capitalistas y no del estancamiento o el bajo crecimiento. En realidad, éstas características estructurales, incluida una reducción de la pobreza cuya perdurabilidad nadie asegura por la precariedad del empleo, han sido las condiciones para el logro del crecimiento acelerado. En el largo plazo y más allá de los ciclos cortos, la contra revolución neoliberal chilena muestra como la racionalidad neoliberal avanza agotando y destruyendo sus propias fuentes de crecimiento: el trabajo y los recursos naturales” (Agacino, 2006).

La noción de “madurez” no debe estar considerarse aquí en clave “biologista” o como producto de una evolución lineal desde el nacimiento hasta la vejez del sistema, pero enfatizando más en su carácter dual: por una parte, un modelo que acumuló solidez, parsimonia y experiencia; pero también por otra parte, cada vez menos ágil, que ha perdido flexibilidad hegemónica, credibilidad y capacidad de adaptación con los años (Urrutia, 2002). En la última década, la extraordinaria estabilidad del régimen político y socio-económico chileno parece parcialmente debilitado, dominado por un poder real que opera cada vez más por fuera del Estado neoliberal y sus instituciones, para desplazarse esencialmente hacia poderes facticos, practicados por grandes corporaciones, *think tanks* empresariales o social-liberales, y un reducido puñado de medios de comunicación. En 2011-2013:

“todas las reformas estructurales – las pensiones, el trabajo, la salud, la educación, el sistema de medios, la gestión monetaria, la canasta productiva exportable, etc., han dado ya sus ‘frutos’ y ahora comienzan a desplegarse sus contradicciones. En estas condiciones, la emergencia de la cuestión social cambió el panorama y mostró la incompletitud de la utopía neoliberal del ‘orden del mercado’. La institución mercado se revela insuficiente para procesar todos los conflictos y transformarlos en meras contiendas entre partes privadas” (Agacino, 2013a: 40-44).

Este diagnóstico entra en parte (pero en parte solamente) en resonancia con el trabajo de Carlos Ruiz Encina. En su última publicación y en otro libro con el sociólogo Giorgio Bocardo (Ruiz, 2013; Bocardo, Ruiz, 2014), sintetiza varios estudios colectivos desarrollados en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile o en la CEPAL, tanto sobre estratificación

social y desigualdades, como sobre movilizaciones colectivas²³. En su estudio de 2013, propone así un “análisis de clase de la revuelta estudiantil” desvelando las entrañas de lo que denomina “neoliberalismo avanzado”. Utilizando el trabajo sobre las privatizaciones de Graciela Moguillansky (Moguillansky, 2001) y de Guillermo Campero sobre los grupos de presión (Campero, 2003), Ruiz y Boccardo insisten en la importancia de la conformación de un empresariado cohesionado y bloque dominante para explicar la estabilidad del modelo chileno. Aprovechando la carencia de oposición social y política en dictadura, la clase empresarial (a diferencia de las pugnas entre industriales y financieros en otros países de la región), en particular tras la crisis de 1982-83, pasa de la acción defensiva a la acción en bloque. Una clase dominante que lidera el proyecto cívico-militar que le otorga unos importantísimos beneficios en un contexto de fuerte crecimiento primo-exportador y apertura de nuevos espacios para el capital: salud, fondo de pensiones, mercado de la educación, sector minero y primario, etc. Con la transición, los patrones sólo tendrán que aproximar su posición hacia la dirigencia de la Concertación, dejando atrás una relación orgánica casi exclusiva con los partidos de derecha y, en el otro sentido, los “*technopols*”, expertos y burócratas del social-liberalismo concertacionista integran cada vez más, al calor de estos años de gestión estatal, los consejos de administración, centros de estudios y fundaciones de las grandes empresas como también las redes de sociabilidades de las elites económicas, universitarias y mediáticas: un fenómeno ya bien estudiado a nivel continental por Dezalay y Bryant (2002).

Empero, sería erróneo pensar que el empresariado, como el conjunto de la fisonomía de las clases sociales en contexto de neoliberalismo avanzado, no sufrió drásticas evoluciones en este lapso. En este sentido, el trabajo de Tomás Undurraga devela de manera más completa como la transformación del modelo de acumulación y de sus “circuitos culturales” impactaron fuertemente la formación de una nueva burguesía local-global, donde predominan progresivamente grandes *holdings* comerciales-financieros, configurados a partir de los ciclos de privatizaciones, de alianzas externas con los centros del sistema-mundo capitalista y nuevas interacciones entre academia y empresas (Undurraga, 2014). Estos grupos se desarrollaron de manera importante en los años 2000, con la multiplicación de los Tratados de libre-comercio (se firma el TLC con EE. UU. en 2003). La hiper-financiarización de la nueva economía abierta chilena terminó por destruir la industria local y provocar un derrumbe del pequeño y mediano empresariado productivo, que casi desaparece o es marginado a un estatuto precario de micro-empresas (induciendo un desempleo estructural) cuando algunas fracciones de las PYMEs se adaptan, transformándose en meros prestatarios de servicios de los grandes grupos. La aparente paradoja es que son esas pequeñas y medianas unidades económicas que son las que proveen más de 80% de los empleos nacionales. Los sectores tradicionales dominantes del empresariado criollo, gestores del golpe de 1973, si bien terminaron como los grandes beneficiarios del nuevo modelo como clase, no siempre supieron manejarse dentro del huracán neoliberal y de esta “revolución del empresariado” (Montero, 1997). Pocos fueron los que pudieron realmente hegemonizar este rápido proceso de apertura-concentración-transnacionalización del capital. Hoy la economía chilena está controlada por un puñado oligopólico de muy pocas familias y grupos (como los Matte, Lucksic, Paulman, Angelini, Claro) muy cohesionados en plano ideológico y cultural (a diferencia de las burguesías argentinas) y con fuerte influencia en la agenda pública. Conforman verdaderos imperios económicos regionales²⁴, de carácter transversal, presentes en los principales sectores comerciales, megaextractivistas, de

²³ Ver por ejemplo los sucesivos números de *Análisis del Año. Política, Sociedad y Economía* de la FACSIO de la Universidad de Chile o las *Series de la CEPAL* sobre “Estratificación y movilidad social en Chile”.

²⁴ Tres familias (Angelini, Matte y Lucksic –27° fortuna mundial–) controlan la mitad de los activos cotizados en la Bolsa de Valores de Santiago, y su patrimonio representaba (2011) el 12,5% del Producto Interno Bruto (PIB), contra el 9% en 2004. A eso hay que agregar el clan Horst Paulman (grupo Cencosud –154° fortuna mundial) y sus supermercados presentes en todo el continente. Estas familias disponen de representantes directos en el Parlamento, así como en la dirección de los principales medios, audiovisuales como escritos. Sobre todo desde que el Presidente Piñera cerró la versión papel y vendió la versión digital del diario *La Nación* (del cual el Estado era accionista mayoritario), por juzgarla demasiado crítica.

servicios y exportadores, como bien lo han mostrado los estudios del economista Hugo Fazio (Fazio, 2005; Fazio y Parada, 2010).

Los diferentes estudios de la Universidad de Chile que se realizaron sobre estratificación social tanto desde el *Centro de Investigación de la Estructura Social (CIES)* como a través del *Proyecto Desigualdades*²⁵ (dirigido por Emmanuelle Barozet) muestran, en base a datos estadísticos y encuestas empíricas, los desplazamientos que se generaron en la conformación social desde los años ochenta, de arriba a abajo de la pirámide de las clases sociales. Las cifras sobre empleo muestran las evoluciones numéricas *relativas*, siguientes (ver Anexo 1): en la estructura de una población económicamente activa (PEA) que supera los 8 millones 450 mil personas (2012), aparece una baja continua de la presencia de empleos agrícolas y grupos sociales en el mundo rural (con sólo 10,6% de la PEA en 2009), una disminución relativa de la clase obrera minera (0,5% de la PEA), se mantiene -con una leve reducción- el peso de los obreros industriales y de la construcción (10,1%), y se nota un notable crecimiento de la clase obrera de comercio y servicios (15,9%), como de los asalariados “medios” (29,7%). Más allá de la diferencias de cifras, a veces notorias, que podemos constatar según las distintas investigaciones (Espinoza, Barozet, Méndez, 2013; Ruiz, Boccardo, 2011; Aguiar, 2010), el rápido crecimiento de los servicios, en la administración privada y el comercio es una de las características de la estructura ocupacional chilena, a tal punto que -siguiendo el esquema de Goldthorpe, Erikson y Portocarrero (Erikson, Goldthorpe 1992)- algunos autores proponen hablar de la “*formación de una clase de servicio*”²⁶. Es indudable que se puede discutir la performatividad de tal concepto y su denominación como “clase”, pero merece destacar que este proceso de tercerización de fracciones del asalariado, muy heterogéneo en su composición, está en el centro de la fisonomía del neoliberalismo maduro. Para Carlos Ruiz, esta “clase de servicio” y las “nuevas clases medias” son un elemento central:

“El sostenido proceso de mesocratización se erige como una de las principales marcas de la sociedad chilena actual, al punto que los expandidos niveles de consumo y calificación profesional y técnico que cobija la distinguen en el panorama regional” (Ruiz, 2013: 9-10).

El sociólogo le dedica, con Giorgio Boccardo, una gran atención a estos segmentos intermedios, efectivamente importantes, “hijos del neoliberalismo”, en gran parte urbanos, e integrados a estratos superiores de los asalariados del sector privado a través del mercado de la educación y del acceso a diplomas (Ruiz, Boccardo, 2014: 111-142). Los dos autores, tanto en sus escritos como en las publicaciones de la fundación NodoXXI²⁷ que dirigen, ubican ahí cierto potencial político y conflictivo marcado por la “crisis de expectativas” de estos grupos y por la frustración de promesas de movilidad social ascendente de la última década. Un “malestar mesocrático” que despuntó con grandes movilizaciones estudiantiles (volveremos sobre este tema), aunque subrayan que, en la mayoría de los casos, estos sectores son más bien individualistas, conservadores del orden social neoliberal, con “un interés sustancial en el *status quo*” y “poca evidencia estructural a favor de una posible alianza con la clase obrera” (Ruiz, 2013: 78). Creemos que hay en estos aspectos mucho que debatir, pues dice relación con las alianzas estratégicas posibles entre el campo popular y grupos medios – en particular los grupos medios precarizados - en torno a fracciones organizadas de los y las trabajadores, potencial explosivo descartado como poco probable por Ruiz y Boccardo. Pero conviene, primero, relativizar fuertemente el mentado lema de la sociedad chilena como sociedad “clasemediera”, con el riesgo de sobre-representar así el espacio cuantitativo y político de la “mesocratización” (Barozet, Espinoza, 2009):

²⁵ Ver: <www.desigualdades.cl>.

²⁶ “La definición de la clase de servicio se centra en ciertos elementos. Asume que, aunque estos grupos no participan de la propiedad de los medios de producción, se diferencian de la clase obrera porque realizan un trabajo no productivo” (Ruiz, 2013: 80).

²⁷ Consultar <www.nodoxxi.cl>.

“Con sólo un tercio de la población ocupada en actividades de servicio, la sociedad chilena se encuentra lejos de una “economía moderna de servicio”. Más aún, el grupo de trabajadores manuales, que representa otro tercio de la estructura socio-ocupacional chilena está compuesto mayoritariamente por trabajadores manuales sin calificación (cerca de 20%). El contraste entre los trabajadores en actividades de servicio y los trabajadores manuales muestra el alto contraste en las ocupaciones no agrícolas. (...) Finalmente, las clases populares, compuestas por trabajadores manuales calificados y sin calificación, pequeños propietarios y trabajadores agrícolas, comprenden 47% de la población. Esta pirámide social se asemeja a la de otros países de la región, en los cuales los sectores populares representan gran parte de la población, con una clase media exigua y una elite aún más reducida” (Espinoza, Barozet, Méndez, 2013).

De esta manera, la estructura social del “neoliberalismo maduro” permite detectar la formación de nuevas configuraciones de clase; y por ende de nuevos agentes, como también la fuerte presencia de las clases populares que sustentan con su trabajo el edificio neoliberal. Este proceso está articulado con la extensión del asalariado, incluyendo a grupos intermedios urbanos diplomados pero incluyendo a mucho jóvenes a menudo precarizados y desafiados, que configuran -como en otros países de la región- un “nuevo proletariado en el siglo XXI”, más que directamente una soñada nueva clase media “emergente” (Therborn, 2012). De hecho, es lo que demuestran los estudios estadísticos del sociólogo Pablo Pérez que también van en sentido contrario a lo sugerido por Ruiz y Boccardo. Pérez recuerda que, desde una perspectiva marxista contemporánea, se entiende el concepto de “clase media” como el conjunto de asalariados que se diferencia de las posiciones de la clase trabajadora por calificaciones de alto nivel (por ejemplo, profesionales y expertos) y/o cargos de autoridad dentro de la jerarquía de las empresas (por ejemplo, supervisores y gerentes). Con esta definición más precisa, los datos oficiales demuestran que –al contrario de la idea de la creciente mesocratización-, entre 2001 y 2010, la clase media *disminuyó* en Chile, pasando de 23,2% a 16,4%, mientras que los profesionales “expertos”, muchas veces resaltados como el parangón de la “nueva clase media chilena”, no representan más del 7% de la estructura de clases (Pérez, 2015a).

Por otra parte, comprender la irrupción de los diversos actores movilizados en años recientes es también entender las dinámicas en curso tanto en términos de movilidad, nuevas subjetividades o de “economía moral” y *politicidad*, más allá de su estricta ubicación en la estructura social. Como lo han enfatizado los trabajos de Erik Olin Wright es indispensable tener un análisis *combinado* de las clases sociales, integrando una mirada sobre estratificación social, pero sin opacar el hecho que, en el sistema capitalista, las clases se construyen como relaciones sociales de explotación y dominación, es decir como dinámica de conflicto (Olin Wright, 2009). El caso chileno lo evidencia dramáticamente. La pérdida de poder y de referentes sociopolíticos por parte de las clases populares, la transformación de los imaginarios colectivos o de asociatividad clasista en el seno de los “de abajo” después de 1973, nos dan claves para entender la precariedad de la situación de sujetos históricos como el movimiento obrero y sindical, como también el por qué del surgimiento del movimiento por la educación del 2011. La socio-génesis neoliberal avanzada es *ante todo* fruto directo de las luchas de clases y de un rumbo político que ha experimentado el país desde el golpe de Estado hasta la fecha. La dictadura cívico-militar no fue sólo un proyecto económico, se preocupó de destruir las formas más visibles del protagonismo histórico del movimiento popular: los partidos de izquierda, los sindicatos, las organizaciones armadas. Pero nunca pudo impedir el resurgir de las grandes protestas de los años 80, las múltiples huelgas obreras y jornadas de luchas callejeras en poblaciones o las diferentes estrategias de resistencia político-militar (Salazar, 2006). Todas estas formas de violencia y movilización popular afloraron y crecieron hasta la transición pactada. No obstante:

“Lo que nunca pudo lograr la dictadura militar, sí lo hizo la Concertación (la ‘clase política civil’) al poder operar en la subjetividad de aquellos que formaron parte de un movimiento de ciudadanos de carne y hueso que estuvo dispuesto a dar la vida no sólo por la salida del dictador, sino que también por la construcción de un orden radicalmente distinto al que, finalmente, triunfó. Esta fue tal vez la derrota más dura y paradójicamente la menos sangrienta que ha vivido el movimiento popular chileno. Este perdió vigor y su proyecto que aún estaba por hacerse se vio truncado. Sólo así puede entenderse la actual ‘estabilidad’ y ‘legitimidad’ del Estado Neoliberal, una estabilidad de derrotados que pasivamente acatan el orden impuesto. Sin embargo, el mundo popular parece haber sufrido transmutaciones que hoy lo llevan a distanciarse de la clase política civil, la misma que los instrumentalizó es ahora cuestionada, el descontento con el orden establecido y las protestas han vuelto (no con el grado de intensidad y masividad de los años 80). Con ello quizás la historicidad (esa capacidad de construir la historia) esté de regreso” (Carrillo Ramos, 2009).

3/ ¿El retorno de la clase obrera? Trabajadores, recomposiciones sindicales limitadas y luchas estratégicas emblemáticas

Si uno analiza críticamente los estudios sobre el malestar ciudadano y la teoría del próximo “derrumbe del modelo” (teoría del sociólogo Alberto Mayol que exponemos más abajo), la hipótesis de las posibles “correcciones progresistas” del neoliberalismo por parte de los gobiernos civiles (Garretón) o incluso varios textos de Tomás Moulian, es menester señalar un olvido central, o más bien un *silencio aturdidor*, que le quita fuerza a gran parte de la argumentación, estemos o no de acuerdo con sus postulados iniciales: el estudio de las relaciones capital – trabajo y de las transformaciones laborales. Al contrario, situar la constitución del capitalismo neoliberal ante todo como régimen de acumulación flexible y proyecto de clase (Harvey, 2013), nos permite develar que actualmente la situación del trabajo en las relaciones de producción del neoliberalismo maduro deben estar en el centro tanto de la clave explicativa de las dificultades del movimiento obrero-popular para “derrumbar” al modelo, como en el momento de explicar los niveles de estabilidad relativa que logró forjar el empresariado desde el “giro” de 1975. El eje del modelo es su capacidad de explotación del trabajo enajenado. El joven Marx insistió en este proceso de apropiación de la plusvalía y del producto del trabajo como carácter fundamental del capitalismo:

El trabajo no sólo produce mercancías; se produce también a sí mismo y al obrero como *mercancía*, y justamente en la proporción en que produce mercancías en general. Este hecho, por lo demás, no expresa sino esto: el objeto que el trabajo produce, su producto, se enfrenta a él como un *ser extraño*, como un *poder independiente* del productor. El producto del trabajo es el trabajo que se ha fijado en un objeto, que se ha hecho cosa; el producto es la objetivación del trabajo. La realización del trabajo es su objetivación. Esta realización del trabajo aparece en el estadio de la Economía Política como *desrealización* del trabajador, la objetivación como *pérdida* del *objeto* y servidumbre a él, la apropiación como *extrañamiento*, como enajenación (Marx, 1844).

Esta enajenación del asalariado parece cada vez más “universal” bajo el régimen del capitalismo neoliberal, y específicamente en el caso chileno. Siguiendo las estadísticas oficiales del INE, Santiago Aguiar recuerda que a pesar del fenómeno masivo del “cuenta-propismo” y del “trabajador-emprendedor” independiente (más de 23% del total de la PEA), globalmente las y los asalariados²⁸ nunca fueron tan numerosos hoy en Chile, superando el 66% del mercado laboral (cifras 2006), e incluso representan el 74.7% de la población urbana chilena (cifra próxima a la de

²⁸ Los asalariados entendidos aquí como aquellos que tienen sólo su fuerza de trabajo (física y/o intelectual) para subsistir y deben venderla a aquellos que son propietarios o controlan y administran los medios de producción.

Argentina según T. Undurraga, 2014: 217). Además, mirando la composición interna de todos los activos, puede verse que predominan lo que clásicamente se llama “obreros” (asalariados que realizan trabajos manuales y repetitivos), por sobre las capas de trabajadores que realizan un trabajo de oficina o gerencial (ver cifras en Anexo 2 y Aguiar, 2010). Eso sí existe una clase asalariada globalmente muy diferenciada y flexibilizada, con condiciones de organicidad todavía extremadamente frágiles, lejos de la fisonomía del movimiento obrero clasista de los años 70:

“la mayor flexibilidad y la enorme rotación laboral, acarrear una variedad de modalidades de trabajo y producción que, pese a la caída de los grados de informalidad, trastoca la vieja fisonomía de las clases trabajadoras. La emergencia de nuevas fracciones asalariadas – ligadas a diversos modos de encadenamiento productivo de las pequeñas y medianas empresas con aquellas propias del gran capital– acompañan en la última década una mayor conflictividad propia de nuevos actores asociados al nuevo panorama de la condición asalariada, los cuales guardan escasa relación con las viejas formas sindicales, reflejando también nuevos procesos de formación de clases. Ambas transformaciones en las viejas condiciones de clase, en este caso especialmente cifradas sobre aquellas posiciones de mayor centralidad política, social y cultural en el curso histórico nacional-popular, plantean nuevos dilemas de comprensión, no sólo desde el punto de vista estructural, sino también en términos de sus modalidades de constitución política y cultural” (Ruiz, 2013: 10-11).

Pensamos también que es necesario abrir más esta reflexión y que precisamente los escasos estudios universitarios sobre las temáticas de los conflictos de clases, las relaciones laborales y el movimiento sindical en tiempos neoliberales pesan muchísimo cuando se trata de entender mejor las sociedades contemporáneas. No obstante, constatar el surgir de nuevos agentes sociales y las dificultades “de las viejas modalidades de identidad por el oficio”, no pueden conducir mecánicamente a insinuar la idea de una “pérdida de la centralidad” de la clase obrera-asalariada como actor de toda transformación política postcapitalista (sin por eso caer en el “obrerismo”).

Reconociendo que el mundo del trabajo se ha vuelto mucho más heterogéneo, complejo y fragmentado, estas nuevas características que está asumiendo el asalariado en el régimen neoliberal no apuntan a la extinción de la clase obrera, sino más bien a su extensión en diversas esferas (como los servicios), aunque en condiciones laborales, de conciencia de clase y de organicidad precarias. Así, más que comprender el “fin del proletariado”, al igual que varios autores²⁹, pensamos que el desafío es desentrañar el complejo proceso de formación de estas nuevas relaciones de producción, pero no sólo constatando estudiosamente sus cambios estructurales o el fin de las “viejas clases” del periodo nacional-popular (como lo hacen Ruiz y Bocco, 2014: 143-173). En buena medida, dichas conclusiones solo pueden inferirse cruzando esta lectura con otras publicaciones de los autores, constatando que sus tesis estratégicas se alejan no sólo de las ortodoxias del “marxismo vulgar” (en buena hora), sino fundamentalmente del materialismo histórico y de su filosofía de la praxis. Compartimos así parte del diagnóstico (la metamorfosis de la clase obrera, la tercerización del asalariado o la fuerte disminución de sus componentes industriales son fenómenos profundos), pero no sus conclusiones estratégicas: pensar las alternativas postcapitalistas obliga a cierto “optimismo de la voluntad” y a ver, bajo la superficie, los sectores de trabajadores en lucha en la última década y sus potenciales alianzas con las amplias franjas de los grupos medios precarizados, y jóvenes diplomados urbanos, puentes que podrían representar una base social sólida para resistencias al neoliberalismo en el siglo XXI, como ya está ocurriendo en otros países latinoamericanos y del mundo (Therborn, 2014). Sin tales presupuestos, el riesgo es apuntar simplemente a nuevos pactos sociales reformistas dentro el sistema institucional, incluso con los

²⁹ Ver la sección « debates sobre el Trabajo » de la Revista argentina *Herramienta*: <www.herramienta.com.ar/content/debates-sobre-trabajo-trabajo-abstracto>.

grupos dominantes, constatando desde un pesimismo “razonable” la imposibilidad estructural del cambio (casi desaparición del movimiento obrero, individualismo de los sectores intermedios, derrota de las izquierdas), añorando así el periodo anterior al golpe de Estado.

Como lo apunta Ricardo Antunes, con la crisis de la clase obrera tradicional e industrial nació la figura de una *clase-que-vive-del-trabajo*, con altos niveles de *complejización*, *fragmentación* y *tercerización* (un proceso confirmado por el Anexo 1). Los procesos de reestructuración productiva de las últimas décadas han conllevado una dinámica de “flexiprecarización”, acompañada de una fuerte inestabilidad laboral y trabajo informal que se constituyen tanto desde el proceso de producción como en el proceso de trabajo, con sus cambios tecnológicos y diversas innovaciones flexibilizadoras. Por esto mismo, “no se trata de un efecto transitorio o no deseado”, que se podría corregir, sino de ajustes de fondo del capital sobre el trabajo destinados a recomponer las tasas de ganancia y controlar mejor la mano de obra (Aguilar, 2009). Estas diferentes modificaciones afectan no sólo la *materialidad* del asalariado, sino que tienen profundas repercusiones en su subjetividad, en su cultura, como también en el íntimo relacionamiento entre estos niveles y “su *forma de ser*”, modificando “el universo de la conciencia, de la subjetividad de los trabajadores, de sus formas de representación, de las cuales los sindicatos son una expresión” (Antunes, 2003). Pero no por eso se borró el lugar central del trabajo en el capitalismo latinoamericano, ni tampoco el elemento estructurante del conflicto capital-trabajo. Por ejemplo, en el caso de Argentina, Adrián Piva muestra que más que “fin de la clase obrera”, hay que subrayar su creciente desorganización, lo que significó una pérdida de peso social de las acciones de clase dentro del conjunto de las luchas sociales y la fragmentación de las acciones del proletariado: esta dinámica va acompañada de la casi desaparición de la noción de clases sociales de las categorías de análisis académicos. No obstante, desde hace algunos años, la clase obrera argentina supo salir con fuerza del “país invisible” reencontrando el camino de las luchas combativas, e incluso de la autogestión obrera (Piva, 2011). En Chile, la potencia del dominio del capital oligopólico es ahora una experiencia cotidiana para millones de chilenos. Estudios de la Dirección del trabajo, en particular de Magdalena Echeverría, demuestran la dimensión de la explosiva precariedad y de los procesos de subcontratación. De hecho, el *fin de la Dictadura no significó un cambio sustancial en la reglamentación y externalización de actividades económicas. La ley de subcontratación, que finalmente se aprobó en 2007, distingue entre la subcontratación laboral y el suministro de trabajadores por parte de una empresa intermediaria, pero en ambas figuras se trata de relaciones triangulares, en la cual los trabajadores se encuentran en una situación de fuerte dependencia y vulnerabilidad*: el porcentaje de las firmas que hacen uso de la subcontratación en Chile es masivo y se ha movido en los últimos años entre más del 50%, en su punto más alto y un poco más del 30% (Echeverría, 2010). Según la Encuesta Laboral (ENCLA) 2011, 38% de las empresas usan este sistema y la cuarta parte de las empresas que subcontratan encargan trabajos que forman parte de su giro principal³⁰. Desde el año 2010, 7 de cada 10 empleos creados son tercerizados, un fenómeno que actúa de manera diferenciada por sector, pero también desde una perspectiva de género: si 55,7% de los hombres son tercerizados, esta cifra se eleva a 79,6% para las mujeres (Galdámez, Aedo, 2014).

Por otra parte, según cálculos de la Fundación SOL, en los últimos 20 años, la productividad del trabajo (PIB dividido por horas trabajadas) ha aumentado en un 90%, pero las remuneraciones reales terminaron creciendo sólo en un 20%, lo que significa que existe un alto excedente productivo no remunerado (con un 70% que fue ganancia directa del empresariado). Este contraste creciente desde 1998 entre productividad y salarios reales muestra concretamente la dimensión de una nueva

30

La ENCLA es la principal y más completa encuesta sobre condiciones de trabajo y relaciones laborales que se realiza en Chile, la última se realizó en 2011 (ENCLA, 2011).

ofensiva empresarial contra el trabajo, en contexto de neoliberalismo maduro (ver Anexo 6). Esto es tan claro que las remuneraciones de los asalariados, que en promedio se habían elevado un 4,9% anual entre 1990-1995, aumentaron sólo en un 1,7% entre 1999-2005; mientras tanto se endeudaban el 60% de las familias chilenas. En la actualidad, 50% de los asalariados privados recibe un ingreso menor a 455 dólares US por su ocupación principal (encuesta CASEN 2011), cuando en 2011, los sueldos de los gerentes generales de las grandes empresas subieron más del 15% real (Narbona, Páez, 2014). No obstante esta situación, diversas encuestas muestran que la clase continúa siendo un aspecto central en la configuración de orientaciones ideológicas antagónicas, lo cual explica el repunte de los conflictos laborales desde el 2006-2007 y podría ser la fuente de importantes conflictos políticos en el futuro y de una rearme del movimiento obrero, “encontrando lo que nunca fue perdido”: la conciencia de clase. Es más, las investigaciones ya citadas de Pablo Pérez refutan la idea según la cual la base del descontento sociopolítico actual estaría situado en los segmentos intermedios y sitúa en los trabajadores este sentir que viene y crece “desde abajo” en el Chile de hoy. Según el doctorante de la Universidad de California:

No está claro por qué este malestar tendría que ser definido como de “clase media” y no de “clase trabajadora” o al menos “de clase media y de clase trabajadora”. Esta clase trabajadora no sólo es la mayoritaria, sino que es la que experimenta las condiciones más precarias de empleo. A modo de ejemplo, datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Trabajo y Salud de 2010 muestran que mientras el 5% de los profesionales expertos tiene un trabajo de temporada o estacional, dicho porcentaje es de casi 5 veces más (24%) para el caso de los trabajadores no calificados. De modo similar, la encuesta muestra que mientras cerca del 90% de los profesionales cotiza en algún sistema previsional, sólo el 65% de los trabajadores no calificados lo hace (dicho porcentaje es incluso menor, llegando a menos de 15%, para el caso de los trabajadores no calificados que trabajan como autoempleados en el sector informal) (Pérez, 2015a).

Esta condición objetiva es confirmada por el estado subjetivo de los trabajadores, cuando varias encuestas y un amplio estudio empírico confirman que el tan trillado “malestar” está mucho más presente dentro de las filas de la clase trabajadora calificada y no calificada, que en el seno de los grupos medios altos: las respuestas más críticas a la manera en que se estructura la desigualdad en Chile se concentran de manera notable en la clase trabajadora (especialmente en torno a su segmento no calificado), pero también en los sectores de “cuello blanco” que, a pesar de los tópicos sobre esos trabajadores chilenos, muestran también una marcada conciencia de clase y de su posición subordinada en la estructura productiva (Pérez, 2015b).³¹.

Sin embargo, como en varios países de la región, el sindicalismo y el movimiento obrero salieron de la dictadura cívico-militar deshechos y si bien los sindicalistas que lograron sobrevivir al terrorismo de Estado recapturaron parcelas de su capacidad de luchar, organizar y negociar a partir de 1990, fue dentro de los estrechos márgenes de la transición pactada. Para el historiador estadounidense Paul Drake:

“Desde un punto de vista, Pinochet tuvo éxito en su determinación de eliminar cualquier alternativa al capitalismo del mercado y cualquier posibilidad de un proyecto socialista de los trabajadores y sus partidarios izquierdistas” (Drake, 2003).

El verdadero *pilar* del modelo económico, social y político instaurado desde mitad de los 70’ -e incólume en sus aspectos fundamentales hasta hoy- fue lograr mantener niveles extremadamente intensos de explotación del trabajo con una tasa de extracción de plusvalía al alza,

³¹ Así, por ejemplo, la inmensa mayoría de los trabajadores calificados y no calificados (alrededor del 75%) afirma que ganan menos o mucho menos de lo que merecen (solo 48% de los gerentes y de 60% de los expertos piensan lo mismo).

en particular desde finales de los 90. Especialmente dañinos en este sentido fueron el Plan Laboral (1979) y el nuevo Código del Trabajo, que consagraron un modelo laboral altamente asimétrico y favorable para el reforzamiento del poder (casi total) del empresariado y del capital por sobre el trabajo. El *Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2014* de la Universidad Diego Portales describe el panorama de los derechos laborales en el país, como “bastante desolador”:

“principalmente por la escasa y en algunos casos nula intervención del Estado para los efectos de dar una adecuada protección frente a los actos ejercidos por empleadores tendientes a mermar o anular el derecho de huelga, y por el tratamiento que recibe el ejercicio de este derecho por parte de los medios de comunicación social: resaltando situaciones puntuales de violencia e invisibilizando el conflicto laboral de fondo que está detrás” (UDP, 2014).

Citemos en particular: el resquicio legal del “Multirut”³² (recientemente reformado pero no del todo anulado) que permitía impedir una negociación colectiva unitaria de trabajadores incluso al interior de una misma empresa; la exagerada tramitación burocrática que requiere un proceso de huelga y su ilegalidad fuera de un largo proceso de negociación colectiva; el impedimento para negociar sindicalmente aspectos relativos a la organización y dirección del proceso de trabajo; la subcontratación permitida en todas las ramas de la economía; el derecho a reemplazo de los trabajadores en huelga y al *lock out* por parte de los empresarios; el relegamiento de la negociación colectiva a nivel de unidad productiva (y no de rama); la ilegalidad de la negociación colectiva y de la huelga en el sector público o municipal, etc. La gran mayoría de estas medidas que prevalecen hasta el día de hoy, edificando unos de los códigos laborales más regresivo e hiper-regulado del mundo, a pesar de las reformas realizadas en tiempos pos-autoritarios (Narbona, 2014). La gran reforma laboral anunciada por el gobierno Bachelet, y denunciada como “reforma sindical” por la derecha y el empresariado, significa algunos tímidos avances esperados por los asalariados, pero sobre todo, está acompañada de no pocas ambigüedades y numerosos retrocesos... Dentro de lo que podrían ser avances se pueden notar la titularidad sindical para negociar colectivamente, la rebaja de 4 a 3 años del máximo de vigencia de los instrumentos colectivos o la propiedad de los beneficios de la negociación, pero globalmente y estructuralmente, esta reforma mantiene el legado del Plan Laboral redactado por José Piñera en 1978. Además, el contenido del proyecto muestra un gobierno obsesionado por conseguir aun más *paz social* y un “contrato social” entre las clases para implementar lo que denomina “colaboración estratégica” que podría permitir “a las empresas apoyarse en los sindicatos para poner en práctica una gestión satisfactoria de los recursos humanos”³³: es decir en el escenario chileno, darle aun más poder al gran empresariado... La inmensa debilidad sindical es también validada con confirmación de la imposibilidad de negociar más allá de la empresa individual, vetando toda perspectiva para los y las asalariados de una articulación en función de ramas de la producción, de la pertenencia a un mismo holding, o a un mismo territorio. También introduce la concepción insólita de “huelga pacífica” o de “servicio mínimo” e incluso de *reemplazo interno* de los trabajadores en huelga, otras maneras de negar el ejercicio del derecho pleno a huelga como es reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT); legitima la prohibición de negociación y huelga en amplios sectores del mundo del trabajo (públicos y fiscales en particular), confirma el exceso de tutela administrativa en los sectores que pueden negociar, introduce la noción de “flexibilidad pactada”, etc³⁴. Además, la nueva ley plantea que la empresa mantiene su derecho a *lock-out*, es decir, a cerrar en caso de huelga, y por lo tanto a suspender el contrato de trabajo de sus empleados.

³² Permite a una empresa única declarar varias razones sociales y así dividir trabajadores o trabar la creación de sindicatos. Supermercado como “Totus” del grupo Cencosud lograron tener hasta más de 36 razones sociales en Chile (cifras 2014)...

³³ Ministerio Secretaría General de la Presidencia 2014 “Mensaje de S.E. La Presidenta de la República con el que se inicia proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales, introduciendo modificaciones al Código del Trabajo” (República de Chile: Santiago) 29 de diciembre.

En su intervención, a principios de marzo 2015, en la comisión “trabajo” de la cámara de diputados, el jurista laboralista de la Universidad Diego Portales José Luis Ugarte no dudó en subrayar después de un detallado e informado análisis que, finalmente, el proyecto presentado por el gobierno, en caso que no fuese radicalmente modificado por el Parlamento, representaría una “actualización” y “consolidación” del plan laboral de la dictadura, pero en ningún caso un progreso democrático para los trabajadores. Una opinión compartida por varios especialistas del tema y no pocos sindicalistas. En mismo académico escribía algunos meses antes, a propósito del estado del derecho a negociación colectiva en Chile y la ausencia del derecho a organización por rama:

“en la reforma del Gobierno, no hay espacio para el 70% de los trabajadores chilenos que laboran en empresas donde no se pueden formar sindicatos –porque no hay 8 trabajadores–, cuya única esperanza es que sus condiciones de trabajo fueran negociadas en el nivel de rama o sector de producción. Seguiremos siendo, entonces, el país que da vergüenza en materia de derechos colectivos en la propia OCDE: mientras el 60% promedio negocia colectivamente en los países que la integran, en Chile sólo el 8%. La dudas que este proyecto genera son obvias: ¿era esta la reforma laboral que se les había ofrecido a los trabajadores chilenos? ¿Debemos conformarnos con que la sociedad más igualitaria de la Nueva Mayoría no incluye el trabajo? ¿Para este capitalismo sin equilibrios era la mayoría parlamentaria para Bachelet? Algo ya sabemos al menos. En la cocina de las reformas laborales no hay nada dulce para los trabajadores. Solo sabores amargos” (Ugarte, 2014).

En este plano también el actual gobierno se inscribe en la continuidad de la clase dominante civilo-empresarial neoliberal y de 2 décadas de gobierno de la Concertación:

“Las diversas etapas históricas del nuevo régimen de acumulación, tienen un hilo común que es casi indiferente -pero profundo- al discurso político que intenta ser diferenciador de las políticas de gobierno intraconcertacionistas, ya sea por los demócratacristianos y socialistas. Como se analizó fueron no sólo manos amarradas, sino que también impulsores técnicos y normativos de profundización de las desiguales condiciones políticas de las clases subalternas para organizar y decidir sobre su vida material y política” (Narbona, Páez, 2014).

Así se puede comprender el rol histórico jugado por el Gobierno (en particular por el Partido socialista) y la gran moderación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT - la multisindical más grande hasta el día de hoy, dirigida entonces también por la Concertación) durante los llamados “Acuerdos marco tripartitos” (1991-1993), con los que se esperaba crear una instancia de diálogo y acuerdos con el empresariado, de modo que los primeros años de la transición transcurrieran casi sin movilizaciones y con un movimiento obrero que operara esencialmente como fuerza auxiliar del nuevo bloque dominante (Osorio, 2013).

Esta situación reforzó la tendencia a la baja de la sindicalización (ver Anexo 7): el porcentaje de la fuerza de trabajo sindicalizada, que desde comienzos de los ochenta se recuperaba lentamente, cayó desde un pico de 14% en 1992 hasta un magro 9% hacia 1997, mientras que el porcentaje de los trabajadores involucrados en negociaciones colectivas también descendió en términos relativos de un 7,6% a un 5,9% (Aravena, Núñez, 2011). El corolario de todo esto fue un alejamiento de crecientes sectores de trabajadores del sindicalismo representado por la CUT, central que intentó a partir del 2003 recuperar legitimidad con una postura más confrontacional, cuando ya no contaba con la fuerza necesaria, ni la representatividad³⁵ para golpear la mesa. Los sectores con perspectivas de transformaciones más radicales, a su vez, se replegaron en sindicatos y proyectos de multisindicales que no lograron salir del marasmo, salvo para sectores como los trabajadores de la

³⁴ Sobre estos aspectos, ver los diferentes análisis publicados por el periódico *El Desconcierto* (Santiago): <<http://eldesconcierto.cl>> o en Rebelión (Madrid): <www.rebelion.org>.

salud municipal y el colegio de profesores, que lograron importantes conquistas durante el Gobierno de Patricio Aylwin (1990–1994). Las críticas a la directiva de la CUT, su burocratización, falta de democracia interna y ausencia de autonomía de la central explican también la aceleración de la atomización sindical, e incluso la creación de pequeñas centrales concurrentes, incluso más “moderadas” como la Unión nacional de trabajadores (UNT), el surgimiento de la Central autónoma de trabajadores (CAT) o la creación de corrientes críticas como la Confederación general de trabajadores (CGT) (Frías, 2008). No obstante, la división de la “elite sindical” en varios modelos de acción sindical, los años 2000 son años de lenta recuperación, mayor pluralismo en las formas de luchas, al mismo tiempo que la heterogeneidad sindical se radicaliza (Gutiérrez, 2013). Así, los inicios del siglo XXI corresponden también a un lento crecimiento, tanto de la tasa de sindicalización, como del número de sindicatos (ver Anexo 7) hasta alcanzar un 14% en 2013 (cifra todavía muy por debajo de los más de 30% alcanzado en 1973). Al mismo tiempo que otros actores sociales, el movimiento sindical recupera asimismo cierto nivel de incidencia y organización, pero partiendo de un piso muy bajo: la organización sindical es una institución con cierta presencia sólo en las grandes empresas, segmento en el cual casi la mitad de las unidades productivas tiene sindicato (48%). En cambio, en las empresas de menor tamaño, que constituyen la mayoría de las unidades empresariales del país, el sindicalismo es extremadamente minoritario. En efecto, sólo el 4,5% de las pequeñas empresas y el 1,6% de las microempresas tienen trabajadores sindicalizados (ENCLA, 2011).

A pesar de estas difíciles condiciones, a partir del 2006-2007, los conflictos de clases de los trabajadores, aunque todavía con un formato y una dimensión muy acotados, vuelven a emerger claramente. Esta revitalización parcial se traduce a través del número de huelgas, tanto legales, como ilegales: en los últimos años, las ilegales superan constantemente a las de tipo legal, y esta brecha tiende a aumentar. Según los estudios de Armstrong y Ávila, en 2009, sólo 22.000 trabajadores (sobre una población activa de 8 millones personas) participaron de huelgas legales, cuando son más de 1 millón 500.000 los que se vieron involucrados en conflictos considerados ilegales (Armstrong, Ávila, 2011). Por ejemplo, en el primer trimestre del 2014 se podían detectar 48 huelgas a nivel nacional, de las cuales casi la mitad eran ilegales, involucrando a más de 15.400 asalariados³⁶. Esas estadísticas confirman varios fenómenos. Primero, una conflictividad laboral creciente, aunque todavía atomizada, en particular a partir del primer mandato del gobierno de la socialista Michelle Bachelet (2006-2010). Segundo, la durable segmentación del movimiento sindical entre dos campos heterogéneos: por una parte, un polo “integrado”, minoritario, compuesto por las fracciones del asalariado con contratos más estables, pertenecientes a sectores tradicionales o estratégicos de la economía, y con mayor posibilidad de negociación colectiva; por otra parte, la gran masa de los trabajadores rurales y urbanos altamente precarizados, con salarios muy bajos, en sectores más feminizados, como por ejemplo la gran distribución (*retail*), agricultura o los servicios. Las recientes luchas en los *Call-center*, en cadenas de farmacias, en empresas de distribución (conductores y ayudantes de repartición de “Coca Cola”) o en grandes tiendas y supermercados (creación de la red sindical Cencosud) muestran que, a pesar de la precariedad, las violentas prácticas antisindicales y su menor visibilidad mediática, la organización combativa es posible, incluso en espacios que fueron durante mucho tiempo verdaderos desiertos sindicales. Hay que añadir a eso las numerosas luchas de trabajadores fiscales (hospitales, ministerios, municipios, etc.) y las movilizaciones de profesores, con una nueva generación (como el MUD, movimiento por la unidad docente) peleando incluso a nivel interno para recuperar un sindicalismo más democrático e independiente frente a cúpulas burocráticas, como es el caso en el Colegio de profesores. Empero,

³⁵ La CUT representaba sólo 6% de la PEA total en 2013 y ha perdido gran parte de su representación en el sector privado, contando con una sobrerrepresentación de organizaciones del sector fiscal y municipal, sectores no obstante muy combativos y organizados.

³⁶ Cifras compiladas por el Observatorio de Huelgas Laborales (OHL) y sistematizadas por el Centro de Investigación Político Social del Trabajo: <www.cipstra.cl>.

tal vez más que todos, son algunos “sectores obreros estratégicos” tal como los definió John Womack, con mayor capacidad de bloquear la economía a pesar de su carácter minoritario, que confirman la ubicación central del trabajo en el neoliberalismo maduro y su gran potencialidad política crítica (Womack, 2007).

“Del total de los sectores o ramas de la economía, las que más peso tienen en el total del PIB 2009 son: la minería (representa el 16,4% del PIB³⁷), los servicios financieros (representa el 15,9% del PIB) y la industria (representa el 12,7% del PIB). Puntualizar esto, es útil para aproximarnos a identificar las posiciones estratégicas en las que descansan y pueden ser afectadas las relaciones sociales entre el capital y el trabajo. En este sentido, las principales estructuras donde se posiciona estratégicamente la clase obrera en Chile está dada por el peso relativo de cada rama o sector de la economía, por su peso en la economía nacional, más que por el número de trabajadores. Por ejemplo, es claro que la minería, y el cobre en específico, sigue siendo “el sueldo de Chile”, sin embargo, ocupa una proporción insignificante de trabajadores” (Aguar, 2010)³⁸.

En la última década, algunas de estas fracciones de asalariados, intensamente tocados por procesos de subcontratación, hicieron verdaderamente temblar al gran empresariado chileno y transnacional. Lo que los universitarios Núñez y Aravena llamaron el “renacer de la huelga obrera” (Aravena, Núñez, 2009) ha sido simbolizado, entre otros, por la gran movilización de los trabajadores subcontratados de la Corporación de desarrollo del cobre (CODELCO). La fundación de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), bajo la dirección del militante comunista Cristian Cuevas, la muy combativa huelga del año 2007 de gran parte de los 25000 subcontratados de CODELCO, combinando paralización, cortes de ruta, enfrentamientos con la policía y negociación con el gobierno, permitieron arrancar importantes beneficios para los mineros. En regiones y en el sector privado, los conflictos y huelgas en empresas forestales entre marzo y mayo 2007 (forestal Arauco del holding COPEC) o la “huelga larga” de miles de obreras en empresas salmoneras en 2008, sacudieron al país, aunque no fueron siempre victoriosas y si sistemáticamente criminalizadas. Este despertar ha sido acompañado en un segundo tiempo por nuevas resistencias laborales: siendo la más impactante, la larga movilización (2011-2014) de los trabajadores portuarios, con flujos y reflujos, victorias y represiones, que lograron forjar una Unión Portuaria, sin existencia legal pero con un inmenso poder real. Coordinando huelgas “solidarias” en todo el territorio y paralización nacional de los puertos, impusieron una agenda legislativa a los dos gobiernos de turno (presidencia Piñera y segundo gobierno Bachelet), el reconocimiento de parte de sus reivindicaciones (con la llamada “ley corta” portuaria de 2014) y, sobre todo, sentaron en la mesa de negociación al empresariado más potente del país, por encima de las empresas intermediarias subcontratistas³⁹.

Estos movimientos tienen características distintas a las del sindicalismo tradicional. No los unen ni los oficios ni la empresa a la que pertenecen, sino que precisamente su transitoriedad, lo cual los dispone a actuar colectivamente en torno a intereses más generales que los propios e inmediatos. En estas nuevas organizaciones la afiliación se mantiene con independencia de que los trabajadores estén o no empleados o si trabajan en la misma empresa, faena o proyecto. En el caso de los portuarios la afiliación se conserva a pesar de que los contratos con las empresas de estiba tienen una duración 8 horas y nada asegura que

³⁷ Estos porcentajes varían de acuerdo a varios factores: precio internacional de los productos, las crisis económicas, etc. Por ejemplo, en 2007, la minería representaba el 24,4% del PIB.

³⁸ Ver estructura del PIB en Anexo 2.

³⁹ Ver los diferentes reportajes sobre este ciclo de luchas portuarias realizado por el periódico *Resumen* (Concepción): <<http://resumen.cl>>.

al día, semana o mes siguientes puedan ser contratados de nuevo. La segunda característica y dificultad que los diferencia del sindicalismo tradicional es que para poder negociar su acción deben, ahora sí y de hecho, en “levantar el velo y en “forzar a que la contraparte patronal real se constituya como tal. Los subcontratados para realmente aspirar a negociar tienen ante todo que preocuparse de obligar a que “el empleador real aparezca, muestre la cara y acepte negociar. Y hoy en día el verdadero empleador no está necesariamente en la misma rama de actividad, sino en el holding o el grupo económico y/o la empresa principal mandante (Echeverría, 2010: 20).

Ese surgimiento, desde las entrañas mismas del trabajo flexibilizado-precario, facilitó también la aparición de estrategias sindicales en otros ámbitos, incluyendo al sector público (hospitales, profesores, empleados municipales) intentado utilizar una variada gama de repertorios de luchas, redes de apoyo, *dentro* pero también *fuera* de la institucionalidad laboral. Se puede afirmar que estos conflictos sindicales anunciaron el nuevo ciclo de luchas más amplias que irrumpió fuertemente a partir de 2011, y abre la discusión sobre la constitución de un sindicalismo clasista en condiciones de neoliberalismo maduro. Ahora bien, hay que reconocer que los obstáculos son muy numerosos para la recomposición de un sindicalismo clasista. Ya hemos explicado la dimensión de las dificultades y atomización, que enfrentan los asalariados. Se podría citar también la existencia de generaciones enteras de sindicalistas formados al alero de una institucionalidad restrictiva, numerosas formas clientelares en las organizaciones, la débil feminización de las direcciones sindicales⁴⁰ y la presencia de lo que Francisca Gutiérrez nombra “sindicalismo social”, es decir un sindicalismo integrado a la empresa, que rechaza toda forma de movilización del colectivo -huelga, manifestación, etc.- por considerarla una “manifestación política innecesaria” y “prefiere solucionar los problemas de los trabajadores uno a uno, a través de un dialogo directo e informal con la directiva de la empresa” (Gutiérrez, 2013). Dentro del debate actual de los sectores del “sindicalismo políticos” están, en particular, las interrogantes sobre el liderazgo que tendría que encaminar la CUT: la multisindical es considerada por numerosos dirigentes como una palanca indispensable para la unidad de la clase y una herramienta que habría que reconquistar desde otras bases, pensando en la otrora gloriosa CUT (Centra *Única* de los Trabajadores) de los tiempos de Clotario Blest en los años 50 y 60. Al contrario, otras fracciones pregonan la construcción de un “nuevo sindicalismo clasista”, autónomo de la CUT y sus maniobras partidarias. Este debate no puede ser sólo sindical ya que está sumamente ligado a perspectivas políticas sobre la coyuntura nacional. A pesar de su debilitamiento, la CUT sigue siendo la principal Central y permanece bajo la conducción mayoritaria de fuerzas políticas afines al gobierno. Así, Bárbara Figueroa, dirigente del Partido Comunista y hoy presidenta de la central (después de años de hegemonía de Arturo Martínez, militante socialista cercano a M. Bachelet, ahora vice-presidente), escribía en julio 2014:

“Estamos conscientes de nuestro papel en este ciclo político, los trabajadores estamos avanzando en estos años lo que no se pudo en los últimos 40, desatando las últimas amarras de un modelo neoliberal que se agotó. Estamos en la ruta de construir un nuevo modelo de desarrollo, donde el trabajo y no el capital esté al centro” (Figueroa, 2014).

Esta afirmación se realizó 24 horas después del último acuerdo sobre salario mínimo y reformas laborales con el actual gobierno de Michelle Bachelet. El monto acordado (225 mil pesos en 2014 para alcanzar 250 mil pesos -450 dólares US- en 2016), como la agenda laboral de la ministra del trabajo fueron presentados por la CUT como un hito histórico que “empareja la cancha” entre trabajadores y empresarios. Sin embargo, los resultados de la reciente reforma produjeron cierto descontento en un porcentaje no menor de dirigentes en todo el país, incluyendo

⁴⁰ Sólo 22,3% de los sindicatos tenían mujeres con cargos directivos en 2011 (ENCLA, 2011).

en la dirección de la CUT. Fernando Kursan, dirigente nacional de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) es representativo de esa molestia:

“Está cuestionada la autonomía de la CUT y la del movimiento sindical. Parece que la Central estuviera mandatada por el Programa de Gobierno y la mayoría de los dirigentes disienten de esa postura. No están escuchando a los trabajadores sino que a los partidos políticos de la Nueva Mayoría” (CONFUSAM, 2014).

No cabe duda que si uno analiza con distancia el último acuerdo salarial, Chile queda muy por detrás de la inmensa mayoría de los países de la OCDE y el monto acordado representa sólo un aumento del 6% en términos reales. O sea, una suma cercana a la del vilipendiado gobierno Piñera y que hace que, desde 2002, los salarios ni siquiera sigan el crecimiento del PIB (ver Anexo 8). Como lo anotaban en 2014 dos analistas del Centro de investigación político social del trabajo (CIPSTRA):

“Las deudas pendientes de la Concertación en cuanto a los cambios en el Código del Trabajo, lejos de invitar a la CUT a firmar más cheques en blanco y declaraciones de buena crianza, debieran derivar en un rescate de la política sindical que mejores resultados ha dado desde el retorno a la Democracia: un sindicalismo con un proyecto propio que no dependa de los gobiernos de turno, enraizado en la discusión democrática e inclusiva de las amplias bases de trabajadores, y con disposición a la lucha directa contra la institucionalidad empresarial y sus representantes. Y este imperativo cobra mayor fuerza en momentos en que la Nueva Mayoría reedita con el proyecto de Multirut y Reforma Tributaria la vieja política de los consensos” (Osorio, Rivas 2014)

Otro tremendo desafío para las organizaciones de trabajadores es lograr enfrentar la flexibilización del capital en su doble dimensión: como flexibilidad laboral y como flexibilidad territorial. El régimen de acumulación flexible en vigor en Chile recuerda hasta qué punto la estrategia de acumulación por desposesión de las multinacionales y/o de los oligopolios locales se inscribe en una fuerte tensión con las comunidades y el territorio que asedian.

“Los territorios son hoy día un lugar de disputa, ya que el capitalismo se ha volcado en los últimos años a la acumulación y explotación de recursos como el agua, los recursos pesqueros, minerales y un sin número de riquezas naturales, lo que ha generado una serie de conflictos detonados por la presencia de grandes capitales en territorios que antes no le eran apetecidos” (Galdámez, Aedo, 2014).

El hecho que todavía el sindicalismo se limite, en la mayoría de los casos, a reivindicaciones sectoriales o corporativistas dificulta la ligazón entre las movilizaciones desde el lugar de trabajo y los múltiples conflictos territoriales o socio-ambientales de la última década, marginando en parte los sindicatos de una mayor comprensión de la fuerza transformadora que significaría articular, con mayor claridad, sus luchas desde el trabajo con las resistencias de las comunidades de pobladores en lucha, comunidades de las cuales estos mismos asalariados hacen parte en muchos casos. Este vínculo mancomunado trabajo-territorio, sindicalismo-movimientos, desde la independencia de clase y el respecto de la autonomía de cada actor, representa una de las claves del periodo. Sin los asalariados organizados, las luchas territoriales, indígenas y pobladoras no pueden superar el modelo, aunque demostraron su gran capacidad de movilización e incluso de conquistar victorias notables frente al Estado o grandes empresas extractivas. Pero sin los otros movimientos sociales y las comunidades en luchas, el movimiento obrero está condenado a seguir hundido en la fragmentación y a reivindicar solo para algunas fracciones asalariadas cuotas de mejoras parciales.

Por todas estas razones, es imprescindible entender en su complejidad el escenario actual, tanto en el plano político como en términos de “despertar” de los movimientos sociales.

4/ Ciudadanía “neoliberalizada”, crisis de legitimidad, despertar de los conflictos sociales

El gobierno empresarial -con entonaciones berlusconianas- de Sebastián Piñera (2010-2014), primer gobierno de derecha democráticamente electo desde 1958, significó -en un primer momento- un signo de posible renovación política y una clara inflexión en la larga historia de la *in-transición* democrática chilena: algunos analistas no dudaron en hablar de "segunda transición". El Presidente Piñera siempre pensó gobernar para los suyos y prometió administrar el Estado como gestiona sus empresas, cuya cotización en bolsa conoció una subida notable después del anuncio de su elección (Fazio, 2010). A la cabeza de una fortuna de más de mil millones de dólares y situado en el puesto 701 de la clasificación Forbes de las personas más ricas del mundo, Piñera pretendió encarnar una “nueva derecha”, más liberal, moderna y “humanista”. Su primer gabinete ministerial se parecía a un verdadero consejo de administración salido directamente de los directivos empresariales: el presidente insistió mucho en su voluntad de formar un "gobierno de los mejores". Pero, más allá de los reajustes institucionales, una de las principales características de su presidencia fue la sorpresiva irrupción de imponentes movimientos sociales⁴¹, en particular el estudiantil que terminaron por afectar profundamente la imagen del primer mandatario. El declive de la popularidad del Presidente Piñera fue acelerado, traduciéndose en la más baja aprobación para un gobernante desde 1990 (26% en junio de 2011), pero también afectó a la oposición concertacionista, contando sólo con un respaldo del 17% y una desaprobación del 46% (Gaudichaud, 2010). Así, la reciente experiencia chilena se ha caracterizado por la masividad de las movilizaciones callejeras y el amplio descontento expresado por estudiantes, organizaciones sociales y ciudadanos de a pie, quienes exigieron una “educación gratuita, pública y de calidad”, y soluciones frente al endeudamiento insostenible de millones de personas. En la capital chilena, como en regiones, no sólo los jóvenes se movilaron sino que fueron muchos otros actores que hicieron sentir su rechazo o demandas en las calles (Mira, 2011). Ya insistimos en el papel ineludible de los trabajadores, pero hay que recordar el papel de colectivos ecologistas y de habitantes en contra de múltiples megaproyectos destructivos del medioambiente: del proyecto de represas hidroeléctricas en Aysén al valle del Huasco contra la minera Pascual Lama de la transnacional Barrick Gold, pasando por la tozuda resistencia del pueblo de Caimanes o por la de los pobladores de Freirina contra la empresa Agrosuper. Tampoco se podría eludir el histórico levantamiento popular de la provincia patagónica de Magallanes (que se inició a fines de 2010 e inicios del 2011 en torno al precio del gas a través de una Asamblea Ciudadana), las importantes luchas urbanas del movimiento de los pobladores por la vivienda, la salud y el derecho a la ciudad (Mativet, Sugranyes, 2010), o las movilizaciones por el derecho a la diversidad sexual (LGTB), y, obviamente, la indomable resistencia del pueblo mapuche que, en 2010-2011, llegó a niveles récord, luego de la huelga de hambre de varios presos políticos. Después de 20 años de bajos niveles de conflicto y de un movimiento social anémico (con excepción de las luchas del pueblo Mapuche), lo novedoso estriba en que estas acciones contestatarias tendieron a masificarse e impactar el campo político gubernamental y partidario, como al conjunto de la opinión pública. Pero, ¿Cómo leer esta emergencia disruptiva, después de décadas de autorregulación, control represivo e ilusión de modernización neoliberal?

Durante los años 90, primaron los discursos del miedo y el clivaje autoritarismo-democracia, y un lenguaje mediático que deslegitimaban sistemáticamente todos los conflictos sociales relevantes en nombre de los consensos. Al mismo tiempo, se impuso la imagen del éxito de la

⁴¹ Utilizamos aquí como definición mínima del concepto de movimiento social, considerado como “poder en movimiento”, la propuesta de Sidney Tarrow: “Desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades” (S. Tarrow, 1994).

sociedad del emprendimiento generalizado, alimentado por la bonanza macroeconómica. Y aunque había conciencia en amplias fracciones de la población que esta bonanza era fundamentalmente producto de la explotación de su fuerza de trabajo —o sea de la dominación del trabajo vivo de millones de chilenos— y que se construía en base a una extracción férrea de los recursos nacionales y naturales, todavía reinaba cierto derrotismo en el seno de las organizaciones sociales y un gran control político de sus principales líderes. No obstante, varios signos precursores anunciaban la disconformidad de las y los chilenos frente al modelo. Un informe del PNUD sobre Desarrollo Humano, muy citado desde ese entonces, subrayaba en 1998 “las paradojas de la modernización chilena”. Siguiendo un típico lenguaje ONUiano y sin esconder cierta fascinación por el capitalismo *made in Chile*, el texto notaba con resquemor que el desarrollo chileno traía *juntos* crecimiento del “nivel de vida” y malestar en el “modo de vida”, como también una “trama social” que si bien había avanzado en aspectos cuantitativos, presentaba una consistente “inseguridad humana” provocada por la precariedad del empleo, bajos salarios, la falta de previsión social, etc.

"Se ha mantenido una alta tasa de crecimiento. Han aumentado los salarios reales. Ha bajado la inflación y la cesantía a niveles históricos. Han aumentado también, en forma impresionante, el monto, la variedad y los destinatarios de las exportaciones. En suma, Chile, en los últimos diez años, ha más que duplicado su nivel de ingresos per cápita. Junto a ello, disminuye la pobreza en forma constante a la vez que se aumenta el Desarrollo Humano. (...) Sin embargo, junto a estos logros y avances importantes coexisten grados más o menos significativos de desconfianza tanto en las relaciones interpersonales como en las relaciones de las personas con los sistemas de salud, previsión, educación y trabajo. El malestar existente hace pensar que los mecanismos de seguridad que ofrece el actual "modelo de modernización" resultan insuficientes" (PNUD, 1998).

Frente a la fría racionalidad e individuación modernizadora neoliberal, el PNUD reconocía, mal que mal, el malestar de los trabajadores y de la ciudadanía frente a condiciones de vida propios de lo que Lipovetsky celebró con entusiasmo como “era del vacío” o que David Harvey calificó -para denunciarlo- como “condición de la postmodernidad” (Lipovetsky, 1983; Harvey 1992). Es evidente que este malestar es mucho más que un “sentimiento” o una representación subjetiva. Se asienta en la enajenación del trabajo y violentas realidades concretas, como el patriarcado y las opresiones de género, las desigualdades materiales y territoriales, una intensa segregación socioespacial, la precariedad de las viviendas y del transporte, etc. Los escritos del francés Robert Castel muestran que no es, en ningún caso, un proceso específico de la sociedad chilena ya que lo encontramos en varias sociedades del capitalismo globalizado (Castel, 2004). Empero, parece adquirir en Chile caracteres más “extremos” y brutales. Se traduce igualmente en las psiquis y por altos niveles de estrés: de acuerdo a las estadísticas, Chile es el primer país en América Latina en el consumo per *capita* de ansiolíticos y el cuarto a nivel mundial. El *ethos neoliberal* que invadió la sociedad significó un modelo cultural segregador, a menudo violento, donde los repertorios de valores sustentan o legitiman de manera consciente o indirecta el orden social desigual. Trabajos de antropología social grafican la presencia de tal matriz cultural (Mayol, Azócar, Azócar, 2013). La construcción del sujeto neoliberal sería la de seres más competitivos, solitarios y desconfiados que antes. Al mismo tiempo, como lo ha sugerido la obra del filósofo freudiano-marxista Herbert Marcuse, se fundamenta también en algunas “retribuciones” y placeres hedonistas de corto aliento, alivios artificiales entregados por un sistema de consumo “que todo lo consume”, incentivado por la nueva tiranía de las apariencias, las marcas, la publicidad televisiva de masa, la presencia de los *malls* como nuevos templos de la sociedad⁴², de los fármacos para aliviar depresiones y angustias, etc. (Moulian, 1998: 53-54). Sin embargo, toda acepción “pura” de la noción de un supuesto triunfo del “individuo neoliberal” es engañosa, como bien lo muestran las encuestas de Kathya Araujo y

⁴² Chile es el país con más supermercados y “malls” por habitantes de América Latina.

Danilo Martucelli. Así, frente a la desprotección social e institucional generalizadas, la población logra defenderse, mal que mal, buscando el desarrollo de una subjetividad colectiva “por abajo” y nuevas formas de solidaridad, gracias a la creación de redes de protección familiares e interpersonales informales (Araujo, Martucelli, 2013). Un hecho no menor si se piensa en las alternativas posibles a este sistema.

Hasta mitad de los años 2000, si bien había conciencia de las injusticias o descontento popular, no se tradujo necesariamente en politización en torno a la reivindicación de derechos o en organización colectiva, ya que el modelo del mercado heredado, las instituciones de la “democracia de los acuerdos”, el recuerdo de la dictadura tuvieron precisamente como efectos básicos dificultar o marginar toda expresión del disenso colectivo para redireccionarlo hacia frustraciones individuales. Juan Carlos Gómez Leyton ha desarrollado esta temática desde la ciencia política, afirmando la existencia de una *politicidad neoliberal*. Se modificaría así, con el paso del tiempo, la figura del *ciudadano-credit-card* de Moulian en la de un *ciudadano propietario-patrimonial y ciudadano consumidor-usuario*. Un ciudadano replegado en espacios familiares y de consumo, alejado de la *polis* y de sus debates, reacio a la acción colectiva, tanto al conflicto, como al voto, correlato obligado de la *sociedad neoliberal*. O sea una construcción en desmedro del *ciudadano colectivo-participativo*, organizado y clasista, que existió en Chile en los años 60 y 70. En tales condiciones, “la política queda encapsulada en los partidos políticos conformes con el sistema, los cuales monopolizan la dirección política de la sociedad” (Gómez Leyton, 2010: 353). Un proceso que se mantiene vigente hoy en día. Como lo grafican claramente las cifras del Servicio electoral en Anexo 4, la proporción de la población mayor de 18 años no inscrita en el padrón electoral pasó del 11,1% a más del 30% en 2009; por otra parte, la tasa de abstención de los ciudadanos que sí hicieron el esfuerzo de inscribirse (hasta 2012, existe un sistema de inscripción voluntaria con participación obligatoria), salta en el transcurso de esas dos mismas décadas de 7,6% a más de 16%. Es un hecho que después de la importante participación en el plebiscito de 1988, y de la victoria del “No” a Pinochet⁴³, comenzó a cundir la desilusión y la desafección política, especialmente en la nueva generación post-plebiscito. Chile se encuentra en el último lugar de las Américas en términos de participación electoral de los adultos de menos de 37 años, superando incluso a aquellos países que tienen un sistema de voto voluntario, como Venezuela o Colombia (Toro, 2008).

En el seno de este panorama de rechazo de la institucionalidad y bajos salarios, un arma ha sido fundamental para mantener la *gubernamentalidad neoliberal* y mantener artificialmente los niveles de consumo interno: la introducción de herramientas crediticias y la explosión del endeudamiento privado⁴⁴. Según cálculos del Banco central, la deuda de los hogares creció a una tasa promedio de 12,8% real anual entre el 2000 y el 2009, lo que ha significado un aumento de la relación deuda / ingreso de 35,4 a 59,9% en dicho período. La deuda concierne cerca del 60% de las familias y de 47% de los jóvenes entre 25 a 29 años, lo que representa el 40% del PIB⁴⁵. El filósofo italiano Maurizio Lazzarato ha evocado cómo la *fábrica del hombre endeudado* es uno de los paradigmas del tiempo económico global y el correlato obligado de la flexiprecariedad del trabajo: desde los años 80, el *Homo debitor* sustituyó al *Homo economicus*, generando nuevas formas de *dependencia y esclavitud moderna, con el aval del Estado neoliberal*. El ciudadano ya no tiene derecho a la vivienda, tiene “derecho” a contratar créditos inmobiliarios, no tiene derecho a la educación, tiene “derecho” a pagar un diplomado universitario, etc. y, para obtenerlos, necesita trabajar aun más y más, vendiendo su única propiedad: su fuerza de trabajo (Lazzarato, 2011).

⁴³ Luego de más de 15 años de dictadura militar, el 96,6% de las personas en edad de votar se inscribió en los registros electorales y, de ellas, el 89,1% acudió a las urnas para pronunciarse: el “no” a Pinochet terminando por imponerse con el 55,99% de los votos (el Sí obtuvo 44,01%).

⁴⁴ Entre 1997 y 2010, las tarjetas de crédito de las grandes tiendas se han disparado desde 1,3 millón a siete millones, según la Cámara de Comercio de Santiago. Y las tarjetas de crédito bancarias aumentaron en un 43% solo en cuatro años (Gómez Leyton, 2010: 362).

⁴⁵ Más análisis en sitio web del Banco central: <www.bcentral.cl>.

“Siendo el crédito una función obligatoria de la vida actual y operando este en la lógica de la falta de libertad de los individuos frente a la enorme libertad del capital, lo que se configura es una relación muy dispar de poder y un factor más. El crédito se torna usurpación futura, contradicción en los intereses de clase convertidos en especulación financiera. No es un asunto menor. Las clases sociales y sus contradicciones en el momento productivo (empresario - trabajador) se amplían y llegan al punto del consumo, donde hay una nueva oportunidad de usurpación y de toma de control sobre el destino de quien ocupa la posición más alejada del capital en la sociedad” (Mayol, 2012: 119).

En este ámbito, como en muchos otros, Chile también fue laboratorio.

CARLOS PEREZ

Esta afirmación se vuelve flagrante con el sistema educativo, sistema que el dictador terminó de conformar legalmente el 10 de marzo de 1990, con la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), un día antes de entregar el mando al presidente Aylwin. La LOCE avaló el principio de subsidiariedad en la educación y la existencia de un inmenso mercado educacional basado en el principio de la demanda y de la “libertad de enseñanza”. Y eso en todos los niveles: con colegios y liceos privados o “particulares subvencionados” (por el Estado), administrados por “sostenedores”, que lucran de diversas maneras y que suplen parcialmente una degradada educación municipal básica y media, destinada a los más humildes. En el plano de la educación superior, se favoreció la multiplicación de Universidades-empresas que pueblan las calles de Santiago y de todo el país, a la búsqueda de estudiantes-clientes. Aunque formalmente la ley impide el lucro, la creación de estos establecimientos se transformó en un gigantesco negocio para los grupos económicos nacionales o extranjeros. Chile es, con Corea del Sur, el país del mundo donde estudiar cuesta más caro en términos relativos: una carrera universitaria cuesta unos 500 dólares mensuales como promedio donde el sueldo mínimo es de alrededor de unos 400 dólares (Mönckeberg, 2007). La masificación -real y acelerada- del nivel de diplomas de los chilenos se forjó a la par con un mercado educacional desmedido, de baja calidad y gracias al endeudamiento de miles de jóvenes y familias. Hasta el golpe de 1973, la educación pública chilena era conocida por su calidad y gratuidad. Actualmente, el Estado sólo dedica el 4,4% del producto interior bruto (PIB) a la educación (cifras más baja de la OCDE), bien lejos del 7% recomendado por la UNESCO, cuando sólo el 16% del sistema educativo superior está financiado por fuentes públicas (el resto lo asumen las familias de los estudiantes)⁴⁶. En estas condiciones, el 70% de los estudiantes tiene que endeudarse y el 65% de ellos interrumpe sus estudios por razones financieras. Como lo explica la investigación doctoral de Oscar Vivallo, el sistema educativo funciona en base a una exclusión graduada y diferenciada, pero nunca total: la ilusión consiste en que la inclusión vía el sistema de mercado de educación sea vista como “expedita”, mediante el endeudamiento, permitiendo el acenso de los excluidos hacia posiciones sociales consideradas como más integradas (pero subordinadas). Esa *inclusión diferenciada* permite la creación de subjetividades individuales que constituyen *in fine* una potente herramienta de control social, *estatus quo* y dominación política. Crea ilusión de movilidad ascensional, cuando las cifras demuestran -al contrario- la correlación casi perfecta entre ingresos económicos y acceso a la Universidad (ver Anexo 5 y Vivallo, 2013).

Empero, en 2011, la fuerza del topo de la historia empezó a cuestionar, otra vez, la gran solidez aparente de este andamiaje. Es justamente esta ilusión meritocrática lo que se agrietó y terminó por lanzar a estos nuevos sectores medios y capas populares, ligados a la expansión del sistema educativo privado, a inundar las calles y a ampliar significativamente el *espacio de los*

⁴⁶ El actual sistema universitario chileno es el único en el mundo que financia de la misma forma tanto a instituciones públicas como privadas: El Estado invierte 2.5 veces más dinero en instituciones privadas que el promedio de los países desarrollados agrupados en la OCDE.

*movimientos sociales*⁴⁷. Con hasta más de un millón de personas manifestando, marchando, denunciando, clamando por una “educación pública, gratuita y de calidad”. Eran, en su mayoría, asalariados y sus hijos, no desde sus puestos laborales por cierto, pero entendiendo que los avances de esos movimientos podían significar también mejorar las condiciones de acción colectiva de los trabajadores y sus condiciones de vida inmediatas para ellos y sus familias. Poco a poco, esas reivindicaciones hasta el momento impensables que se instalaron en el discurso de los actores movilizadas y poco a poco en los medios: (re)nacionalización del cobre, Asamblea Constituyente, “No más AFP”, etc. El sociólogo Alberto Mayol y su equipo han investigado los ejes explicativos de esta politización hasta el momento estancada en los intestinos del Chile neoliberal.

Entre 1990 y 2011 se constituyó una subjetividad que toleró un incremento significativo de malestar sin mayores expresiones políticas del mismo. Una sociedad despolitizada privatizó los problemas públicos y los asumió a nivel individual. En ese marco, el disenso de los ciudadanos con el orden político al cual debían responder, no sólo no tuvo nunca representación institucional, sino que más bien fue la institucionalidad su principal obstáculo. Las instituciones funcionaron como dique de contención del malestar y protegieron así a la clase política. La latencia del malestar tuvo su final, o al menos una suspensión significativa, durante 2011, a partir de un proceso de movilización social de gran envergadura que ancló la energía del malestar en los problemas de la educación chilena. La ilegitimidad anterior de la protesta pública invirtió su signo y el acto de protesta pasó a ser parte fundamental del modo en que las demandas ciudadanas lograron, legítimamente, escalar hacia las autoridades, mientras éstas reducían su ya menguada aprobación (Azócar, Mayol, 2011).

Este sorpresivo despertar, que podríamos calificar de “bifurcación intempestiva” siguiendo al filósofo Daniel Bensaid, tiene, por cierto, raíces históricas y orígenes de varias índoles. Muchas son las encuestas de opinión que recalcan que lo que surge en 2011-2012 es algo que viene de mucho antes: baja confianza en la equidad del Estado, repudio creciente frente a las colusiones entre grupos económicos (con el caso simbólico de empresa La Polar en 2011 o de las farmacias), menor aceptación de la constante discriminación étnica o sexual, rechazo a los evidentes conflictos de interés entre elites políticas y gran empresariado, etc. Sondeos del año 2001, así como también una encuesta de la Universidad Diego Portales de 2008, ya habían revelado el abismo entre una clase dominante sorda, que seguía alabando el libre mercado y una población que en sus respuestas reclamaba, muy mayoritariamente, más Estado y servicios públicos, la creación de empleos estables, mayor regulación económica, reducción de la brecha en la distribución de ingresos (Zrari, 2012). Recordemos también que los secundarios y estudiantes han sido, durante todo el siglo XX, un sector dinámico de las luchas sociales. Pero los actores en lucha de los años 2000 son nuevos agentes sociales, distintos del periodo nacional-desarrollista y producto de la nueva fisonomía neoliberal madura. Más recientemente, en 2006, la “rebelión de los pingüinos” ya había cuestionado la LOCE, como también el sistema de selección universitaria, obligando al primer gobierno Bachelet a intentar una maniobra institucional para calmar a la calle. Al final de cuentas, desde finales de los 90, se han ido produciendo una *acumulación molecular de conflictos parciales*, muy dispersos, con una aceleración desde 2006-2007.

¿Cuáles son los otros factores que explican este salto cualitativo y cuantitativo? Podemos citar la situación económica de los estudiantes durante un periodo de crecimiento profundamente desigual, pero con perspectivas de ascensión social individual más desfavorables que durante la década anterior. Además, en 2011, 40% de los jóvenes acceden a la enseñanza superior, un hecho

⁴⁷ El espacio de los movimientos sociales es “un ámbito de prácticas y de sentidos relativamente autónomo en el mundo social », dotado de lógicas, referencias, practicas propias y en las cuales las diferentes organizaciones protestarías, agentes y causas “son unidas por relaciones, de intensidad y naturaleza variables” (Mathieu, 2012).

inédito, masificando la preocupación de las familias y su apoyo a las reivindicaciones. Por otra parte, si retomamos la sociología de las políticas de conflicto, la llegada del gobierno de derechas de Sebastián Piñera representó también una “estructura de oportunidades políticas”⁴⁸ para la movilización. Si bien el movimiento nunca tuvo como base demandas “anti-sistémicas”, ni siquiera anti-neoliberales, comenzó a instalar la idea del « no al lucro » como algo comúnmente aceptado, pidiendo la desmunicipalización de la educación secundaria, mejor calidad de enseñanza, democratización de los mecanismos de acceso a la educación superior, limitación de los beneficios de los sostenedores e inversores privados (Barozet, 2011). El sociólogo italiano Alberto Melucci denomina los movimientos sociales como “agencias de significación colectiva” que apelan a la solidaridad colectiva, crean un marco de interpretación compartido frente a sentimientos de injusticia y facilitan la capacidad de sus miembros para definir un sentido del *nosotros* que cuestiona el orden social dominante (Melucci, 1999). Es precisamente lo que ocurrió con el movimiento social por la educación. En el *flujo de conflictos*⁴⁹ que se inicia en mayo 2011 y que entra en recesión en marzo 2012, el movimiento estudiantil se hizo vocero de múltiples demandas acumuladas:

“desde las entrañas del mismo sistema educacional, no sólo alzó la voz con respecto a un problema que le afectaba como grupo particular de la sociedad, sino que logró hacer de esa demanda un sentir universal de toda una población que veía resquebrajadas aquellas promesas de una ‘alegría venidera’” (Azócar, 2013: 115).

Estas luchas de los jóvenes -apoyadas masivamente por más de 70% de la opinión pública en su momento más álgido- trizaron el “sentido común” neoliberal y retomaron formas de organización y repertorios de acción más horizontales, autogestionarios y democráticos. Tomas de liceos, colegios y universidades, actos culturales “alternativos”, “flash-mob” y “besatones”, vocerías controladas en asambleas, cacerolazos y marchas multitudinarias festivas, etc. Una radicalidad democrática presente también en los otros movimientos sociales. No se trata aquí de recrear la cronología de acontecimientos reportada en otros textos (Gaudichaud, 2011; Fleet, 2011). Pero es esencial recordar que estas resistencias provocaron un trasvase de la política desde los espacios institucionales hacia la sociedad misma: entre los sectores más activos y radicales (como por ejemplo la Asamblea Coordinadora de Estudiante Secundarios - *ACES*), comenzaron a circular ideas como la defensa del “control comunitario”, del “poder popular territorial” pensado como contrafuerte a visiones estadocéntricas o a los riesgos de las instrumentalizaciones partidarias, todavía fuertemente ancladas en las organizaciones del sindicalismo estudiantil y en la Confederación de Estudiantes de *Chile*, CONFECH (Agacino, 2013b)⁵⁰. Ese “despertar de la sociedad” ha acelerado un proceso de desgaste de la democracia neoliberal protegida y la imagen de las dos coaliciones que dominan la política del país (Garcés, 2012). Es este proceso que Alberto Mayol propuso entender en varios artículos y libros como *derrumbe del modelo* e impugnación de la economía de mercado, aunque reconociendo que podría ser un proceso de mediano plazo, pero sin chance de retorno, ni de estabilización (Mayol, 2012).

⁴⁸ La *Estructura de Oportunidades Políticas* (EOP) alude a dimensiones de contexto, de índole esencialmente coyuntural, pero también de carácter más permanente que, combinadas, generan un nuevo cuadro político que incentiva la acción colectiva. En su definición de la EOP, Charles Tilly y Sydney Tarrow piensan en particular en la interacción entre actores sociales, sus percepciones de la coyuntura política o de las acciones del gobierno de turno (Tarrow, 2008).

⁴⁹ Un “flujo de conflictos” representa una serie de momentos de reivindicaciones colectivas y episodios de interacción conflictuales y protestarias, ligados entre ellos y que el investigador aísla para estudiarlos (Tilly, Tarrow, 2008).

⁵⁰ Así la Confederación de Estudiantes de *Chile*, CONFECH, a través de sus principales dirigentes era fuertemente vinculada a diversos partidos, tal Camila Vallejo, figura carismática altamente mediatizada y militante del Partido Comunista, o Giorgio Jackson, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (y cercano a la Concertación).

No cabe duda que desde 2011 se evidencian, una *crisis creciente de legitimidad*⁵¹ y la *fisura parcial* de la hegemonía del neoliberalismo chileno. No obstante, la complejidad del escenario aun abierto no permite afirmar que el modelo esté a punto de “derrumbarse”, una aserción que discutiremos en la conclusión. Terminar hoy con la educación de mercado en Chile sería atacar la estructura misma del modelo neoliberal maduro. Y, sin duda, tener una relación de fuerza anticapitalista mucho mayor y amplia a la de los estudiantes. A pesar de su gran creatividad, masividad y en ausencia de alternativas políticas partidarias globales, sin poder incidir directamente en el antagonismo capital - trabajo y sin aliados estables en el espacio de los movimientos sindicales (en particular desde la CUT), esas movilizaciones explosivas tendieron a decrecer, a medida que se acercaban las elecciones presidenciales. Pero, sin haber sido derrotadas y después de una ardua “guerra de posición” con el ejecutivo, abriendo paso a tres paros nacionales por la educación, empujando al ministro Lavín a la dimisión y obligando al anuncio de tímidas medidas gubernamentales para enfrentar el tema de las deudas (Herrerros, 2012).

Esta dimensión y despliegue de la politización es correctamente destacada como un dato central de la sociedad chilena actual por el informe sobre desarrollo humano en Chile del PNUD 2015:

Las señales de la politización son diversas y es relevante enfatizar este hecho: no se limita a un único espacio de la sociedad, sino que se expresa en diversos planos de lo social: como ampliación de la discusión pública, como aumento de la conflictividad y la movilización social, como involucramiento ciudadano. [...] Una de las señales más evidentes del proceso de politización que experimenta la sociedad chilena es la incidencia creciente que adquieren los movimientos sociales a la hora de incorporar temas y demandas a la discusión pública. Una manera en que esto se expresa es el aumento de las acciones de protesta y del número de personas involucradas en ellas. Lo han observado tanto la opinión pública en general como las elites; en ambos grupos una mayoría reconoce que en la actualidad hay más conflictos que cinco años atrás. Por ello no es de extrañar que las diversas formas en que las movilizaciones sociales ocupan el espacio público se vuelvan una experiencia recurrente en su vida cotidiana. Asimismo, la opinión acerca de la legitimidad de esas manifestaciones, si bien no es mayoritaria, viene creciendo en el tiempo (PNUD, 2015: 15-16).

Otra enseñanza esencial que deja este importante informe es que para entender dónde se encuentra el Chile de hoy es necesario volver a distinguir (siguiendo a Chantal Mouffe, Norbert Lechner o Jacques Rancière entre otros) *la política* de *lo político*: lo primero se refiere a una visión restringida centrada en la administración estatal, en la gestión y deliberación pública, o sea la cara institucional de lo político, cuando lo segundo atañe al amplio campo de la autodeterminación de la sociedad en su conjunto, a lo susceptible de ser debatido y decidido colectivamente, entre otros desde el movimiento popular y su conflictividad. Según el PNUD es precisamente desde lo político que se vive un proceso de politización en Chile, en particular dentro de los jóvenes, lo que no impide una fuerte crítica y desconfianza hacia la política estatal y su estrechez institucional. Visto así, podemos entender que la ciudadanía neoliberalizada de los noventa y dos mil está también en retroceso, abriendo espacio al disenso y politización "desde abajo" en contra de los consensos y control partidarios "desde arriba", creando nuevos procesos de subjetivación política popular. Pero no por eso, los movimientos sociales han logrado todavía conquistar una hegemonía en la sociedad civil y pueden pretender representar un descontento masivo pero aún difuso. Las encuestas de opinión demuestran que subsiste el fuerte hiato entre una minoría de militantes-activistas y una gran mayoría de ciudadanos-trabajadores perplejos sobre los caminos a seguir para enfrentar el futuro:

⁵¹ El sociólogo Nicolás Fleet recuerda que “en los términos de Max Weber, quien acuñó el concepto, una crisis de legitimidad plantea una fractura en el esquema de dominación en su conjunto, producida por un grupo social emergente que modifica la identidad de la sociedad a la vez que presiona por mayor participación en la distribución del poder (y a través del poder, del producto económico) y reconocimiento social, conduciendo a la apertura de este esquema, o sea su democratización, o bien a su cierre, es decir exclusión” (Fleet, 2011).

la imagen de los movimientos sociales en la opinión pública muestra ambivalencias importantes. Las personas les reconocen el mérito de haber puesto los temas en debate y haber forzado a las elites a reaccionar. Sin embargo, cuando hablan de eso, por ejemplo en las conversaciones grupales que conforman la base empírica de este Informe, se refieren siempre a los movimientos como un “ellos” que es visto operando en una esfera distinta y aparte de la propia ciudadanía. Junto a lo anterior, consultadas sobre su evaluación de las manifestaciones del último tiempo, solo un tercio de las personas opina que han sido positivas para el país (PNUD, 2015: 44).

Para terminar de comprender la coyuntura actual, y antes de concluir, esbozaremos un breve comentario sobre el gobierno y el nuevo ciclo institucional, ya que si bien en el momento en que escribimos este texto la administración Bachelet lleva sólo un poco más de 10 meses, se pueden trazar algunas líneas de fondo que parecen caracterizarlo.

5/ Breve comentario sobre el gobierno Bachelet: progresismo transformista, nuevo ciclo político y continuidad de una dominación

En febrero 2014, hemos entregado un análisis detallado de la última campaña presidencial y propuesto para el debate algunas hipótesis sobre el “alma” del gobierno de la “Nueva Mayoría”, texto publicado en la *Revista Observatorio crítico de América Latina* de la CLACSO (Gaudichaud, 2014a). Sería redundante volver a esta problematización crítica, aunque podemos resumir los puntos centrales de este texto, intentar ver cómo ha evolucionado el panorama en este plano y en qué medida nuestras hipótesis de trabajo parecen confirmarse.

Primero, al analizar la tasa de participación electoral y los niveles de abstención, es innegable que la politicidad neoliberal no ha sido totalmente desplazada por la fuerza de los movimientos sociales del 2011-2012, aún cuando la ciudadanía que vota en 2013 es una ciudadanía que ha sido profundamente removida y alterada por este ciclo de luchas. La sociedad post-2011 ya no es la misma que la del 2010 por la masividad del proceso y los temas que lograron instalarse en los sentidos comunes, pero a la vez el “modelo” sigue de pie y tiene todavía muchos recursos materiales y subjetivos a su disposición... La mayoría electoral *real* del país es abstencionista: sólo cuatro de diez chilenos optó por votar en segunda vuelta de la elección presidencial, la cifra menor desde 1990, es decir alrededor del 51% del electorado en las presidenciales y parlamentarias del 17 de noviembre 2013 y 58% en la segunda vuelta realizada en el mes siguiente. En rigor, se puede afirmar que la presidente Bachelet fue elegida con un reducido 25% de los electores (cuando los medios anunciaban su victoria en primera vuelta), pero además se podría constatar que incluso perdió 120.000 votos en comparación con el 2005. En las parlamentarias, el fenómeno es aún más marcado: los representantes de la Nueva Mayoría representan sólo 21% del electorado, y los de la Alianza por Chile un escaso 16%⁵². No obstante, la coyuntura de fuertes movilizaciones y en particular en los estratos jóvenes, tradicionalmente abstencionistas, permite anticipar que dentro de los cambios actuales se va ampliando el denominado “partido de los no electores”:

“Este grupo de ciudadanos son activos políticamente, pero no participan en los actos electorales por distintas y variadas razones, desde el rechazo a los políticos, a los partidos políticos, a la democracia representativa, etc. Su participación en las elecciones se manifiesta en la abstención, en el voto nulo o en blanco. Su decisión electoral es no elegir” (Gómez, 2010: 183).

Esta abstención política crítica y activa podría seguir creciendo en los próximos años, a medida que se recomponen el movimiento social y los conflictos de clases. Como ya se sabe, la

⁵² Para revisar parte de los resultados oficiales, consultar el sitio web del Servicio Electoral (SERVEL): <www.eleccioneservel.cl>.

victoria electoral de Bachelet se hizo en base a la potente construcción mediático-carismática e incluso *mariana* de la presidenta, por encima de los desgastados partidos de la Concertación: la “madre” de la nación, sonriente, protectora y comprensiva, supo forjar un personaje consensual que ha movilizó también desde la solidaridad de género (Doran, 2010), un tema crucial para las elecciones de 2013, como de 2005. Igualmente, la victoria de la coalición oficialista se hace en un contexto de crisis interna para las derechas, después de 4 años de “piñerismo”, como también gracias a su aparente renovación en “Nueva Mayoría”, con la inclusión en particular del Partido Comunista (PC) en el conglomerado gubernamental. El PC, principal fuerza de la izquierda -hasta ahora no digerido por la Concertación-, dio un paso adicional hacia la institucionalización y cuenta hoy con 6 parlamentarios, una ministra y varios altos cargos estatales. Tercer elemento, el momento electoral logró ser un instante de cierta renovación parlamentaria y de canalización de dirigentes estudiantiles hacia los bancos del Congreso, lo que no es menor e *in fine* demuestra cierta flexibilidad del sistema pensado por Jaime Guzmán. Entran de esta manera al Parlamento bajo los colores del PC, Camila Vallejo, expresidente de la Confederación de Estudiantes de Chile, electa con un arrasador 40% en la comuna de La Florida (Santiago); Karol Cariola, secretaria general de las juventudes comunistas, pero también dos otros importantes dirigentes estudiantiles: Giorgio Jackson (Revolución Democrática) con el apoyo de la exConcertación y, por fuera de los acuerdos del sistema binominal, un hecho histórico, Gabriel Boric (Izquierda Autónoma)⁵³. Cuarto elemento, es importante recordar que la clara victoria presidencial y parlamentaria (con una confortable mayoría en el Congreso) de la “Nueva Mayoría” es también un reflejo indirecto de expectativas de cambio en el electorado. Lidiando con complejos equilibrios internos en su coalición (que va desde los comunistas hasta los demócrata-cristianos), la flexibilidad discursiva y programática de Bachelet permitió por primera vez desde 1990 anunciar reformas sustanciales a la agenda de las políticas públicas, escuchar lo que sonaba en las calles y, *a la vez*, dar garantías de gobernabilidad al gran capital (que se tradujo, entre otros, en el éxito de financiación de su campaña electoral y el beneplácito de Washington). Bachelet (y su colosal equipo comunicacional) fue constructora de un perfecto *storytelling*. Articulando dominio de la retórica, poder de escenificación y nuevas tecnologías digitales, propuso un relato bastante convincente como para representar algo diferente del continuismo de la agotada y trillada Concertación. Eso a pesar de ser una mujer política salida directamente de esta misma coalición, que codirigió tanto desde las altas esferas del PS, como también como exministra de salud, exministra de defensa y expresidenta de la República (2006 al 2010).

Las anuncios de cambio tuvieron tres ejes principales: en primer lugar, una reforma constitucional “participativa, democrática e institucional”, que requerirá un acuerdo en el Congreso con la derecha (para obtener los quórum requeridos), segundo una reforma fiscal, equivalente al 3% del producto interior bruto (PIB), destinada a tasar “moderadamente” (según reconoció uno de los ministros) los enormes beneficios de las principales empresas, y, por último, una reforma de la educación que busca terminar con el “copago” y el lucro e ir progresivamente hacia la gratuidad en 6 años⁵⁴. Globalmente, la Nueva Mayoría supo tomar en cuenta el pulso de la sociedad y estos anuncios tuvieron un “rendimiento electoral” muy elevado en un primer momento. Sin embargo, las ambigüedades ya contenidas en el programa, como el prontuario de 20 años de Concertación, permitían dudar de la profundidad de las reformas pensadas. Otros signos confirmaron lo que venía. Por ejemplo, la composición del gobierno y, entre otros, la cartera estratégica del ministerio de educación: Nicolás Eyzaguirre, ex alto funcionario del FMI y ministro de Hacienda del gobierno Lagos, había sido denunciado por organizaciones estudiantiles por su gestión favorable a los bancos

⁵³ También se podría hacer mención en la elección de Iván Fuentes, líder de grandes movilizaciones en el sur del país, como candidato de la Democracia-Cristiana.

⁵⁴ La reforma educativa tendría un costo de unos 8.000 millones de dólares US según el programa presidencial, financiado integralmente por la reforma tributaria.

(en particular con la creación del “Crédito con Aval del Estado”). Si por el momento no todas las reformas han sido implementadas, su motorización desde las alturas del Parlamento y en permanente consonancia con amplios sectores de las derechas prueban que no ha muerto la “política de los acuerdos” del pasado. Algunos oficialistas tuvieron incluso la franqueza de reivindicarlos, como el senador DC, Manuel Antonio Matta (*El Mercurio*, 5 de julio 2014). En lo fundamental, y frente a la crisis de legitimidad, algunos sectores dominantes del empresariado entendieron la importancia de reformas parciales para volver a estabilizar el modelo:

“El Bloque en el poder está hegemonizado por una alianza entre el capital bancario y el comercial. Dicha ‘alianza’, si es que podemos llamarla de esa manera, no está en contra de las reformas planteadas por la facción gobernante que conforma el pacto ‘Nueva Mayoría’; es más: las apoya. Y esta afirmación es tan efectiva que el propio presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Awad, lo dice cada vez que tiene posibilidad de hacerlo, como sucedió el 11 de mayo pasado en el programa de TVN ‘Estado Nacional’: “Chile debe aprovechar este gran consenso y debe haber una reforma educacional y para eso se requieren más recursos, pero hay reparos constitucionales que deben solucionarse” (Acuña, 2014).

Este hecho no impidió que el gobierno viviera su primer año de mandato bajo una fuerte presión del duopolio mediático, de la derecha (la UDI en particular, todavía principal fuerza política del Parlamento), de las Iglesias y de distintos gremios y asociaciones patronales, conduciendo una eficaz campaña de denuncias de las reformas para poder morigerar e influenciar al máximo las reformas más importantes. Una ofensiva que ha surtido efecto, tanto más cuanto que las cúpulas partidarias de la exConcertación son sensibles a la opinión empresarial. Asimismo, como lo reveló el Centro de Investigaciones Periodísticas, el acuerdo tributario, firmado con la derecha y el Senado por el Ministro Alberto Arenas, representa el triunfo de los poderes fácticos, después de haber sido “cocinado” fuera del Parlamento, con representantes de las principales familias de los empresarios y la banca: “Luego vendría el anuncio público transmitido en horario *prime* por los canales de televisión, con la firma de senadores desde la UDI al Partido Socialista” (Skoknic, 2014). El economista, Claudio Agostini, ex asesor de la Concertación, asegura que “el acuerdo tributario abre espacios de elusión mayores a los que había” y añade “hay varios grupos de interés que deben estar muy contentos. El lobby y la presión fueron más exitosos de lo que imaginaron” (*El Mostrador*, 10 de julio 2014). Finalmente, la reforma tributaria no recaudará los 8 mil millones de dólares US previstos y sólo se piensa poder alcanzar un nivel de tributación *nacional total anual* equivalente a 22% del PIB (un nivel todavía muy bajo comparado con países del mismo nivel económico) de aquí a... 2018. Si la imposición directa pasa efectivamente del 20 a 25% se acompañará de una sorpresiva disminución para los más altos ingresos individuales. Es más, toda idea de royalties sobre los recursos mineros, manera simple de financiar la reforma educacional, ha sido abandonada. Acerca de este último punto, el fin del lucro, del copago de los estudios por los apoderados y de la selección -reivindicaciones centrales del 2011- fue efectivamente despachado por el parlamento, con vista a un plazo de 5 años para su aplicación. Una reforma celebrada como histórica por la bancada oficialista. Sin embargo, la desilusión cunde en las direcciones de las organizaciones estudiantiles, hoy en manos de sectores de la izquierda crítica y por esta razón más autónomas frente al Ejecutivo. Mientras tanto, el Observatorio Chileno de Políticas Educativas se pregunta “¿Dónde quedó la reforma universitaria?”, constatando que el proyecto prevé fortalecer el rol de los sostenedores como la subvención estatal al sector privado (OPECH, 2014), la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach), Marta Matamala, afirma que el primer año ha sido clarificador de las verdaderas intenciones del gobierno:

“Todas las reformas que ha planteado dan luces de lo que efectivamente quiere hacer, hasta dónde quiere avanzar y con quiénes desea trabajar. En 2014 los dejamos hacer, vimos su disposición, calibramos cuánto pesan la DC y el PC dentro de la Nueva Mayoría,

observamos cómo se reagrupa la derecha. En nuestro balance, podemos decir que los dos bloques hegemónicos no nos representan. El gobierno solo ha tomado los titulares de las demandas que los estudiantes hemos enarbolado en estos años, sin asumir el espíritu ni el alcance de lo que estamos pidiendo. La presidenta Bachelet no ha reorientado las políticas públicas, ni está generando cambios sustanciales en educación, vivienda, salud o en otras materias que son importantes para quienes habitamos el territorio” (Maldonado, 2015).

¿Es decir que la “Nueva Mayoría” no ha emprendido ningunos cambios en las políticas públicas? No, al contrario, las reformas se multiplicaron, en particular a principios de 2015, y esta agenda legislativa reformista logró canalizar -y desarmar- gran parte los movimientos sociales, estudiantiles en particular, que se quedaron paralizados, sin saber cómo enfrentar el nuevo ciclo, oscilando entre integración en las instancias de “participación” del gobierno y deseo de movilizar a sus bases, sin lograrlo realmente. Dentro de las reformas más comentadas, citemos el proyecto de la “nulidad” de la Ley de Amnistía de 1979, el abandono de algunos megaproyectos energéticos denunciados por organizaciones medioambientales, la ley sobre semillas transgénicas, el proyecto de modificar el código de aguas, la tímida reforma del código laboral (ya citada), la derogación del sistema electoral binominal, el aumento en el presupuesto de la salud y la reforma educacional, la adopción de una ley de Unión civil sin distinción de orientación sexual, el proyecto de ley de aborto, el anuncio de la creación de un ministerio de la Cultura, cambios considerados por la izquierda del gobierno (esencialmente, el PC y la Izquierda ciudadana) como la confirmación de un rumbo progresista hacia la democratización real. No obstante, los hechos son tozudos... El lema gubernamental podría ser más bien el famoso “cambiar todo para que nada que cambie” del *Gatopardo* en la novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1957). Es lo que se avizora por ejemplo con la tan esperada reforma constitucional: la idea de iniciar una Asamblea Constituyente originaria que podría acabar, por fin, con la Constitución de Pinochet, parece cada vez más lejana y el derrotero hoy mayoritario en el gobierno es el de una reforma institucional “desde arriba” y desde el Parlamento, entre “notables” (aunque aprobada por referéndum). Por su parte, la Directora de Fundación CREA (centro de estudio cercano a la Unión Nacional Estudiantil), enfatiza:

“Estos (primeros) seis meses, junto con reafirmar que el cambio de ruta neoliberal no vendrá de este gobierno y que las reformas promovidas por ellos no serán ni profundas ni efectivas, nos devela una vez más un problema de fondo: una minoría en Chile decide por todos los demás. Si durante las movilizaciones más importantes del periodo post dictadura no fueron posibles actos de deliberación ciudadana, pero además, si ni siquiera un gobierno con mayoría parlamentaria que para salir electo prometió cambios es capaz de gobernar en función de ellos, es porque en Chile la democracia está enclaustrada. Y el problema no es la existencia de enclaves, ni de cláusulas autoritarias en algunos espacios del poder, sino que son el sentido e intereses desde el cual está pensada nuestra democracia y sociedad entera. Ningún Gobierno -con buenas o malas intenciones- podrá hacer frente a las minorías dominantes si no se busca y construye fuerza en el pueblo. Fuerza que no puede en ningún caso ser meramente una expresión de votos, sino que por sobretodo, ha de ser fuerza como expresión organizada y deliberante” (Ammann, 2014).

Esta distancia sideral entre gobierno, casta política y el pueblo ha sido además reforzada por meses de escándalos de corrupción, financiamiento ilícito de partidos, sobornos empresariales, tráfico de influencias y evasión tributaria que corroen casi todo el espectro político institucional (casos Caval, Soquimich y Penta en particular). Y las medidas anunciadas para intentar enfrentar esta situación (Comisión Engel) aparecen como medidas de parche, lejos de solucionar la verdadera dimensión del problema, dando a mostrar sobre todo dirigentes políticos renuentes a transparentar sus formas de funcionamiento y un sistema gangrenado por la práctica del “lobby” del gran empresariado. Por otra parte, en el plano geopolítico, el carácter neoliberal de la política económica

del gobierno Bachelet ha sido ampliamente confirmado por dos hechos de trascendencia mayor para toda América Latina: primero, el ejecutivo confirmó su inscripción dentro de la Alianza del Pacífico, bloque comercial que reúne a Chile, Colombia, México y Perú en una perspectiva librecambista con la región Asia Pacífico (dando la espalda a la integración latinoamericana). Segundo, el gobierno avaló el compromiso de Chile para negociar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (*Trans-Pacific Partnership*, TPP), tratado de libre comercio entre varios países de la cuenca del Pacífico, fuertemente promovido por los Estados Unidos para contrarrestar la influencia China en la región, y al mismo tiempo que amenaza las veleidades bolivarianas en América Latina. Realizado a espaldas de los pueblos y de manera totalmente secreta, este acuerdo multilateral (uno de lo más importante del mundo), en sus más de 26 capítulos de negociación, busca regular a favor de las multinacionales y del mercado global, un gran número de temáticas que van desde el comercio de medicamentos, hasta la regulación laboral, pasando por los derechos de autor, patentes, inversiones estatales, acceso a internet, etc. con consecuencias desastrosas para los trabajadores, la libertad cultural y el medio ambiente.⁵⁵

En febrero 2014, propusimos definir el gobierno de la Nueva Mayoría como el producto ambiguo de una época bisagra, potencialmente de transición, pero donde los muertos todavía pesan sobre los vivos como diría Marx. Una época de gobierno *progresista neoliberal* o *social-liberal maduro*, en un contexto de crisis parcial del sistema de acumulación forjado en dictadura. Como lo recordábamos, en el pasado Tomás Moulian desde una óptica gramsciana, ha insistido en el “transformismo” sociopolítico de la postdictadura:

“Transformismo” a las operaciones que en el Chile Actual se realizan para asegurar la reproducción de la “infraestructura” creada durante la dictadura, despojada de las molestas formas, de las brutales y de las desnudas “superestructuras” de entonces. El “transformismo” consiste en una alucinante operación de perpetuación que se realizó a través del cambio de Estado. Este se modificó en varios sentidos muy importantes, pero manteniendo un pacto sustancial. Cambió el régimen de poder, se pasa de una dictadura a una cierta forma de democracia, y cambió el personal político en los puestos de mando del Estado. Pero no hay un cambio del bloque dominante, pese a que sí se modifica el modelo de dominación” (Moulian, 2002: 140-141).

Mantenemos que la coyuntura político-institucional que se abrió con la elección de Michelle Bachelet, tomando en cuenta las modificaciones de las relaciones entre clases populares y el bloque en el poder y la nueva agenda legislativa, puede definirse como una etapa última -¿terminal?- del transformismo capitalista neoliberal en su fase avanzada y madura.

A modo de conclusión. ¿Derrumbe o construcción estratégica? Los desafíos de la creación de alternativas anticapitalistas “raizales”

“Hace 41 años nos despertamos de golpe. De golpe de Estado. Un golpe a las costillas, al bajo vientre, a los testículos. Qué se yo: a los dientes. Un golpe de madrugada que nos dejó tendidos en el suelo, boca arriba nos dejó, sin entender lo que pasaba. Magullados de golpe de Estado despertamos y de golpe de Estado nos levantamos y de golpe en golpe nos asesinaron y de golpe en golpe nos torturaron y de golpe en golpe nos desaparecieron. Y nosotros aún sin comprender cómo era posible que sucediera en este país del fin del mundo donde nunca pasaba nada, o al menos así nos habían hecho creer. Pero vivíamos una ilusión de país porque nada más bastaba mirar el cristal de la historia para ver reflejado en sus retazos de vidrio las matanzas de indígenas o las masacres obreras. Y siempre la clase

⁵⁵ Para más información: <www.tppabierto.net>.

política y siempre los ricos y siempre los militares. Como hace 41 años cuando nos despertamos de golpe. De golpe de Estado” (Tricot, 2014)

La fuerza de propulsión que representa para las clases dominantes y el imperialismo esta triste fecha del 11 septiembre es todavía una herida abierta en el corazón de la sociedad del Chile actual. La honda resiliencia del entramado de poder que se creó en los años de la dictadura cívico-militar muestra día a día su capacidad de adaptación y ciertos grados de flexibilidad, hasta aceptar la necesidad de reformas “progresistas” o la inclusión del Partido Comunista en el gobierno, pero siempre bajo la cuidadosa vigilancia de los poderes facticos económicos, mediáticos y militares. En su balance de las teorías críticas del neoliberalismo, Stephane Haber puntualiza tres maneras de acercarse a esta experiencia histórica: desde el estudio de la ideología y su autonomía relativa; desde la política como forma de gubernamentalidad y, para terminar, como producto de transformaciones socio-económicas radicales (Haber, 2012). En realidad, el corto viaje que acabamos de hacer a través de las diferentes aristas del neoliberalismo maduro chileno confirma la hipótesis según la cual sería una ilusión querer “segmentar” nuestra aprensión de esta historia: el neoliberalismo aparece como fase actual del capitalismo y un régimen de acumulación que abraza, de manera desigual y combinada, todos los campos sociales, el conjunto de la sociedad y sus actores. Como lo recordaba György Lukács, el capitalismo es un proceso que domina desde la totalidad hacia lo específico y desde lo específico hacia la totalidad. Sin embargo, considerando que el neoliberalismo es un fenómeno planetario que corresponde a la fase de la mundialización del capital financiero (Chesnais, 1997), es forzosamente una experiencia plural ya que sus formas de “aterrizar” en los países es variada en el plano temporal, social y político.

Estudiar el caso chileno permite así designar un caso paradigmático de acumulación flexible, donde se entremezclan algunas huellas de los “viejos espíritus” del capitalismo latinoamericano con los nuevos vientos del sistema socio-económico nacido de la destrucción-creación radical que siguió la contrarrevolución de 1973. Con todo, se trata de un modelo de acumulación periférico y sumamente dependiente de los circuitos de intercambios internacionales, que poco tiene que ver con el “nuevo espíritu” del capitalismo neoliberal céntrico (*managerial*, más horizontal, basado en la autonomía individual, innovaciones y funcionamiento en redes), descrito por los franceses Luc Boltanski y Eve Chiapello (Undurraga, 2014: 292-297). En Chile, prevalecen fuertes jerarquías laborales, un control estrecho y muy jerarquizado del asalariado y, como lo hemos ido insistiendo a lo largo del presente texto, fundamentalmente una explotación, precarización y subsunción real del trabajo férreas, única condición para poder explicar el núcleo duro del modelo del “jaguar” suramericano y sus niveles de acumulación de plusvalía. A esta relación capital – trabajo que permitió el surgimiento de un empresariado oligopólico, fuertemente conectado al capital transnacional y al imperialismo estadounidense, habría que añadir otros antagonismos esenciales y que no hemos podido desarrollar aquí, a pesar de su importancia. Citemos, primero, el giro ecoterritorial del neoliberalismo y la contradicción capital – naturaleza. El capitalismo chileno, como -en diferentes grados- sus pares latino-americanos, representa también la apertura de un intenso ciclo de concentración en actividades primo-exportadoras, mineras y agropecuarias, en desmedro de todo valor agregado o industrialización. Una depredación de recursos y de riquezas por empresas nacionales y transnacionales que alimentan las llamadas “zonas de sacrificio” de norte a sur del país, donde el megaextractivismo y el “consenso de los Commodities” (Svampa, 2012) arrasa con la tierra, los hombres y el medioambiente, generando numerosas resistencias y mucha desesperanza social⁵⁶. En este entramado, el componente energético es la clave, pues representa una auténtica condición material de todo el sistema extractivista y otro factor de producción esencial, con el capital, el trabajo y los recursos naturales. Significa también un talón de Aquiles para la ideología del “crecimiento infinito” de la clase política y empresarial local, de ahí su obsesión por

⁵⁶ Ver el interesante documental *El modelo chileno* (Agallón producción, 2014) Serie “América Latina piensa”, 41 minutos. En: www.youtube.com/watch?v=LHDze7VsvhA.

implementar varios megaproyectos de producción y transporte de energía, en particular hacia los centros mineros del país, sin preocuparse por sus consecuencias ecológicas. Segundo, es indispensable subrayar aquí hasta qué punto el trabajo femenino (a menudo precario o informal), la feminización de los cuidados y el trabajo de reproducción son una condición vital para el neoliberalismo. Sin estas condiciones de producción y de reproducción, ningunos de los parámetros analizados anteriormente podrían existir. Para la clase dominante chilena, una manera de mantenerlos es alimentando un patriarcalismo ultra-conservador y un conjunto de violentos estereotipos machistas, legitimados en el plano mediático y político, lo que explica -entre otras cosas- la ausencia de ley de aborto hasta el año 2015⁵⁷. Tercero, sería necesario indagar mucho más el tema del verdadero colonialismo interno y opresión racista que organiza el Estado chileno hacia el pueblo mapuche, combinado con varios mecanismos de “multiculturalismo neoliberal” que pretende “integrar” a los indígenas a través de las redes del mercado. Cuarto, mencionemos aquí la cuestión de las fuerzas armadas, por lo general poco tratado por los estudios críticos pero que siguen siendo una amenaza permanente para todo proyecto de emancipación, ya que los militares se consideran los “garantes” del modelo. Es más, numerosos oficiales ligados a la dictadura y responsables de la represión siguen activos o retirados pero libres (así como no pocos civiles), lo que vuelve a plantear la reivindicación de la democratización de la FFAA y de verdad y justicia plena “ahora ya”.

El escenario actual desvela así la compleja maquinaria de la *vía chilena al neoliberalismo*, que forjó un capitalismo “maduro” o “avanzado”, iniciado hace casi cuatro décadas, donde las herencias autoritarias siguen presentes, cohabitando con el transformismo político que ha marcado la política institucional desde 1990. Esta maduración se da en una sociedad profundamente modificada en su fisonomía y socio-génesis, como también en la relación sociedad-Estado, en las subjetividades y sentidos comunes, en la cultura popular, en la constitución de sus movimientos sociales. No obstante, desde 2006 y más aun desde 2011, la fábrica de la ciudadanía-*credit card* se suspendió en favor de un potente movimiento social por la educación. Este acontecimiento disruptivo y transversal abrió una fuga en los estanques del modelo, provocó una brecha en el sólido edificio de la democracia neoliberal protegida. Comenzaron a recorrer los lugares de trabajo, los barrios de las clases populares y sectores medios, ideas como “no al lucro”, “nacionalización del cobre”, “Asamblea Constituyente”, “abajo la educación de Pinochet”... Otros actores entraron también en este baile de resistencias plurales: ecologistas, pueblos indígenas, feministas, pobladores, trabajadores. Estos primeros embates de la lucha de clases después de décadas de “pax neoliberal” no pudieron imponer sus reivindicaciones, pero no fueron derrotados. Un dato que no es menor y anuncia futuros conflictos. Esta fisura también invadió el bloque en el poder y se mostraron a la luz pública diversas pugnas inter-burguesas que hacen más débil el sistema en su conjunto, sin que ninguna fracción de las clases dominantes haya logrado por el momento resolver estos conflictos “en las alturas”.

Todo lo que el país conoce cómo intelectuales neoliberales o conservadores tradujeron en sus escritos cierta preocupación frente a tanto desorden en las calles y a la posible reactivación de las luchas de los trabajadores. Hasta anunciar en un libro, con no poca (auto)convicción, “el regreso del modelo”, afirmando que “no es que la gente no quiera más el modelo. Lo que pasa es que quiere más del modelo” (Larraín, 2012). Donde acierta en parte el director de la *Fundación Libertad y Desarrollo* con este tipo de proclama, es que basta con recorrer hoy, las ciudades y pueblos de Chile, hablar y compartir con sus pobladores, para entender que, a pesar de todo, el modelo no está

⁵⁷ En enero 2015, y a propósito del tímido proyecto de ley del gobierno sobre aborto en caso de peligro vital para la madre, inviabilidad del feto o violación, el diputado oficialista de la DC, Pablo Lorenzini, aseveró tranquilamente en los medios: “¿Qué es violación? Producto de algo que no quiso. Hay miles de casos de mujeres que tienen relaciones porque, a lo mejor, tomaron un traguito de más o estaban apenadas, o por las circunstancias que pasan en la vida, que el hombre es muy hábil y las convenció y ella no quería, en ese caso ¿es violación también?”... 2015 La Tercera (Santiago). En <www.latercera.com/noticia/politica/2015/02/674-615787-9-lorenzini-hay-mujeres-que-tienen-violaciones-porque-a-lo-mejor-tomaron-un.shtml>.

herido de muerte. El mito de la sociedad abierta de “oportunidades”, de la “clase media aspiracional” feliz, de los pequeños emprendedores exitosos y del consumo para todos, está culturalmente enraizado, alimentado por miles de actos cotidianos, por los *massmedias* y las telenovelas y poderes constituidos por dentro y, sobre todo, por fuera del Estado neoliberal. Tal vez no sea lo que nos guste pensar, pero de la *fisura al derrumbe*, el salto es alto, muy alto y la historia muestra que el capitalismo no se desvanece por sí sólo: la crisis es incluso su naturaleza, su esencia misma, su motor. Inspirándose de las categorías de Raymond Williams, teórico marxista de la subjetividad y de la cultura, uno podría sugerir que estamos frente a una hegemonía neoliberal agrietada pero no residual, y en ningún caso “emergente”, no lo suficiente fisurada como para hablar de una fractura letal de su dominación ideológica y mucho menos, por supuesto, del mismo modo de producción capitalista (Williams, 1980)⁵⁸.

El derrumbe de tal dominación no se puede proclamar, menos aun desde la academia, sin haber reunido las condiciones estratégicas mínimas para su concreción, es decir la capacidad de las y los de abajo de inventar, crear colectivamente y mayoritariamente otro mundo... En resumen, las teorías del derrumbe tienden a confundir dos planos: crisis de legitimidad (del sistema político, incluso del modelo) con el desplome del sistema o más bien la posibilidad de echarlo abajo. En realidad, son dos realidades bien diferentes. Es más, la importancia del poder acumulado por las fracciones neoliberales que dominan la elite chilena hace que un “simple” panorama post-neoliberal de tipo nacional-popular, como lo están viviendo varios países del “volcán latinoamericano” sea poco probable a corto plazo. Sobre todo cuando los primeros balances del “giro” progresista en el resto del continente, abierto en 1998 por la elección de Hugo Chávez, recalcan -una vez más- que las victorias electorales con un amplio apoyo popular no bastan para cambiar las relaciones de fuerzas frente al capital y construir alternativas viables (Gaudichaud, 2010).

En Chile, la capacidad estabilizadora que está demostrando el gobierno de la Nueva Mayoría es sólo una confirmación de las múltiples maneras que tiene el neoliberalismo avanzado de sobrevivir a los “agitados momentos” nacionales, continentales o mundiales. El propio Alberto Mayol, el 18 de agosto de 2014, llegó a preguntarse si no se estaría viviendo un « derrumbe » de... su teoría del derrumbe, presentada 3 años atrás. Confesó incluso « sentirse solo », pero afirma:

“El escenario de impugnación que se abrió en 2011 es estructural porque expresa contradicciones fundamentales de la dimensión económica de la sociedad: el mecanismo de integración es el consumo y los salarios son bajos, por lo que la deuda es el corazón del modelo económico en su aparición cotidiana: Los chilenos ven hoy la deuda no como un crédito (el acto de confianza de un poderoso), sino como un requerimiento de la vida cotidiana donde se acepta una estafa (los estudios cualitativos son muy claros en esto). Por tanto, la escena de la deuda está deslegitimada” (Mayol, 2014).

De nuevo un salto de la crisis de legitimidad (en este caso de la deuda) a la crisis estructural del modelo... A corto plazo, las operaciones transformistas del bacheletismo intentarán responder a este desconcierto, aunque las últimas encuestas de opinión muestran un leve decaimiento de la insumergible figura de la Presidenta (con un 40% de aprobación). La propuesta de la Nueva Mayoría es reformar en la continuidad, enfrentando un periodo que será probablemente de fuerte presión desde la derecha, tanto política, como económica, pero también desde las organizaciones sociales más radicales (pobladores y deudores habitacionales, Pueblo Mapuche, sindicatos clasistas del cobre o portuarios, sindicatos estudiantiles). El nuevo gobierno tendrá que jugar tanto en el plano de la consulta-cooptación (con la ayuda de los nexos que conserva en el espacio de los movimientos sociales), como desde la coacción-represión estatal. En noviembre 2013, en una nota

⁵⁸ Esta reflexión debe mucho a los comentarios de Luis Martín-Cabrera.

editorial para *El Mercurio*, Eugenio Tironi, destacado intelectual social-liberal, lo expresó con todas sus letras y algo de lirismo. Según él, con la presidenta Bachelet

“la razón de ser de las instituciones políticas no es defenderse de las mayorías, sino canalizar sus anhelos, que en el caso del Chile actual es el cambio. Reforma o Revolución: un viejo dilema que vuelve a tomar actualidad”⁵⁹.

En realidad, el panorama chileno parece todavía muy lejos de la temida “revolución” invocada por Tironi o incluso de una “coyuntura pre-revolucionaria” como lo invocó, con entusiasmo, Gabriel Salazar en 2011⁶⁰. Pero, el cambio de época es innegable: un cambio lleno de nubes, claroscuros y contradicciones. Mirando de reojo a países vecinos como Bolivia, Argentina, Ecuador, en los cuales la crisis de legitimidad del modelo neoliberal se transformó en crisis de hegemonía con grandes movilizaciones y rupturas institucionales, la clase dominante chilena busca evitar un escenario similar. Las tensiones y recomposición en curso en las derechas, el apoyo público a Bachelet de destacadas figuras de las fracciones financieras de la burguesía, permiten ver que las elites piensan a tientas encontrar nuevos aires y posibles correcciones sustentables para el régimen. Las grietas del modelo podrían incluso provocar sobresaltos, como reacciones violentas por parte de los de “arriba”.

“Al terminarse la etapa hegemónica del neoliberalismo, la dominación neoliberal se resiste a morir. Las resistencias al cambio de época se bifurcan entre reacción y revolución pasiva: la reacción violenta que se asoma en el retorno de prácticas represivas focalizadas y la revolución pasiva que asume el rostro de gobiernos que defienden la continuidad mediante correctivos conservadores” (Modonesi, 2008: 139).

Como lo hemos expuesto, si bien es cierto que el término de la educación mercantil, la abolición de las deudas ilegítimas o la recuperación de un sistema de salud público son imprescindibles para comenzar a pensar alternativas concretas, no se puede dejar de lado el considerar de manera prioritaria la cuestión laboral: o sea, las condiciones materiales concretas de millones de personas. El periódico *El Mostrador* recordó que 87% de los asalariados chilenos no están satisfechos con su empleo (Urriola, 2014). Hay allí una gran potencialidad política desestabilizadora del capital, pues el control del trabajo ajeno, de su plusvalía y excedentes sigue siendo una condición *sine qua non* de este régimen de acumulación. Asimismo, construir alternativas pensando en la existencia de un hipotético “fin del trabajo” (como lo proclamó Jeremy Rifkin) o de un “adiós al proletariado” (según André Gorz o Alain Touraine) son meramente engaños teóricos y un callejón sin salida. El trabajo (y sus conflictos) atraviesa “como una lanza todo el tejido social” de la historia de Chile, une lo económico y lo político con las diversas posibilidades “de resistir, organizarse y superar la realidad actual, no sólo la vida política, también la vida cotidiana y doméstica, esa realidad material olvidada -con precisa razón- por el fetiche de la institucionalidad política” (Narbona, Páez, 2014). Ricardo Antunes enfatiza por su parte:

“a pesar de la heterogeneización, complejización y fragmentación de la clase obrera, la posibilidad de una efectiva emancipación humana aún puede ser concretada y viabilizada socialmente a partir de revueltas y rebeliones que se originan centralmente en el mundo del trabajo; un proceso de emancipación simultáneamente *del* trabajo, *en el* trabajo y *por el* trabajo. Esto no excluye ni suprime otras formas importantes de rebeldía y contestación. Pero, viviendo en una sociedad que produce mercancías, valores de cambio, las revueltas del

⁵⁹ *El Mercurio* 2013 (Santiago) 19 de noviembre.

⁶⁰ Declaración del premio nacional de Historia durante una charla en la Universidad de Los Lagos. En: <<http://metiendoruido.com/2011/09/gabriel-salazar-vivimos-una-coyuntura-pre-revolucionaria/>>.

trabajo tienen estatuto de centralidad. Todo un amplio abanico de asalariados que comprende el sector servicios, además de los trabajadores “tercerizados”, los trabajadores del mercado informal los “trabajadores domésticos”, los desempleados, o los subempleados, etc., pueden sumarse a los trabajadores directamente productivos y por eso, actuando como clase, constituirse en segmento social dotado de mayor potencialidad anticapitalista. Del mismo modo, la lucha ecológica, los movimientos feministas y tantos otros nuevos movimientos sociales, tienen mayor vitalidad cuando consiguen articular sus reivindicaciones singulares y auténticas con la denuncia a la lógica destructiva del capital” (Antunes, 2000).

Ahora bien, recalcar esta perspectiva no significa caer en el economicismo de antaño cuando la clase obrera industrial era “El Sujeto” único y teleológico de la Revolución o buscar la subordinación sistemática de las diferentes luchas sociales a un movimiento obrero que debe reconstruirse. Incluso habría que plantear y recordar, volviendo a Marx, que fundamentalmente y estratégicamente se trata no sólo de construir emancipaciones desde el trabajo o desde lo subalterno, pero *in fine* en *contra* del trabajo, eso es emanciparse del trabajo asalariado y pensar el *más allá* del trabajo dependiente o sumiso...

Por otra parte, es menester insistir en la indispensable autonomía de los diferentes actores del espacio de los movimientos sociales para abandonar diversas visiones vanguardistas o “verticalistas” de un marxismo ortodoxo mal interpretado (y todavía presente en parte de las izquierdas). Más bien el desafío sería constituir *frentes socio-políticos* para la conformación de un bloque popular contrahegemónico, capaz de unificar amplias franjas de los asalariados, sectores medios precarizados, jóvenes diplomados y clases subalternas desde “la diagonal de las luchas de clases”, apoyándose en una dialéctica articuladora de distintas explotaciones y opresiones (culturales, patriarcales, ecológicas) para la construcción de convergencias donde el capital es, finalmente, “el principio activo central” (Bensaïd, 2011). En su última publicación, Dardot y Laval, proponen pensar la revolución del siglo XXI como “revolución de los comunes”, donde la praxis de las apropiaciones sociales y colectivas son las que importan y tendrían que federarse para instaurar sociedades basadas sobre el valor de uso y no el valor de cambio, y en la institución de una política de lo común, tanto contra la propiedad privada como frente a la tiranía de la burocracia estatal (Dardot, Laval, 2014). Pero, ¿qué significaría la construcción de esta “razón de lo común”?

“Es una razón política, un modo de conducción de las conductas *opuesto al de la competencia*. El sentido profundo de lo “común” como principio político es el siguiente: no hay más obligación (*cum-munus*: co-obligación) que la que procede de la coparticipación en la deliberación y la decisión. La noción de “política” toma entonces un sentido distinto a una actividad del orden del monopolio de los gobernantes, aunque sean bien intencionados: la de una igualdad en el hecho de “tomar parte” en la deliberación y la decisión por la cual las personas se esfuerzan por determinar lo justo. La co-producción de normas o reglas que compromete a todos los que participan en una actividad. Así reconectamos con la idea aristotélica de la política” (Ávila; Malo y Fernández-Savater 2014).

En su último libro sobre “Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo”, David Harvey avanza algunas propuestas similares. El geógrafo marxista llama a la fundación de “regímenes de derechos sobre lo común –haciendo especial hincapié en el conocimiento humano y la tierra como los bienes comunes más cruciales que poseemos– cuya creación, gestión y protección queda en manos de asambleas y asociaciones populares” y a la “disolución” de la oposición capital-trabajo

“por medio de productores asociados que deciden libremente qué, cómo y cuándo producirán en colaboración con otras asociaciones y con el objetivo de la satisfacción de las necesidades sociales comunes” (Harvey, 2014: 285-286).

El debate queda abierto y da para mucho. Evidentemente, partir de tales presupuestos generales es sólo al comienzo de un arduo y pedregoso camino. Primero, porque el movimiento social-popular en Chile está todavía muy fragmentado y porque la dictadura, como las condiciones concretas del trabajo flexible en democracia, conllevaron la destrucción de una de las clases obreras más organizada de América Latina. Segundo, porque se trata de apoyarse en las lecciones de los nuevos repertorios de lucha que nacieron en el seno de la juventud, del movimiento de pobladores, de las luchas Mapuche y de las incipientes experiencias de recomposición sindical (ocupación de espacios públicos y de trabajo, huelgas por solidaridad, control comunitario) para extenderlos al conjunto de los actores sociales. Tercero, porque hay que seguir agitando y encontrar nuevos temas de movilización unitarios para reanudar las demandas de los asalariados con las de los estudiantes y las de los sectores medios precarizados, las de los pueblos indígenas con las de los pobres de la ciudad, etc., en torno a objetivos alcanzables: es decir establecer un “programa de urgencia social y democrática”, sin despreciar el largo plazo del horizonte anticapitalista. Dentro de este programa, la derogación *real y definitiva* del código laboral del 1979 y su reemplazo por uno elaborado por y con las y los trabajadores y sus organizaciones; la (re)nacionalización del cobre (con participación de los mineros) y la inversión de sus beneficios en los servicios públicos y una economía de transición post-extractivista sustentable; el fin de las AFP y la recuperación de un sistema de previsión y de pensión solidario, por repartición, controlado por sus usuarios; el retorno a una educación de calidad 100% pública (con democratización comunitaria); y -a mediano plazo- la creación de una Asamblea Constituyente popular originaria con activa participación, son cinco puntos que, nos parece, podrían servir de base a la discusión colectiva (sin olvidar la reconquista del derecho a la vivienda, a la energía y al agua como bienes comunes imprescriptibles).

Pero, último elemento, el escenario actual es complejo también porque la coyuntura nos obliga a reconstruir palancas políticas transformadoras y a retomar discusiones estratégicas enterradas en el seno de las izquierdas chilenas. Es que no sólo el sindicalismo está atomizado o la ciudadanía atrapada por el endeudamiento anómico, son también las izquierdas críticas, revolucionarias, que están fragmentadas, a menudo grupusculares o ancladas en un pasado heroico y doloroso. Izquierdas que se encuentran en buena medida alejadas de gran parte de la realidad de la gente y sus problemas diarios, cuando las iglesias evangélicas o pentecostales se expanden los barrios y el campo de todo el país. En un momento en que la crisis capitalista mundial ya llegó a los países del Sur y que vientos de recesión comenzaron a rugir encima de la geografía económica del “jaguar chileno”, el drama es que no existe ninguna organización política capaz de proponer caminos unitarios revolucionarios, “abajo” y a la “izquierda”, a una escala masiva y popular. De hecho, la última elección presidencial profundizó aun más las divisiones existentes, sin entregar elementos de respuestas. No obstante, son numerosos los signos que incitan al optimismo. Se ha levantado una generación que ha perdido el miedo y que busca derroteros antisistémicos y alternativos. Podríamos decir incluso que buscan “respuestas socialistas raizales”, en referencia al fecundo pensador colombiano Fals Borda. La gran cantidad de colectivos barriales, revistas críticas, debates universitarios, talleres de educación popular, trabajo de formación sindical, en particular en torno a la noción de “poder popular” o para rescatar la historia de los Cordones industriales (Gaudichaud, 2004), evidencia una ebullición en construcción, portadora de futuros emancipatorios. Es cierto que en esa nueva camada de rebeldes todavía se hace esperar más apertura hacia temáticas debatidas en el resto de continente: feminismos poscoloniales, buen vivir y ecosocialismo, luchas antiextractivistas y agroecología, integración regional de los pueblos, democratización del “latifundio mediático”, autogestión obrera, cooperativismo y economía social, plurinacionalismo constituyente y derecho a la ciudad, etc. Pero, cuando se conmemoran los 40 años de la muerte en combate de Miguel Enríquez (líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria), diferentes corrientes, anarquistas, libertarias, neomiristas, trotskistas, antiimperialistas, guevaristas, autonomistas, indígenas consideran -con razón- que es momento de renovar los aires ensimismados

de las izquierdas. Sin embargo, hay que reconocer que los obstáculos son grandes, ya que más allá de los estrechos espacios de esas organizaciones, prima el rechazo ciudadano a la política... y a los políticos. Incluso en el seno del movimiento social todavía estamos en lo que Daniel Bensaïd llamaba “momento utópico” (Bensaïd, 2013). Varios sectores movilizados en 2011, agrupaciones, sindicatos, etc. se mantienen en la “ilusión de lo social”: creen en la idea-fuerza según la cual los movimientos de base y sus futuras confluencias serán suficientes para derrotar el neoliberalismo. Apuestan a la posibilidad -como lo propone el creativo teórico irlandés John Holloway- que la revolución sea un “río que crece”, cada vez más grande, donde se junten todas las rebeldías, el *saber-hacer* de los movimientos, las brechas de las experiencias comunitarias, las fuerzas de las luchas locales para terminar de *agrietar el capitalismo* y terminar con el trabajo enajenado. Se trata de crear otro mundo desde el “ahora y aquí”, sin tomar el poder de Estado y sus maniobras burocrático-institucionales (Holloway, 2011). Siempre valorando los aportes imprescindibles de la experimentación desde el presente, las “emancipaciones en construcción” en los intersticios de nuestras sociedades y las múltiples “utopías concretas” que cabalgan por Nuestra América (Gaudichaud, 2013), pensamos que no bastará ese cumulo de diversas grietas, para tumbar el muro blindado y armado del capital. El proceso chileno sólo confirma la gran solidez del modelo y su increíble plasticidad, capacidad de adaptación y fuerza centralizadora, poder de coerción y dominio de múltiples recursos simbólicos. En este sentido, se hace urgente rescatar la política “como arte estratégico”, como potencia organizacional distinta de lo social y de una simple colección de demandas específicas. O sea, recuperar un futuro capaz de representar un proyecto al servicio de lo común, capaz de plantearse como horizonte nada menos que un cambio *civilizatorio* frente al apocalipsis climático y medioambiental planetario en el cual ya estamos insertos. Eso es pensar una ruptura revolucionaria en nuestras vidas y del sistema, individuales y colectivas, una ruptura ecosocialista nustramericana:

El pasaje del “progreso destructivo” capitalista al ecosocialismo es un proceso histórico, una transformación permanentemente revolucionaria de la sociedad, de la cultura y de las mentalidades. Esta transición debe llevar, no solo a un nuevo modo de producción y a una sociedad igualitaria y democrática, sino también a un *modo de vida* alternativo, a una nueva *civilización* ecosocialista, más allá del reino del dinero, más allá de los hábitos de consumo artificialmente producidos por la publicidad, y más allá de la producción sin límites de mercancías innecesarias y/o nocivas para el medio ambiente. Es importante enfatizar que semejante proceso no puede comenzar sin una transformación revolucionaria en las estructuras sociales y políticas, y el apoyo activo, por una vasta mayoría de la población, a un programa ecologista. El desarrollo de la conciencia socialista y la preocupación ecológica es un proceso, donde el factor decisivo es la propia experiencia de lucha popular, desde confrontaciones locales y parciales al cambio radical de la sociedad (Löwy, 2009).

Al compas de la dinámica de las nuevas luchas de clases, y a más de 40 años de la derrota trágica de la Unidad Popular, surge en Chile la necesidad de reconstruir una izquierda anticapitalista que mire, con respeto fraternal y distancia crítica, el pasado del movimiento obrero y revolucionario para proyectarse hacia nuestros tiempos. La enorme bisagra existente entre la creciente politización de lo social y la ausencia de herramientas políticas genuinas para acumular fuerzas, hace parte de las grandes debilidades intrínsecas de la naciente reconstitución de la conflictividad antagonica actual.

“Debemos refundar y reinventar las formas partidarias (poco importa si les damos ese nombre) es decir, los instrumentos democráticos de centralización de la lucha política. La centralización no es una determinación administrativa, sino un proceso orgánico por el cual se concentran energías, se hacen experiencias comunes, se delibera de conjunto, se decide y se revisan las decisiones según mecanismos democráticos. No podemos predeterminar qué

forma tendrán las organizaciones revolucionarias del próximo periodo al margen de la práctica social, aunque sí formular algunos criterios e hipótesis organizativas a partir de la experiencia política acumulada. La superación de todo monolitismo ideológico y la apertura al pluralismo político, una fuerte sensibilidad hacia la “cuestión democrática”, el respeto a la autonomía del movimiento social y a la multiplicidad de expresiones organizativas, parecen ser las coordenadas mínimas para la estructuración de corrientes políticas que sean dignas de nuestra época” (Martín y Mosquera, 2014).

Sin estas herramientas, el derrumbe del modelo chileno será sólo ilusión o, si viene el cambio, se hará a favor de los de siempre...

Bibliografía citada

Acuña A., Manuel 2014 "Entre el capital bancario y el comercial. Época de reformas y definiciones", *Rebelión* (Madrid) 14 de junio. En: <www.rebellion.org/noticia.php?id=185962&titular=%E9poca-de-reformas-y-definiciones->.

Agacino, Rafael 2013a, "Crisis política en Chile: Debate" en *Revista del Grupo de Estudios Marxistas* (Santiago: Quimantú) N°1, mayo.

Agacino, Rafael 2013b "Movilizaciones estudiantiles en Chile: anticipando el futuro" en *Educação em revista* (Marília: Universidade Estadual Paulista) Vol. 14, No 1. En <www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/educacaoemrevista/article/download/3294/2552>.

Agacino, Rafael 2006 *Hegemonía y contra hegemonía en una contrarrevolución neoliberal madura. La izquierda desconfiada en el Chile post-Pinochet*, Documento de trabajo (Buenos Aires: CLACSO). En <www.plataforma-nexos.cl>.

Agencia EFE 2013 "Chile es un ejemplo en reducción de la pobreza en América Latina, según la OCDE" (Madrid) 23 de abril. En: <www.eluniverso.com/2013/04/23/1/1361/chile-un-ejemplo-reduccion-pobreza-america-latina-segun-ocde.html>.

Aguiar, Santiago 2010 *Elementos de la estructura de la clase trabajadora en el Chile actual* (Santiago de Chile: Estudios del Trabajo). En: <www.estudiosdeltrabajo.cl>.

Aguiar, Santiago 2009 *La flexiprecarización. Innovación, Clase obrera y Nueva Precariedad*. (Santiago de Chile: Estudios del Trabajo). En: <www.estudiosdeltrabajo.cl>.

Amtmann, Carla 2014 "La democracia enclaustrada" *Radio Universidad de Chile*, septiembre. En: <radio.uchile.cl/2014/09/24/la-democracia-enclaustrada>.

Antunes, Ricardo 2003 *¿Adiós al trabajo? Ensayo sobre las metamorfosis y el rol central del mundo del trabajo* (Buenos Aires: Ediciones Herramienta).

Antunes, Ricardo 2000 "La centralidad del trabajo hoy" en *Revista Papeles de Población* (México: Universidad Autónoma del Estado de México) vol. 6, núm. 25, julio-septiembre. En: <www.redalyc.org/articulo.oa?id=11202505>.

Aravena, Antonio y Núñez, Daniel 2011 "Los gobiernos de la Concertación y el sindicalismo en Chile" en De la Garza Toledo, Enrique (ed.) *Trabajo y sindicatos en los gobiernos de izquierda en América Latina* (OIT: *Revista Trabajo*) N°8, 2011, p 113-133.

Aravena, Antonio, Nuñez, Daniel (ed.) 2009 *El renacer de la huelga obrera en Chile. El movimiento sindical en la primera década del siglo XXI* (Santiago: ICAL).

Araujo, Kathya y Martuccelli, Danilo 2013 "Individu et néolibéralisme : réflexions à partir de l'expérience chilienne" en *Problèmes d'Amérique latine* (Paris) N° 88.

Armstrong, Alberto y Águila, Rafael 2011 "Evolución de las huelgas laborales en Chile, 1979-2009" en *Revista Administración y Economía* (Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile) N° 69.

Atria, Fernando 2013 *La constitución tramposa* (Santiago: LOM).

Ávila, Débora; Malo, Marta y Fernández-Savater, Amador 2014 “Laval y Dardot: El neoliberalismo es una forma de vida, no sólo una ideología o una política económica”. En <www.eldiario.es/interferencias/neoliberalismo-ideologia-politica-economica-forma_6_312228808.html>.

Azócar, Carlos 2013 “Movimiento estudiantil y elecciones en Chile”, OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año XIV, N° 34, noviembre.

Azócar, Carla y Azócar, Carlos y Mayol, Alberto 2013 *El Chile Profundo: modelos culturales de la desigualdad y sus resistencias* (Santiago: Liberalia Ediciones)

Azócar, Carla y Azócar, Carlos y Mayol, Alberto 2011 “Siete Fenómenos sobre Educación y Desigualdad en Chile”, en *Documento de trabajo Centro de Investigación en Estructura Social*, Universidad de Chile, Santiago. En <www.ciesmilenio.cl/wp-content/uploads/2011/03/DESIGUALDAD-Y-EDUCACION-INFORME-CIES-U-DE-CHILE.pdf>.

Azócar, Carlos y Mayol Alberto, 2011 “Politización del malestar, movilización social y transformación ideológica: el caso Chile 2011” en *Polis* (Santiago: Universidad Bolivariana) N°30. En <<http://polis.revues.org/2218>>.

Barozet, Emmanuelle y Méndez, María Luisa y Espinoza, Vicente 2013 “Estratificación y movilidad social bajo un modelo neoliberal: El caso de Chile”, *Revista Laboratorio* (Argentina) N°25, año 14, otoño. En: <http://issuu.com/editorialeder/docs/revista_lavboratorio_n__25_interio>.

Barozet, Emmanuelle 2011 "Mobilisations étudiantes et malaise social : el invierno chileno de 2011" en *Problèmes d'Amérique Latine* (Paris: IHEAL) 4, pp.129-131.

Barozet, Emmanuelle y Espinoza, Vicente 2009 “¿De qué hablamos cuando decimos clase media? Perspectivas sobre el caso chileno” en *Universidad Alberto Hurtado-UDP-Expansiva* (Santiago) No. 142, agosto.

Bensaïd, Daniel 2013 *La política como arte estratégico* (Madrid: La Oveja Negra).

Boccaro, Guillaume 2013, « Manuel Gárate Chateau, *La revolución capitalista de Chile (1973-2003)*, Editorial Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile, 2012, 589 p. », *Nuevo Mundo - Mundos Nuevos* (Paris) Book reviews and essays, febrero. En: <<http://nuevomundo.revues.org/64887>>.

Boccardo, Giorgio y Ruiz, Carlos 2014 *Los chilenos bajo el neoliberalismo. Clases y conflictos sociales* (Santiago: Ediciones El Desconcierto y Fundación NODO XXI),

Boccardo, Giorgio y Ruiz, Carlos 2011 “Panorama actual de la estructura social chilena (en la perspectiva de las transformaciones de la historia inmediata)” en *Documento de Trabajo, Centro de Investigación de la Estructura Social (CIES)* (Santiago: Universidad de Chile) abril.

Boeninger, Edgardo (1997) *Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad* (Santiago: Editorial Andrés Bello).

Carrillo Ramos, Juan Pablo 2009 “Poder Constituyente y Contrarrevolución. Nacimiento y consolidación del Estado Neoliberal en Chile” en *Rebelión*, 10 de octubre. En: <www.rebellion.org/noticia.php?id=93206>.

Castel, Robert 2004 *La Inseguridad social. ¿Qué es estar protegido?* (Buenos Aires: Manantial).

Chesnais, Francois 1997 *La mondialisation du capital* (Paris : Syros).

CONFUSAM 2014 “Para mejores reformas: Urge un nuevo sindicalismo” en CONFUSAM (Santiago) 4 de agosto. En: <www.confusam.cl/index.php?option=com_k2&view=item&id=1226:para-mejores-reformas-urge-un-nuevo-sindicalismo&Itemid=112>.

Compagnon, Olivier y Gaudichaud, Franck 2008 “Chili : un passé trop vite passé” en *Hermès* (Paris: CNRS) N°52.

Couffignal, Georges 2011 “Stabilité politique et crise de la représentation au Chili” en *Cahiers des Amériques latines* (Paris: IHEAL) N° 68.

Dardot, Pierre y Laval, Christian 2014 *Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle* (Paris: La Découverte).

Dardot, Pierre y Laval, Christian 2009 *La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale* (Paris: La Découverte).

Doran, Marie-Christine 2010 “Femmes et politique au Chili : dynamiques et impacts de l'accession au pouvoir de Michelle Bachelet” en *Recherches féministes* (Laval: Université de Laval) N° 23, junio.

Dezalay, Yves y Bryant, Garth 2002 *The internationalization of palace wars: lawyers, economists, and the contest to transform Latin American states* (Chicago: University of Chicago press).

ENCLA 2011 *Séptima Encuesta Laboral* (Santiago: Dirección del Trabajo). En: <www.dt.gob.cl/documentacion/1612/w3-article-101347.html>.

Echeverría, Magdalena 2010 *La historia inconclusa de la subcontratación: y el relato de los trabajadores* (Santiago: División de Estudios de la Dirección del Trabajo). En: <www.dt.gob.cl/documentacion/1612/articles-97627_recurso_1.pdf>.

Fazio, Hugo 2010 *Un País gobernado por uno de sus dueños* (Santiago: LOM).

Fazio Hugo 2005 *Mapa de la extrema riqueza en Chile al 2005* (Santiago: LOM).

Fazio, Hugo y Parada, Magaly 2010 *Veinte años de política económica de la Concertación* (Santiago: LOM).

Figueroa Bárbara, 2014 “Salario mínimo: nuevo ciclo político comienza por emparejar la cancha” *El Quinto Poder* (Santiago) 5 de junio. En: <www.elquintopoder.cl/politica/salario-minimo-nuevo-ciclo-politico-comienza-por-emparejar-la-cancha>.

Fleet, Nicolás 2011 “Movimiento estudiantil y transformaciones sociales en Chile: una perspectiva sociológica” en *Polis* (Santiago: Universidad Bolivariana) N° 30. En <<http://polis.revues.org/2152>>.

Frías, Patricio 2008 *Desafíos del sindicalismo en los inicios del siglo XXI* (Santiago: CLACSO ediciones).

Gárate, Manuel 2012 *La Revolución capitalista de Chile (1973-2003)* (Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado).

Garcés Mario 2012 *El despertar de la sociedad. Los movimientos sociales de América Latina y Chile*, (Santiago: LOM).

Garretón, Manuel Antonio y Garretón, Roberto 2010 “La democracia incompleta en Chile: La realidad tras los rankings internacionales” en *Revista de Ciencia Política* (Santiago: Universidad Católica de Chile) Vol.30, N° 1.

Garretón, Manuel Antonio 2012 *Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los gobiernos de la Concertación en Chile. 1990-2010* (Santiago: Editorial ARCIS/ CLACSO).

Gaudichaud, Franck 2014a “Ensayo crítico sobre el nuevo gobierno Bachelet. “Progresismo transformista”, neoliberalismo maduro y resistencias sociales emergentes” en *Revista Observatorio crítico de América Latina* (Buenos Aires: CLACSO) N° 35, mayo. En: <www.clacso.org.ar/institucional/1h3_libro_detalle.php?idioma=&id_libro=875&pageNum_rs_libros=>>.

Gaudichaud, Franck 2014b « La voie chilienne au néolibéralisme. Regards croisés sur un pays laboratoire » en *Nuevo Mundo - Mundos Nuevos* (Paris) 10 de junio: En: <<http://nuevomundo.revues.org/67029>>.

Gaudichaud, Franck (ed.) 2013a *Chili 1970-1973. Mille jours qui ébranlèrent le monde* (Rennes : Institut des Amériques - Presses Universitaires de Rennes).

Gaudichaud, Franck (ed.) 2013b *Emancipaciones en América Latina* (Quito: Instituto de Altos Estudios Nacionales).

Gaudichaud, Franck 2011 “Reflexiones en torno al “largo mayo chileno”. Cuando el neoliberalismo triunfante se agrieta” en *Herramienta* (Buenos aires). En: <www.herramienta.com.ar/herramienta-web-10/reflexiones-en-torno-al-largo-mayo-chileno-cuando-el-neoliberalismo-triunfante-se>.

Gaudichaud, Franck (ed.) 2010 *El Volcán latino-americano. Izquierdas, movimientos sociales y neoliberalismo* (Madrid: OtraAmérica). En línea en: <<http://alainet.org/active/40895>>.

Gaudichaud, Franck 2004 *Poder Popular y Cordones industriales. Testimonios sobre la dinámica del movimiento popular urbano durante el gobierno de Salvador Allende* (Santiago: LOM-DIBAM).

Galdámez, Elizabeth y Aedo, Joaquín 2014 “Flexibilización del capital, un desafío en el trabajo y en territorio” en *Revista La Papa* (Santiago) noviembre, N°2.

Gómez Leyton, Juan Carlos 2010 *Política, democracia y ciudadanía en una sociedad neoliberal, Chile 1990-2010* (Santiago: Editorial ARCIS/ CLACSO).

Gómez Leyton, Juan Carlos 2004 *La frontera de la democracia. El derecho de propiedad en Chile 1925-1973* (Santiago: LOM).

Gutiérrez Crocco, Francisca 2013 « Oportunidades y peligros del pluralismo sindical en el Chile post-transición » en *Nuevo Mundo - Mundos Nuevos (Paris)* Workshops, junio. En: <<http://nuevomundo.revues.org/65608>>.

Haber, Stéphane 2012 “Analyser le néolibéralisme aujourd'hui” en *La Revue des Livres* (Paris) N° 4, mars-avril, p. 60-67.

Harvey, David 2014 *Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo* (Quito: Instituto de altos Estudios Nacionales).

Harvey, David 2013 *Breve historia del neoliberalismo* (Madrid: Akal).

Harvey, David 1992 *La condición de la postmodernidad* (Buenos Aires: Amorrortu).

Herreros, Francisco 2012 “La resistencia estudiantil y el fracaso de la educación de mercado en Chile” en Estay Reyno, Jaime Eduardo y Lara, Claudio y Silva, Consuelo (ed.) *El neoliberalismo y su crisis: causas, escenarios y posibles desenvolvimientos* (Santiago: REDEM), p. 209-225.

Holloway, John 2011 *Agrietar el capitalismo. El hacer contra el trabajo* (Buenos Aires: ediciones Herramienta).

Huneus, Carlos 2000 *El régimen de Pinochet* (Santiago: Ed. Sudamericana).

Lazzarato, Maurizio 2011 *La fabrique de l'homme endetté. Essai sur la condition néolibérale* (Paris: Éditions Amsterdam).

López, Ramón; Figueroa y Eugenio y Gutiérrez, Pablo 2013 “La ‘parte del león’: Nuevas estimaciones de la participación de los súper ricos en el ingreso de Chile” en *Serie Documentos de trabajo* (Santiago: Departamento de Economía de la Universidad de Chile). En: <www.econ.uchile.cl/uploads/publicacion/306018fadb3ac79952bf1395a555a90a86633790.pdf>.

Löwy, Michael 2009, “Ecosocialismo: hacia una nueva civilización”, *Herramienta* (Buenos Aires) N° 42 octubre. En: <www.herramienta.com.ar/node/1041>.

Löwy, Michael 1991, *¿Qué es la sociología del conocimiento?* (México: Fontamara).

Maillet, Antoine 2013, *La construcción política de los mercados: variedades de neoliberalismo en el Chile post-dictadura*, Thèse en science politique, IEP de París, PUC, Santiago de Chile, 2013.

- Maldonado, Ruben Andino 2015 “Ya está claro hasta dónde quiere llegar este gobierno. Entrevista con Marta Matamala” en *Punto Final* (Santiago) N° 821, 9 de enero.
- Martín, Facundo Nahuel y Mosquera, Martín 2014 "¿Qué organización para qué estrategia? Poder popular, herramienta política y estrategia socialista" en *Democracia Socialista* 10 de marzo. En: <www.democraciasocialista.org/?p=2647>.
- Marx, Karl 1844, *Manuscritos económicos y filosóficos* (París). En: <www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/manuscritos>.
- Mathieu, Lilian 2012 *L'espace des mouvements sociaux* (Paris: Éditions du Croquant).
- Mathivet Charlotte y Sugranyes Ana 2010 *Ciudades para todos: Por el derecho a la ciudad, propuestas y experiencias* (Santiago : Habitat International Coalition).
- Mayol, Alberto 2012 *No al Lucro. De la crisis del modelo a la nueva era política* (Santiago: Random House Mondadori).
- Melucci, Alberto 1999 *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia* (México: El Colegio de México).
- Ministerio del desarrollo social 2015 *Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2013* (Santiago). En <<http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/resultados-encuesta-casen-2013>>.
- Mira, Andrea 2011 “Crisis de representatividad y estallido social” en *Polis* (Santiago: Universidad Bolivariana) N° 30. En <<http://polis.revues.org/2232>>.
- Modonesi, Massimo 2008 “Crisis hegemónica y movimientos antagonistas en América Latina. Una lectura gramsciana del cambio de época” en *A Contracorriente: Revista de Historia Social y Literatura en América Latina* (Raleigh: North Carolina State University) Vol. 5, N° 2.
- Moguillansky, Graciela 2001 “Privatizaciones y su impacto en la inversión” en French-Davis, Ricardo y Bárbara Stallings (Eds.) *Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973* (Santiago: CEPAL-LOM Ediciones).
- Mönckeberg, María Olivia 2007 *El negocio de las universidades en Chile* (Santiago: Antartica).
- Montero, Cecilia 1997 *La revolución del empresariado chileno* (Santiago: Dolmen ediciones).
- Moulián, Tomás 2004 *De la política letrada a la política analfabeta* (Santiago: LOM).
- Moulián, Tomás 2002 *Chile actual: anatomía de un mito* 2° edición (Santiago: LOM).
- Moulián, Tomás 1998 *El consumo me consume* (Santiago: LOM).
- Narbona, Karina 2014 *Antecedentes del modelo de relaciones laborales chileno* (Santiago: Fundación SOL). En: <<http://defiendeytransforma.cl/?wpdmact=process&did=MTguaG90bGluaw==>>>.

Narbona, Karina y Páez, Alexander 2014 “La acumulación flexible en Chile: Aportes a una lectura socio-histórica de las transformaciones recientes del trabajo” en *Revista Preterito Imperfecto* (Santiago) N 2, mayo. En: <<http://preteritoimperfecto.cl/?p=95#more-95>>.

Olin Wright, Erik 2009 "Understanding Class: toward an integrated analytical approach", *New Left Review* (Londres) 60, diciembre. En: <www.ssc.wisc.edu/~wright/Published%20writing/Understanding%20Classes%20--%20NLR%2060.pdf>.

Observatorio Chileno de Políticas Educativas 2014 "¿Dónde quedó la reforma educativa?" en *OPECH* (Santiago) septiembre. En: <www.opech.cl>.

Osorio, Sebastián y Rivas, Gabriel 2014 “**El acuerdo de la CUT con el Gobierno y el Salario mínimo**” en *CIPSTRA* (Santiago) julio. En: <<http://www.cipstra.cl/salario-minimo-1/>>.

Osorio, Sebastián 2013 “El bloque histórico en Chile durante la transición y las transformaciones en la política sindical: el caso de la CUT” en *CIPSTRA* (Santiago) N°3. En: <www.cipstra.cl>.

Osorio Contreras, Rodrigo 2007 *La dictature de Pinochet en perspective. Sociologie d'une révolution capitaliste et néoconservatrice* (Paris : L'Harmattan).

Patino, Bruno 2000 *Pinochet s'en va : la transition démocratique au Chili, 1988-1994* (Paris: IHEAL).

Piva, Adrián 2011 “¿Fin de la clase obrera o desorganización de clase?” en Bonnet, Alberto (comp.) *El país invisible. Debates sobre la Argentina reciente* (Buenos Aires: Peña lillo/Ediciones Continente).

PNUD, 1998 *Informe de Desarrollo Humano en Chile: Las paradojas de la modernización* (Santiago: PNUD). En: <www.desarrollohumano.cl/ele98.htm>.

PNUD 2015, *Informe de Desarrollo Humano en Chile: Los tiempos de la politización* (Santiago: PNUD). En: <www.desarrollohumano.cl/idh/informes/2015-los-tiempos-de-la-politizacion>.

Perry, Anderson 2003 “Neoliberalismo: un balance provisorio” en Sader, Emir y Gentili, Pablo (comps.) *La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social* (Buenos Aires: CLACSO).

Pinto, Julio y Salazar, Gabriel 1999, *Historia Contemporánea de Chile (Vol.1). Estado, legitimidad y ciudadanía* (Santiago: LOM).

Pérez-Ahumada, Pablo 2015, “La centralidad de la clase trabajadora para la construcción de un proyecto de izquierda en Chile”, *Perspectiva diagonal* (Santiago) 15 octubre. En: <www.perspectivadiagonal.org/la-centralidad-de-la-clase-trabajadora-para-la-construccion-de-un-proyecto-de-izquierda-en-chile/>.

Pérez-Ahumada, Pablo 2015, “The end of a Traditional Class Distinction in Neoliberal Society: ‘White-collar’ and ‘Blue-collar’ Work and its Impact on Chilean Workers’ Class Consciousness”, *Critical Sociology*, Online First Version. En: <<http://doi:10.1177/0896920515585609>>.

Portales, Felipe 2005, “La inexistencia de la democracia en Chile”, *Polis* (Santiago: Universidad Bolivariana) 10, 27 de abril. En: <<http://polis.revues.org/7493>>.

Prognon, Nicolas 2010 “Le Chili, une transition vers la démocratie aboutie ?” *ILCEA* (Grenoble: Universidad Grenoble Alpes), N° 13. En: <<http://ilcea.revues.org/907>>.

Ruiz, Carlos E. 2013 *Conflicto social en el neoliberalismo avanzado: análisis de clase de la revuelta estudiantil en Chile* (Buenos Aires: CLACSO). En: <<http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20131023010020/RuizEncina.pdf>>.

Salazar, Gabriel 2006 *La violencia política popular en las “grandes Alamedas”. La violencia en Chile 1947-1987 (una perspectiva histórica popular)* (Santiago: LOM) segunda edición.

Silva, Patricio 2008 *In the Name of Reason: Technocrats and Politics in Chile* (University Park: Penn State University Press).

Skoknic Francisca 2014 “Los forados a favor de la elusión que dejó el acuerdo tributario de Arenas con la derecha”, *CIPER* (Santiago) 17 de julio. En: <ciperchile.cl/2014/07/17/los-forados-a-favor-de-la-elusion-que-dejo-el-acuerdo-tributario-de-arenas-con-la-derecha/>.

Svampa, Maristella 2012 “Consenso de los Commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América” en *Revista Observatorio crítico de América Latina* (Buenos Aires: CLACSO) N° 32. En: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20120927103642/OSAL32.pdf>.

Tarrow, Sydney 1994 *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política* (Madrid: Alianza editorial).

Taylor, Marcus 2006 *From Pinochet to the ‘Third Way’: Neoliberalism and Social Transformation in Chile*. (London: Pluto Press).

Therborn, Göran 2014 “New Masses? Social Bases of Resistance” en *New Left Review* (Londres) N° 85.

Therborn, Göran 2012 “Class in the 21st century” en *New Left Review* (Londres) N° 78.

Tilly, Charles y Tarrow, Sydney 2008 *Politiques du conflit. De la grève à la révolution* (Paris: Presses de SciencesPo).

Toro, Sergio 2008 “De lo épico a lo cotidiano: Jóvenes y generaciones políticas en Chile” en *Revista de Ciencia Política* (Santiago: Universidad Católica de Chile) N° 28.

Tricot, Tito 2014 “Hace 41 años nos despertamos de golpe. De golpe de Estado”, *Servicio Informativo Alai-amlatina*, 12 de septiembre. En: <<http://alainet.org/active/77055&lang=es>>.

Ugarte, José Luis 2014 "La cocina de Javiera", *El Mostrador* (Santiago) 13 de noviembre. En: <<http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/11/13/la-cocina-de-javiera>>.

Universidad Diego Portales 2014 *Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile* (Santiago: UDP). En <<http://www.derechoshumanos.udp.cl/index.php/informe-anual/repository/Informe-Anual-sobre-Derechos-Humanos-en-Chile-2014>>.

Undurraga Tomás 2014 *Divergencias: trayectorias del neoliberalismo en Argentina y Chile* (Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales).

Urriola, Rafael 2014 “¿Fracaso del sistema? 87% de empleados no están contentos con sus empleos” en *El Mostrador* (Santiago) 23 de septiembre. En <www.elmostrador.cl>.

Urrutia, Miguel 2002 “La crítica al neoliberalismo como interioridad keynesiana” en *Revista Chilena de Temas Sociológicos* (Santiago: Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez) N° 8.

Vivallo Urra, Oscar 2013 “La exclusión social como instrumento sociopolítica de dominación. Análisis de la exclusión social en el acceso a la educación superior chilena”, en *Coloquio internacional “Chile actual. Gobernar y resistir en una sociedad neoliberal”*, Grenoble, Francia, septiembre. En: <<http://chili-neoliberal.sciencesconf.org>>.

Williams, Raymond 1980 *Marxismo y literatura* (Barcelona: Península).

Womack John Jr. 2007 *Posición estratégica y fuerza obrera. Hacia una nueva historia de los movimientos obreros* (México: Fondo de Cultura económica).

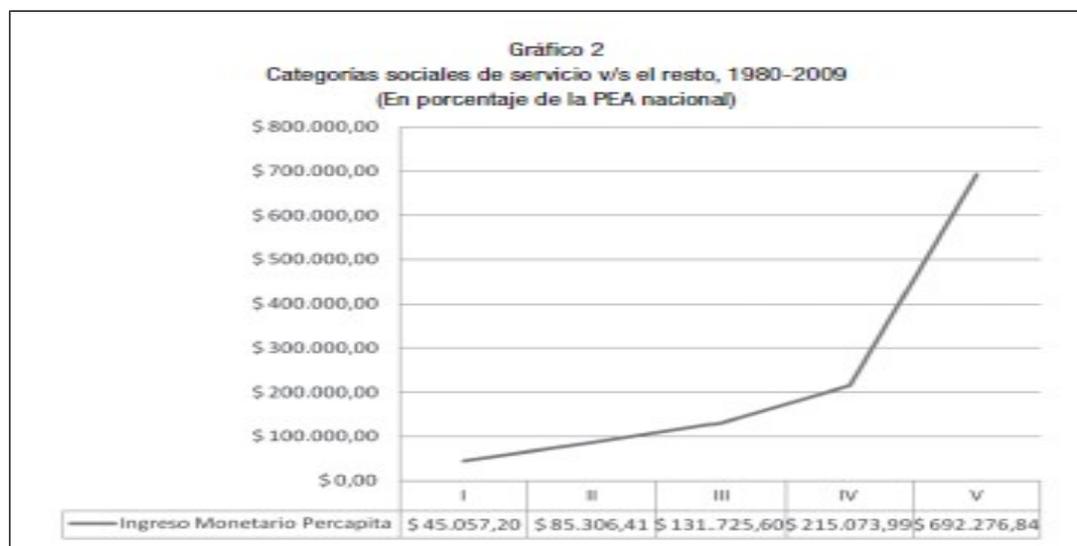
Zrari, Sabah 2012, « Le Chili : élites néolibérales et société étatiste », *CERI* (Paris : SciencesPo) Junio. En: <www.ceri-sciences-po.org>.

Anexo 1: Estratificación social y tercerización del trabajo en la sociedad neoliberal

Cuadro 1
Significación numérica de categorías sociales, 1971-2009
(En porcentajes de la PEA nacional)

Categorías sociales y grandes grupos	Periodo (años)						
	1980	1986	1990	1995	2000	2005	2009
Empresarios agrícolas	0,4	0,9	0,9	0,6	0,5	0,4	0,4
Asalariados agrícolas	6,5	9,8	9,5	7,7	7,2	6,6	5,9
Campesinado y colonos pobres	7,5	8,1	7,9	6,6	5,6	5,3	4,2
Resto PEA agrícola no clasificada en otro grupo	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Sub total categorías sociales en agricultura, silvicultura, caza y pesca	14,6	18,9	18,4	15,0	13,4	12,5	10,6
Empresarios no agrícolas	1,4	2,2	3,2	2,6	2,4	2,4	2,2
Sectores medios asalariados	20,3	21,0	23,6	26,4	26,5	28,9	29,7
Sectores medios independientes	9,2	5,7	6,2	8,1	8,0	7,9	7,4
Artesanado tradicional	5,2	4,8	5,1	5,3	5,3	4,9	4,9
Clase obrera minera	1,3	0,7	1,0	0,8	0,5	0,4	0,5
Clase obrera industrial y de la construcción	11,1	10,0	12,1	13,2	10,4	10,9	10,1
Clase obrera del comercio y los servicios	12,0	11,9	12,7	13,1	14,6	14,7	15,9
Grupos marginales	10,4	11,9	12,0	10,8	10,6	10,4	10,1
PEM & POJH	3,8	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cesantes y BTPV	10,4	8,8	5,7	4,7	8,3	6,9	8,6
Resto	0,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Sub total categorías sociales fuera de agricultura, silvicultura, caza y pesca	85,4	81,1	81,6	85,0	86,6	87,5	89,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Fuente: Elaboración de Carlos Ruiz, en base a datos del Instituto de Estadísticas Nacionales (Ruiz, 2013: 40).



Fuente: Ruiz y Boccardo, 2010 (citado en: Ruiz, 2013: 44).

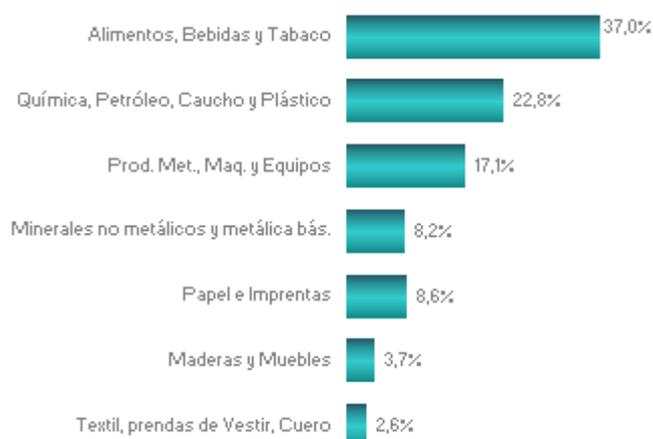
Anexo 2: Estructura del empleo y estructura del PIB en Chile (2009)

Estructura de empleo total	
Empleadores	334.640
Cuenta Propia	1.439.680
Asalariados	4.859.030
Personal de Servicio	340.410
Familiar no Remunerado del hogar	116.580
TOTAL	7.090.340

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO AÑO 2009

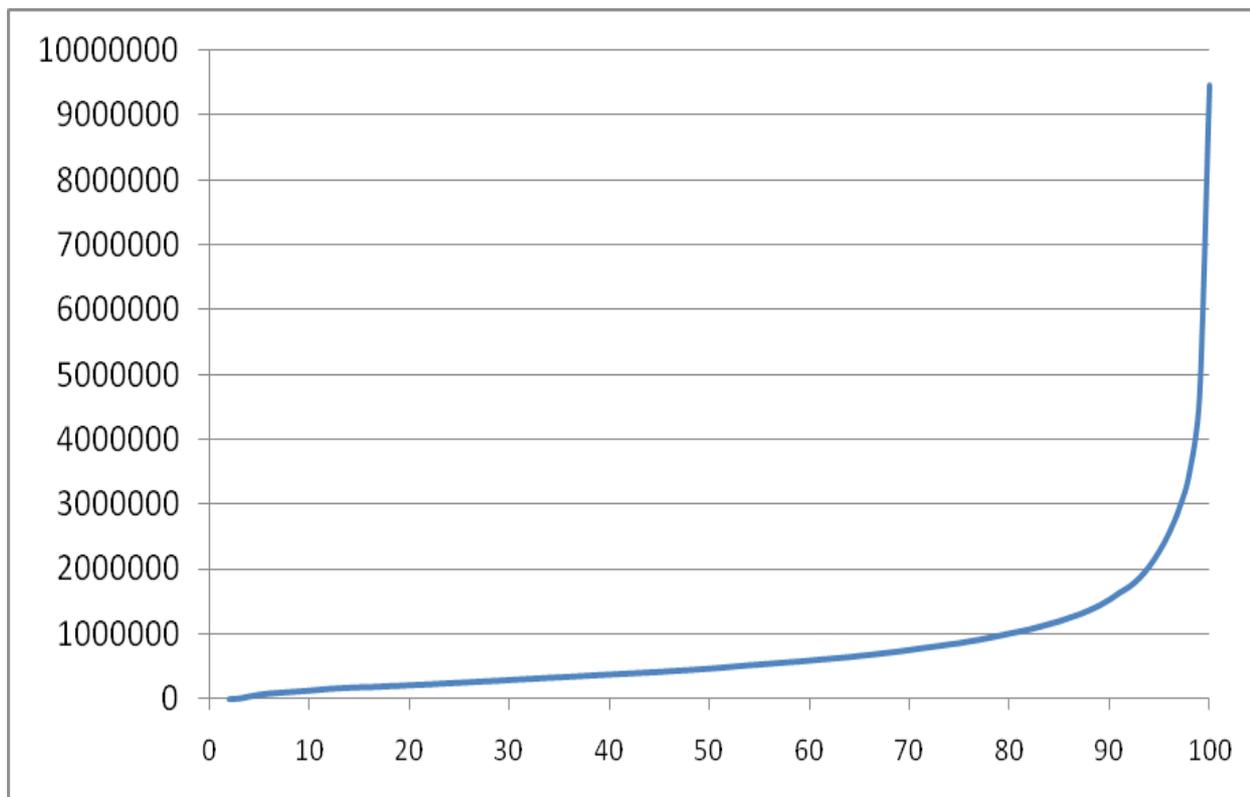


ESTRUCTURA DEL PIB EN LA INDUSTRIA AÑO 2009



Fuente: Elaboración de Santiago Aguiar, en base a datos del Banco Central y del INE (Aguiar, 2010).

Anexo 3: Mapa de la extrema desigualdad. Ingreso de los hogares según percentiles



Fuente: Elaboración de Carlos Azócar y Alberto Mayol, en base a encuesta CASEN 2009 8 (Azócar y Mayol, 2011).

Anexo 4: Ciudadanos y prácticas electorales en tiempos neoliberales (1989-2009)

TABLA N° 1
EVOLUCIÓN DE LA INSCRIPCIÓN ELECTORAL

Elección Presidencial año	Población mayor de 18 años	Inscritos	No inscritos	% no inscritos
1989	8.499.972	7.557.537	942.435	11.1%
1993	9.052.632	8.085.493	967.193	10.7%
1999	10.126.098	8.084.476	2.041.622	20.2%
2005	11.322.769	8.220.897	3.101.872	27.4%
2009	11.965.990	8.285.186	3.680.804	30.7%

Tabla N° 2
Abstención General (incluidos votos nulos y blancos)

Elección Presidencial Año	Votos validamente emitidos	Total de Votantes	Total de Inscritos Padrón Electoral	Ciudadanos No Participantes	% de Ciudadanos no participantes
1989	6.979.859	7.158.727	7.557.537	577.678	7.64%
1993	6.968.950	7.376.691	8.085.493	1.116.543	13.8%
1999	7.178.727	7.326.753	8.084.476	905.749	11.2%
2005	6.959.413	7.162.345	8.220.897	1.261.484	15.3%
2009	6.942.601	7.186.344	8.285.186	1.342.585	16.2%

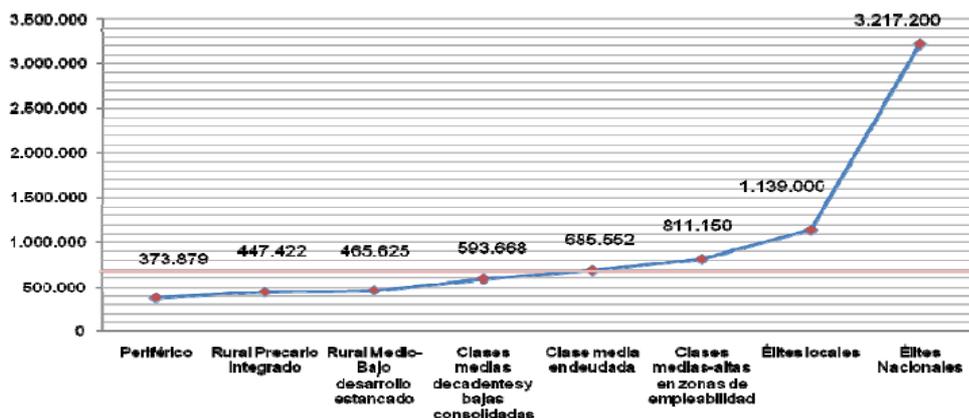
Fuente: Elaboración de JC Gómez Leyton, en base a datos del Servicio electoral - SERVEL (Gómez L., 2010).

Anexo 5: Correlación entre desigualdades de ingresos y educación en Chile

Nota: La Prueba de Selección Universitaria (PSU) es un test estandarizado escrito realizado desde 2003 para el proceso de admisión a la educación universitaria y el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) es el sistema de evaluación de la Agencia de Calidad de la Educación (ministerio de la Educación) que se aplica a todos los estudiantes de enseñanza vasca y media.

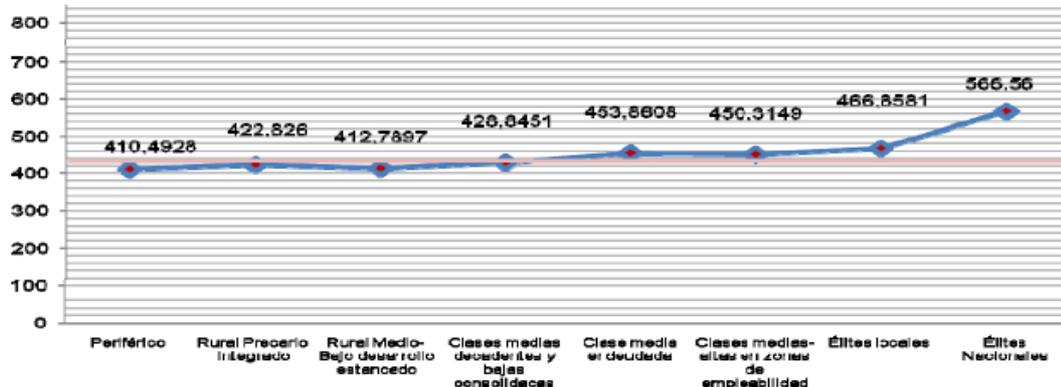
Ingreso Total por Hogar

Fuente: CASEN 2009



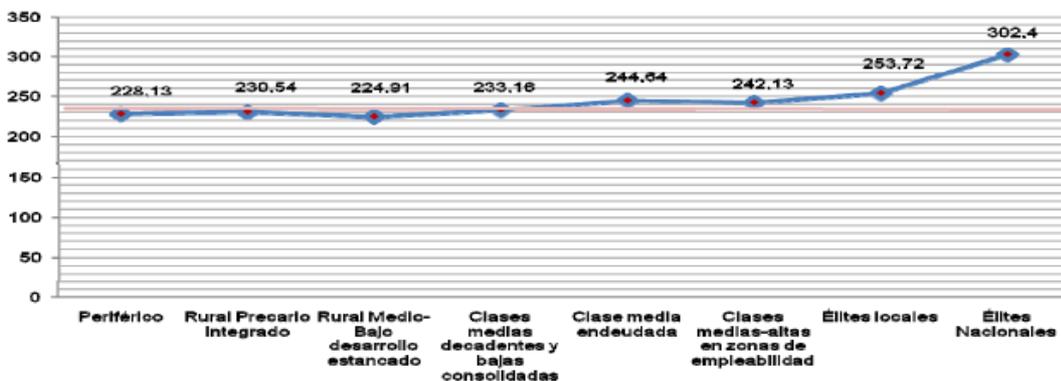
PSU 2009

Fuente: DEMRE



SIMCE 2do medio 2008

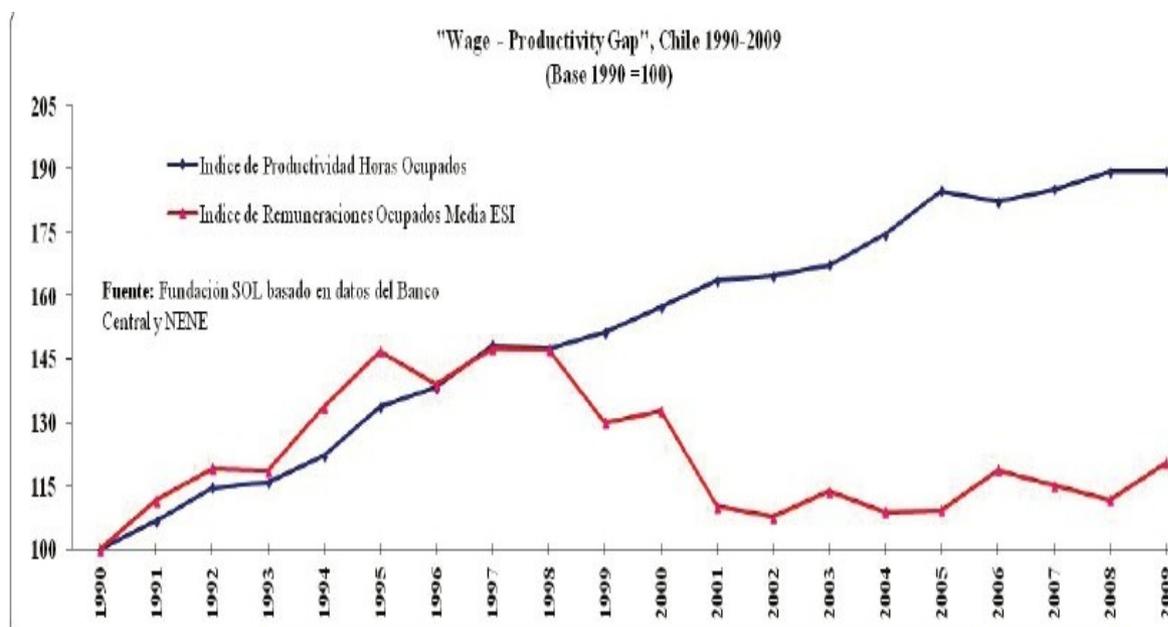
Fuente: Ministerio de Educación



Fuente: Elaboración de **Azócar, Carla**; **Azócar, Carlos**; *Mayol, Alberto*, 2011.

Anexo 6: Evolución de los salarios y de la productividad -1990-2009

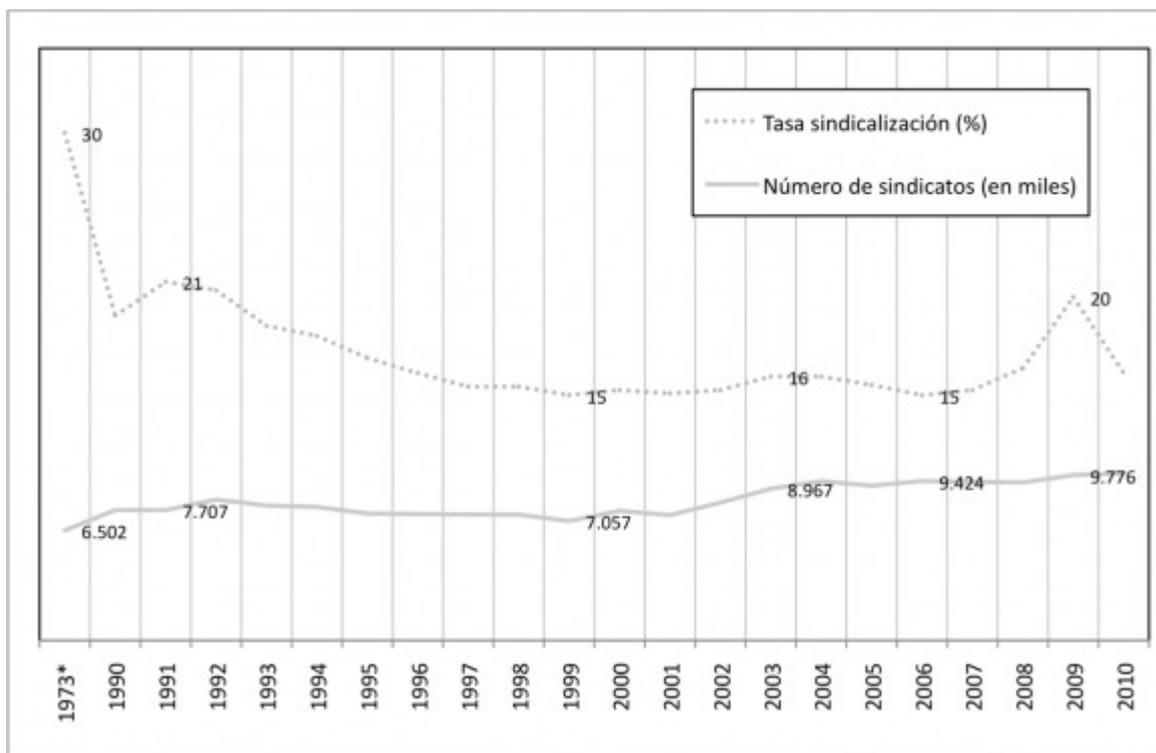
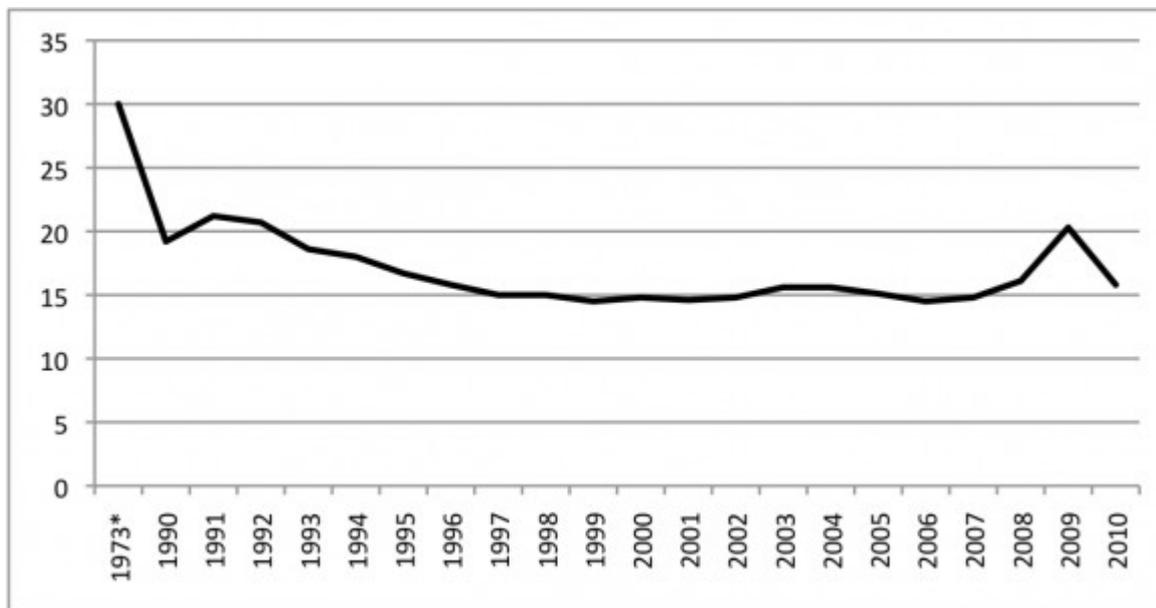
Excedente productivo no remunerado



Fuente: Narbona, Páez, 2014.

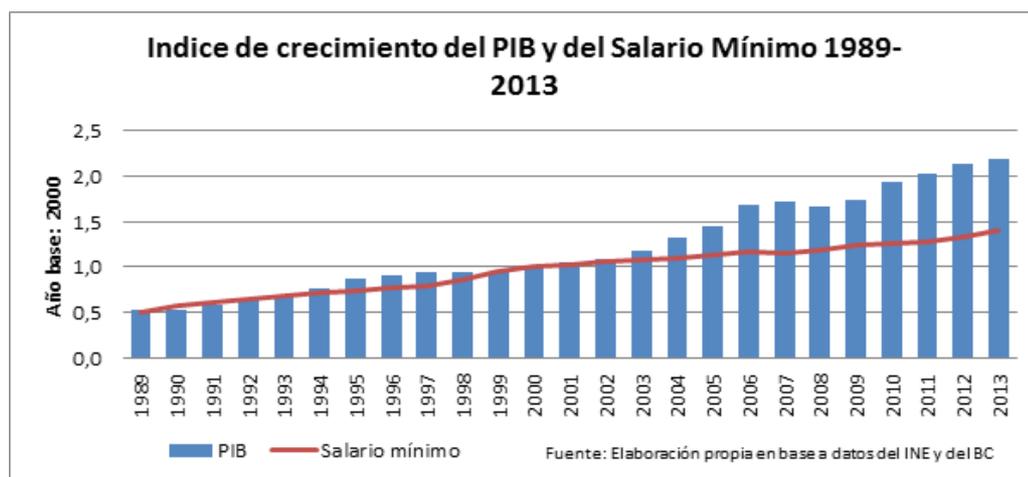
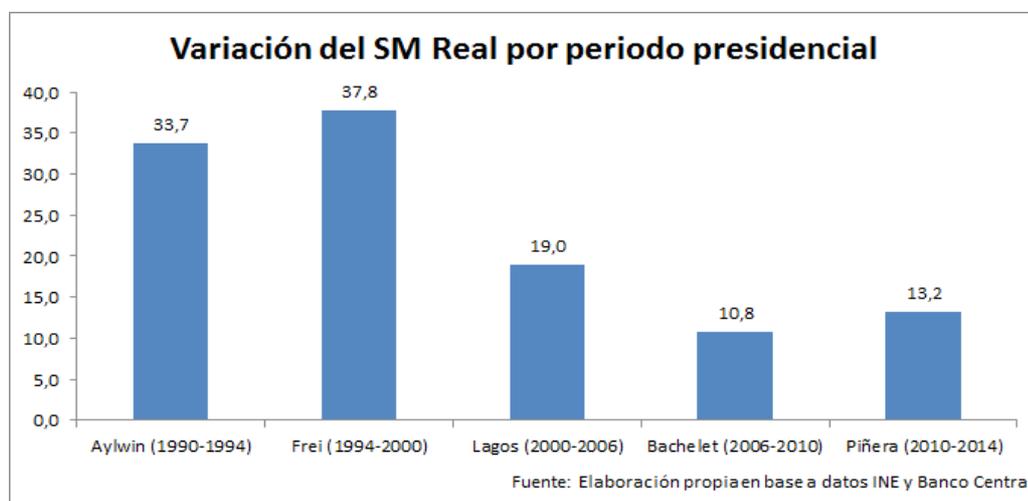
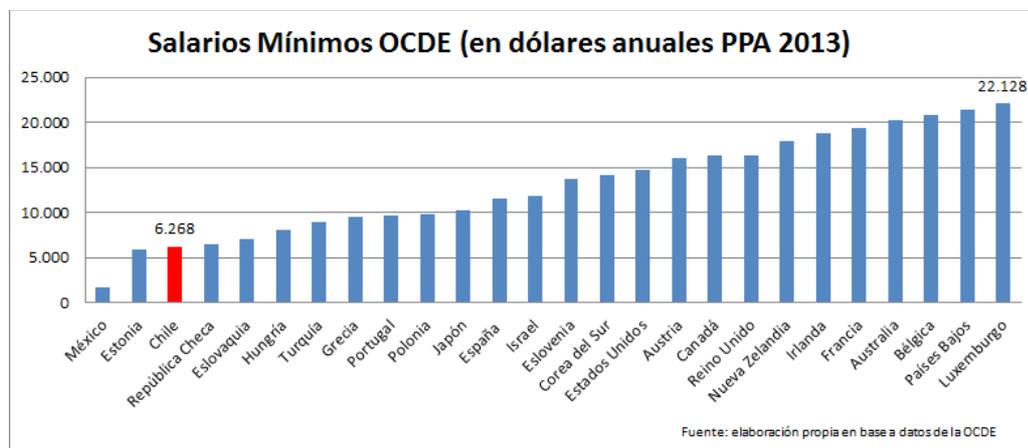
Anexo 7: tasa de sindicalización y número de sindicatos en Chile – 1990-2010

Evolución de la tasa de sindicalización (en% de la PEA)



Fuente: Elaboración de Francisca Gutiérrez, según datos de la Dirección del Trabajo, 2010 (Gutiérrez, 2013).

Anexo 8: Salarios mínimos en Chile. Evolución y comparación internacional



Fuente: Elaboración de Sebastián Osorio y Gabriel Rivas (Osorio y Rivas, 2014).